

temas de coyuntura

¿Culturalmente pobres? Las formas de pensar frente a la riqueza y la pobreza

Los desafíos del sistema escolar venezolano: el caso de la universalización de la educación inicial

¿Es Venezuela una sociedad abierta?

Declive de una economía petrolera y la cuestión de la vivienda en las políticas públicas

Indicadores demográficos

49



Banco Central
de Venezuela

Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales
UCAB



Temas de Coyuntura

49/junio 2004

Publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Católica Andrés Bello

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del
Banco Central de Venezuela

Índice

ARTÍCULOS	3
¿Culturalmente pobres? Las formas de pensar frente a la riqueza y la pobreza. Tito LaCruz	5
Los desafíos del sistema escolar venezolano: El caso de la universalización de la Educación Inicial Blas A. Regnault M.	33
¿Es Venezuela una sociedad abierta? Una aproximación a la movilidad intergeneracional utilizando la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza Lissette González A.	57
Declive de una economía petrolera y la cuestión de la vivienda en las políticas públicas Irene Layrisse de Niculescu	89
CRÍTICAS BIBLIOGRÁFICAS	117
INDICADORES DEMOGRÁFICOS	131
NORMAS DE PUBLICACIÓN	149

COMITÉ EDITORIAL

Luis Pedro España
Matías Riutort
Anitza Freitez
Néstor Luis Luengo
Josué Bonilla

COMITÉ DE ARBITRAJE

ÁREA ECONÓMICA

María Antonia Moreno (UCV)
María Beatriz Orlando (Center for Global Development, USA)
Rafael Muñoz (Essex University - Inglaterra)
Daniel Lahoud (UCAB)
Ricardo Penfolt (IESA)
Harold Zavarce (BCV)
Francisco Vivancos (UCV-UCAB)
Luis Zambrano (UCV-UCAB)

ÁREA DE DEMOGRAFÍA

Gabriel Bidegain (SELA)
Brenda Centeno (Investigador - Miembro IUSSP)
Rahiza Carvallo (INE-UCV)
Dalia Romero (Fundación O. Cruz - Rio de Janeiro - Brasil)
Mauncio Phelan (UCV)
Irene Casique (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM -UNAM - México)

ÁREA SOCIOPOLÍTICA

Ángel Álvarez (UCV)
José Vicente Carrasquero (USB)
Bernard Mommer (Oxford University - Inglaterra)
Alberto Gruson (CISOR)
Marino González (USB)
Thaís Maingon (UCV Cendes - UCAB)
Víctor Maldonado (UCV)

Producción y Composición: Publicaciones UCAB
Diseño de Portada: Manuel Ponte/IMAGINART C.A.
Impresión: Editorial Texto, C.A.



PUBLICACIONES UCAB
Edificio de Biblioteca. Tercer Piso
Montalbán La Vega - Apartado 20.332
Caracas 1020 - Venezuela
Telf.: 407.42.08 / 407.43.78
Fax: 471.33.07

ARTÍCULOS

- ¿Culturalmente pobres? Las formas de pensar frente a la riqueza y la pobreza

Tito LaCruz

- Los desafíos del sistema escolar venezolano: el caso de la universalización de la Educación Inicial

Blas A. Regnault M.

- ¿Es Venezuela una sociedad abierta? Una aproximación a la movilidad intergeneracional utilizando la Encuesta de determinantes culturales de la pobreza

Lissette González A.

- Declive de una economía petrolera y la cuestión de la vivienda en las políticas públicas

Irene Layrisse de Niculescu

¿CULTURALMENTE POBRES? LAS FORMAS DE PENSAR FRENTE A LA RIQUEZA Y LA POBREZA

TITO LACRUZ *

Resumen

El artículo resume una investigación del IIES publicada bajo el nombre "Detrás de la Pobreza". Mediante un encuestamiento muestral a escala nacional, se exploran las relaciones entre las orientaciones actitudinales de las personas con su calidad de vida. Específicamente se exploran tres tópicos: la percepción sobre el control del cambio, las preferencias valorativas sobre lo público y la confianza. Estos tópicos, resumidos en los datos como tipologías, son capitales para la superación de la pobreza pues, en principio, las personas con alto control sobre el cambio, valores modernos sobre lo público y confianza en quiénes representan sus intereses deberían mostrar mejores niveles de vida que el resto de las personas. Los hallazgos del estudio muestran que esta relación es débil, presentando incluso algunas contradicciones. No obstante, de igual manera se muestra que un vínculo importante para con los logros es la educación, pero ésta ha sido deteriorada por las crisis sociales y económicas.

Palabras claves: Pobreza, Actitudes, Control, Confianza, Valores, Grupos Socioeconómicos.

Abstract

This article summarizes a research developed by the IIES and published with the name "*Behind the Poverty*". Through a survey at national scale, this work explores the relationships among personal orientations and quality of life. Specifically, three topics are explored: the perception about the control of change, the value preferences about public life and trust. These topics, synthesized in the data as typologies, are capital to overcome poverty because, theoretically, people with high control about change, modern values about public life and trust should show better levels of life than the rest of people. The discoveries of the study show that this relationship is weak, even with some contradictions.

* Sociólogo. Investigador del Departamento de Investigaciones Socio-políticas del IIES-UCAB e Investigador Asociado del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CISOR).

Nevertheless, it shows that an important link towards material success is education, but it has been deteriorated by the economic and social crises.

Key words: Poverty, Attitudes, Control, Trust, Values, Socioeconomic Groups.

Résumé

Cet article résume une recherche réalisée par l'IIES et publiée sous le nom «*Derrière la Pauvreté*». Avec une étude à échelle nationale, ce travail explore les rapports parmi les orientations personnelles et le niveau de la vie. Spécifiquement, trois sujets sont explorés: la perception sur le contrôle du changement, les préférences de valeur sur la vie publique et la confiance. Ces sujets, synthétisés dans les données comme des typologies, sont d'une importance capitale afin de surmonter la pauvreté parce que, théoriquement, les gens avec un haut contrôle sur le changement, des valeurs modernes sur la vie publique et de la confiance devraient montrer meilleurs niveaux de vie qui le reste des gens. Les découvertes de l'étude montrent que ce rapport est faible, même avec quelques contradictions. Cependant, on montre qu'un lien important vers le succès matériel est l'éducation, mais celle-ci a été détériorée par les crises sociales et économiques.

Mots Clés: Pauvreté, Attitudes, Contrôle, Confiance, Valeurs, Groupes Socio-économiques.

INTRODUCCIÓN: *DETRÁS DE LA POBREZA*¹

Otros trabajos del Proyecto Pobreza han explorado las vertientes económicas, sociales y político-institucionales del problema de la pobreza en Venezuela. En éste se explora la relación entre condición sociomaterial y cultura, más específicamente a un aspecto de ésta: las orientaciones que guían las conductas de los individuos. En este sentido, la investigación se orienta principalmente hacia el mundo de lo individual, esto sin perder de vista lo societal. Nos interesa saber de los individuos qué piensan sobre el hecho productivo y qué tanta voluntad de control sobre su situación tienen, así como la valoración que hacen estos de lo público y su confianza en la representación de sus intereses. Esto es porque existe el supuesto de que las personas que presentan orientaciones cónsonas con la modernidad, deberían tener un mejor nivel de vida pues demostrarían un mayor control sobre su destino siendo esto último una de las expresiones de la modernidad: somos productos de nuestra voluntad y no de la providencia.

1 El artículo resume un trabajo del IIES en el marco del Proyecto Pobreza, recientemente publicado bajo el nombre "Detrás de la Pobreza", contemplando sólo una parte del análisis de datos y sus conclusiones. Se deja para la lectura del libro, además de la exploración más detallada de los datos, una larga reflexión sobre modernidad, vida social, élites, democracia, superación de la pobreza y orientaciones individuales en Venezuela.

El estudio, y de hecho el Proyecto Pobreza, parten de la multidimensionalidad del problema y sus diferentes frentes. No es un asunto con una sola arista. Estas relaciones entre modernidad y bienestar sociomaterial se ven alteradas en Venezuela donde se ha dado un crecimiento sostenido de la pobreza en los últimos 25 años alcanzando al 68% de los hogares para el 2002. Esta pobreza sostenida y las relaciones clientelares sobre las cuáles se han tejido las relaciones públicas, no sólo han afectado los aspectos sociomateriales de la vida social, afectan también los aspectos político-institucionales y los socioculturales. En otros términos, la pobreza perjudica a la productividad, el poder adquisitivo y el ahorro, pero también a las instituciones, los valores y al mismo sistema democrático.

Bien sabemos por adelantado que la pobreza afecta la capacidad de logro de las personas pues ésta actúa como un catalizador oculto que impide justamente que esas actitudes modernas se traduzcan en bienestar. Si la modernidad busca consolidar un orden basado en la correspondencia del esfuerzo y trabajo con los logros sociomateriales, la pobreza rompe este equilibrio de manera caótica. Siendo éste el caso, la relación entre actitudes modernas y bienestar se ve más que impedida, se ve viciada.

La temática que abordamos en el estudio no es nueva, muchas investigaciones se han abocado a entender el nexo entre productividad o condiciones sociomateriales con los aspectos culturales, mentales o intelectuales de las personas y las sociedades. Habiendo explicado y buscado respuestas en lo económico, muchas de ellas no satisfactorias o incompletas, desde hace algún tiempo las miradas se dirigen con más frecuencia hacia lo institucional y lo cultural. A pesar de la complejidad de estas reflexiones, muchas veces tras el tema de la pobreza existe una interrogante que en ocasiones se manifiesta abiertamente: ¿Nuestra condición de subdesarrollo tiene algo que ver con nuestro modo de pensar y de actuar? ¿Es la pobreza un problema realmente cultural? El tema resulta complejo pues, por un lado, no podemos descartar que existen actitudes que refuerzan condiciones como la pobreza y el desorden; pero, por otro lado, aceptar de entrada que el problema de Venezuela es cultural sería negar que tras el empobrecimiento de los hogares venezolanos existe un proceso que involucra el funcionamiento de las instituciones, las políticas de desarrollo y las deficiencias productivas.

Para el estudio fue todo un desafío el manejo de lo cultural como variable siendo que esta "operacionalización" de lo cultural muchas veces se realiza de manera poco disciplinada dando lugar a muchas confusiones. Se recurre a la idea de cultura para demostrar que el otro, el pobre en este caso, es diferente del resto de la sociedad, encontrando así en la diferencia cultural la explicación de su situación. Se confunde cultura con cualquier expresión actitudinal; se atribuye a la cultura expresiones que son parte de otros ámbitos como la psique individual o el comportamiento de masas. En todo caso, no se plantea la cuestión que pareciera ser más obvia: si la cultura es la esfera donde se construye la identidad de un colectivo, en este caso el venezolano, nos deberíamos preguntar, no sobre lo que nos hace diferentes, sino sobre lo que nos hace iguales. En

otras palabras, frente al problema de la pobreza, el problema no sería la cultura del pobre sino la cultura de la sociedad que produce pobreza.

Por esto la investigación no partió del principio de que la cultura del pobre fuera diferente del resto de la sociedad siendo, además, los pobres la mayoría. Nuestro punto de inicio es que no son las diferencias culturales las que explican la pobreza sino que la relación entre modos de actuar y de pensar y las condiciones sociomateriales es más compleja que la afirmación de que una determina la otra. Esto principalmente por dos razones: primero, porque la realidad social termina siendo muy rica en su variedad de situaciones, combinando materialismo y cultura en proporciones diferentes; y segundo, por la existencia de múltiples mundos que componen lo social, empezando por lo individual, pasando por lo familiar y lo institucional, hasta llegar a lo societal. El juego que hacen estos mundos pasa muchas veces de manera desapercibida, lo que hace que se confundan conceptos complejos como los referidos a los individuos, las masas y la sociedad. Estas son, grosso modo, las ideas sobre las cuales se funda este trabajo.

CONFORMACIÓN DE LOS TIPOS CULTURALES

Con la ayuda de un conjunto de proposiciones presentadas en una encuesta a escala nacional, la persona podía expresar su nivel de acuerdo o desacuerdo con éstas, reflejando así las creencias y los valores sobre asuntos puntuales. Los aspectos técnicos de la encuesta se exponen en uno de los documentos publicados por el Proyecto Pobreza². Igualmente los tipos culturales son expuestos de manera más detallada en "*Detrás de la Pobreza*". Nuestra intención al analizar esta información es explorar la existencia de orientaciones y de actitudes personales que sean cónsonas con el principio fundamental de la modernidad y que son un requerimiento para la superación de la pobreza. El punto de partida son tres aspectos primordiales en las orientaciones individuales para identificar su carácter moderno: el control sobre la realidad, los valores hacia lo público y la confianza en la representación de intereses. A partir de estos tres aspectos se construyeron sendas clasificaciones, unas tipologías temáticas, las cuales luego darán pie a la tipología cultural final. Todo esto con la ayuda de técnicas factoriales de clasificación.

EL FOCO DE CONTROL

Una parte de las preguntas apunta a determinar cómo las personas imaginan la relación entre la acción individual y los resultados obtenidos, esto con miras a dimensionar, de alguna manera, cómo se concibe la posibilidad de intervenir en su entorno y obtener algún resultado. Es lo que identificamos como el foco de control. Es

2 Documento n° 12 de la colección "La pobreza en Venezuela. Causas y posibles soluciones".

la instancia a la que el individuo atribuye la producción de la realidad. Podemos entonces distinguir dos tipos: el *locus externo* y el *locus interno*. En el primer caso, el locus de control externo, el individuo ubica dicha instancia fuera del alcance de su voluntad. En esta perspectiva, por lo tanto, el individuo reconoce en sí poca o ninguna capacidad de incidir en su entorno y en su situación. En el segundo caso, el locus de control interno, el individuo reconoce que él mismo es la instancia, o una de las instancias, que tiene la capacidad de provocar cambios en las situaciones que le rodean. La realidad depende por lo tanto de la acción del individuo.

Más que una polarización entre dos alternativas, las posiciones que tienen los individuos en torno a la autoría del cambio se presenta como una línea continua con gradaciones entre ambos extremos, por lo cual hay espacio para considerar posiciones matizadas. Para quienes reconocen un alto nivel de control sobre la realidad, es decir, donde prevalece el locus de control interno, podemos diferenciar dos matices. Un primer matiz referido a quienes atribuyen este control a la acción individual (*control individual*); y un segundo matiz conformado por quienes atribuyen el control a instancias más colectivas como el país o la sociedad en general (*control interdependiente*), donde el énfasis del control ya no recae sobre el individuo sino es condicionado por algunas instancias sociales. Para quienes reconocen un bajo nivel de control sobre la realidad, el predominio del locus de control externo, un primer matiz identifica a quienes asignan la causalidad del cambio a factores extrasociales como la suerte o el destino (*control metasocial*) donde ninguna instancia individual o colectiva tiene capacidad de control; y un segundo matiz a quienes atribuyen el cambio a factores sociales colocados más allá de la esfera individual pero siempre dentro de lo social (*control dependiente*).

LAS PREFERENCIAS VALORATIVAS

Otro conjunto de preguntas se dirige a explorar el modo en que las personas orientan sus acciones, siendo que una de las ideas de la modernidad es la separación del mundo personal –regido por las relaciones afectivas y difusas– del mundo societal – con relaciones normadas y universalistas. Es lo que llamamos las preferencias valorativas. Son el modo cómo las personas valoran y evalúan las acciones que se llevan a cabo fuera de su entorno inmediato e íntimo. Bien sabemos que el modo de actuar de las personas se fundamenta en gran medida en las particularidades de los contextos: no pretendemos que una persona valore bajo los mismos parámetros su mundo familiar y sus relaciones de trabajo. Ahora bien, el modo de establecer estas preferencias en una sociedad moderna parte del hecho de que existe una clara división entre el mundo de lo personal y el mundo público donde, en nuestro caso, nos interesa explorar esta orientación hacia lo público.

Estas distinciones toman la forma de un conjunto de dicotomías que describen el modo en que el individuo decide actuar: de un lado, las orientaciones propias del mundo

familiar y personal, del otro las orientaciones esperadas en un contexto público y colectivo. Uno de los modos más comunes para establecer estas dicotomías viene del sociólogo Talcott Parsons, cuya propuesta sobre este tema resumimos en el esquema siguiente:

Tabla 1: Las dicotomías valorativas

Descripción de la dicotomía			
Ámbito familiar / personal		Ámbito público / moderno	
<i>Afectividad</i>	Gratificación inmediata de los deseos y necesidades subjetivas	Diferimiento de la gratificación a favor de exigencias o necesidades colectivas	<i>Neutralidad afectiva</i>
<i>Particularismo</i>	Los criterios generales para evaluar son dejados de lado para favorecer la relación particular con el actor o la singularidad de la situación	Los actores y las situaciones son juzgados de acuerdo a criterios generales aplicables a todos los actores o situaciones similares	<i>Universalismo</i>
<i>Adscripción</i>	Se estima al otro de acuerdo a lo que es y a sus atributos subjetivos	La estima es otorgada según el resultado de la acción del otro y lo que hace	<i>Desempeño</i>
<i>Difusividad</i>	Las personas son consideradas en su totalidad y uno se interrelaciona con ellas de manera total	El modo de relacionarse con los otros es tomando en cuenta un aspecto de su ser y de su acción	<i>Especificidad</i>
<i>Orientación hacia sí</i>	La persona decide actuar de acuerdo a objetivos personales	La acción está orientada por los intereses compartidos con los otros	<i>Orientación hacia el colectivo</i>

En el momento de evaluar y sintetizar estadísticamente la información sobre las preferencias valorativas de las personas, nos encontramos con que cuatro dicotomías se comportaron de manera semejante, encontrando que la variable que generaba comportamientos diferenciales era la dicotomía en torno a la adscripción y al desempeño. Esta orientación particular se debe a que la dicotomía adscripción-desempeño señala el modo en que se evalúa al otro, mientras que las otras cuatro dicotomías apuntan hacia la regulación social. Considerando entonces esta doble información, la población quedó clasificada de la siguiente manera:

Tabla 2: La regulación de la acción

Regulación de la acción	Evaluación de los otros	Tipo de preferencia valorativa
Tradicional	Según la adscripción	Tradicional
	Según el desempeño	Tradicional moderado
Moderna	Según la adscripción	Moderno moderado
	Según el desempeño	Moderno

LA CONFIANZA

Por último, había interés en destacar el rol de la confianza como la creencia de que otros (personas o instituciones) puedan representar los intereses propios fuera del entorno social inmediato. La confianza es un lazo importante en el momento de generar espacios asociativos que permitan la creación y la acumulación de capital social, entendiendo por éste la capacidad de las personas de obtener beneficios como resultado de sus relaciones sociales y de su contacto con otras personas e instituciones. Un ejemplo de capital social puede observarse en el mundo del trabajo formal donde la persona, gracias a las redes de relaciones en las cuales se inserta, puede obtener beneficios tales como el mejoramiento de sus habilidades, un mejor y más efectivo desempeño en sus labores, acceso a fuentes de conocimiento e, incluso, protección social. Un ejemplo “perverso” del capital social se da, siguiendo el mismo ejemplo, cuando dicha persona usa estas redes para actuar de manera egoísta y en perjuicio de otras personas.

Según este y otros trabajos donde se ha explorado este punto³, podemos decir que cerca del 70 u 80% de los venezolanos no expresa confianza en las personas que no son de su entorno íntimo. Las lecturas de estos datos pueden ser divergentes pero, sin duda

3 ZAPATA, Roberto (1996) Valores del venezolano. Caracas: Conciencia 21.

alguna, para los venezolanos no es fácil otorgar confianza a los demás, entre otras razones, porque piensan o saben que alguien puede aprovecharse de ellos. Por esto, al tratar el tema de la confianza del venezolano, estamos más bien hablando de su desconfianza. De esta manera, para la clasificación de la población en cuanto a la tipología sobre la confianza, se procedió a medir sus niveles de desconfianza y a partir de estos, mediante una división de los casos por percentiles, se crearon tres grupos más o menos de igual tamaño (más o menos, 33% cada uno).

LOS TIPOS CULTURALES FINALES

A partir de la síntesis estadística de estos tres elementos (control sobre la realidad, preferencias valorativas y confianza) mediante técnicas factoriales, se elaboró una tipología que clasifica a la población según la modernidad de sus orientaciones actitudinales, formando seis tipos culturales que representan al universo en cuestión. De estos tipos, cuyos nombres pretenden ilustrarlos, podemos identificar uno con mayor tendencia a lo moderno –el integrado– y otro que se presenta como el menos moderno –el rezagado. El resto de los tipos, si bien tiende hacia algunos de los polos, por lo general presenta características mixtas.

Cuadro 1: Distribución porcentual y absoluta de la población según tipos culturales

Tipos culturales	Distribución poblacional	
	Absoluto	%
Rezagados	3.544.039	27,6
Tutelados	1.398.238	10,9
Emancipados	3.231.000	25,1
Movilizados	536.518	4,2
Desarraigados	2.428.536	18,9
Integrados	1.703.932	13,3
<i>Total</i>	<i>12.842.263 *</i>	<i>100</i>

* Representa a la población mayor de 18 años para el momento de la encuesta.

- **Rezagados (27,6%).** Dentro de los tipos, es el que representa prácticamente la negación de la modernidad o, en todo caso, el que se encuentra más alejado de ella. Se atribuyen a sí mismos un control muy bajo sobre la realidad, y explican las situaciones en términos tales como la suerte, Dios o el destino. Casi el 75% cree que las oportunidades llegan, no se buscan, o que el rumbo de la vida está ya escrito. Tienen una tendencia bastante clara a favorecer las orientaciones no modernas como la difusividad, el particularismo, la orientación hacia sí mismo, la afectividad, y la valoración de los otros por su adscripción. Se les considera rezagados, puesto que sus creencias no han casi sido afectadas por la modernización de la sociedad venezolana.
- **Tutelados (10,9%).** Es un grupo similar al anterior, sobre todo en sus preferencias valorativas. Se atribuyen también poca capacidad de incidencia sobre la realidad, pero ubican el control sobre este en las instancias sociales, un control de tipo dependiente. Presentan niveles medios de desconfianza, y sus orientaciones valorativas son menos no-modernas que el grupo anterior. Para ellos, la tutoría del Estado o de cualquier otra organización pública es importante para cambiar su situación.
- **Emancipados (25,2%).** Comparte con el grupo anterior la concepción dependiente del control social y la desconfianza, presentando orientaciones más cercanas a la modernidad, particularmente en cuanto a la valoración por el desempeño. La idea de llamarlo emancipado viene por el hecho de que, a pesar de poseer algunas orientaciones no modernas, las personas pertenecientes a este grupo se atribuyen cierto grado de control sobre la realidad.
- **Movilizados (4,2%).** Es el grupo que presenta menor tamaño. La principal diferencia con los grupos anteriores está en que reconoce un control interno de los cambios, de tipo individualista. Presentan niveles medios de desconfianza. Sin embargo, sus orientaciones valorativas apuntan hacia lo tradicional moderado. En cierto sentido, es el grupo que se encuentra en plena transición de lo no moderno a lo moderno.
- **Desarraigados (19%).** Junto a la clase siguiente, es uno de los grupos con orientaciones claramente modernas, pues reconoce un control interno del cambio, con niveles bajos de desconfianza y orientaciones valorativas modernas “puras”. Su orientación a la modernidad es clara, a pesar de que condicionan en cierta medida su acción a la acción de otros actores sociales. Su poca confianza hacia las instituciones los hace desarraigados, y con una orientación marcadamente individual.
- **Integrados (13,3%).** Es la otra clase plenamente moderna, que presenta claras tendencias en sus preferencias valorativas, y se atribuye un buen nivel de control sobre la realidad, que apunta a un control de tipo individualista. A pesar de ello, posee cierto grado de confianza hacia las personas y las instituciones.

CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS CULTURALES

Lo primero que pudiera suponerse al momento de abordar un análisis sobre la relación entre estrato social y los tipos culturales es que debería haber una correlación positiva y relativamente clara entre ambas condiciones. La razón es que gran parte de las nociones que encierran las tipologías parciales sobre las orientaciones modernas (control sobre la realidad en particular, pero también las preferencias valorativas) tienen que ver con un proceso de socialización del individuo donde la escuela y otros agentes socializadores (lugares de trabajo, red de relaciones personales, vida asociativa...) juegan un papel crucial en la conformación de estas orientaciones. En otras palabras, el estrato social debería favorecer una mayor exposición a la modernidad.

Esta “exposición a la modernidad” se relaciona directamente con las capacidades socioeconómicas del individuo y su familia pues implica la inversión de recursos, incluyendo tiempo libre y conocimiento. Los individuos no nacen modernos; es su interacción con estos mundos –el proceso de socialización– la que los hace modernos. Así como la socialización primaria –la interiorización de normas de conducta social en la personalidad psíquica de la persona para facilitar su integración en la vida social– es llevada a cabo por la familia y por la escuela primaria, en el caso de la socialización cívica – la integración de la persona en la dinámica societal dotándola de orientación hacia el colectivo – es la presencia activa de las instituciones sociales, empezando por la misma familia y la escuela en su totalidad, hasta los grandes espacios colectivos como el laboral o el público, la que proporciona al individuo estas orientaciones modernas.

Al observar cómo se comporta la relación entre el estrato y el tipo cultural (cuadro 2) es posible notar que existe cierta relación positiva, sobre todo en las categorías extremas: los tipos culturales con orientación más moderna se corresponden en cierta medida con los estratos más favorecidos y viceversa. Notemos que en los estratos D y E se concentra el 55% de la población total, pero la proporción de estos estratos dentro del tipo cultural de los rezagados –el menos moderno– es del 62%. En el caso de los estratos más pudientes –A y B– éstos son el 14% del total. En el caso del tipo cultural de los integrados esta proporción supera ligeramente al total para llegar al 18%, y en el caso de los desarraigados llega al 19%. Hasta este punto se puede notar la relación positiva entre los estratos y los tipos culturales, a pesar de no presentar un carácter contundente.

Cuadro 2: Distribución porcentual de la población por variables socioeconómicas según los tipos culturales.

Variables	Total	Reza- gados	Tute- lados	Emanci- pados	Movili- zados	Desarrai- gados	Inte- grados
Socioeconómicas		<i>27,60%</i>	<i>10,89%</i>	<i>25,16%</i>	<i>4,18%</i>	<i>18,91%</i>	<i>13,27%</i>
Estrato	100	100	100	100	100	100	100
E	14,33	17,26	15,61	12,90	8,71	12,64	14,10
D	40,90	44,89	40,82	40,14	42,20	38,49	37,12
C	30,67	29,30	31,55	31,89	34,91	29,72	30,54
B	12,09	7,61	10,50	12,74	12,16	16,27	15,46
A	2,01	0,94	1,52	2,33	2,02	2,87	2,78
Nivel Educativo	100	100	100	100	100	100	100
Analfabeto	3,63	4,32	4,86	3,00	2,80	3,16	3,33
Sin nivel	9,17	12,73	8,52	8,28	6,11	7,77	6,95
Primaria	44,20	48,53	46,23	42,49	41,93	41,70	41,03
Secundaria	28,82	25,29	27,60	30,92	32,03	29,60	31,09
Técnico	6,79	4,47	6,95	7,29	10,64	8,08	7,47
Universitario	7,39	4,66	5,84	8,02	6,48	9,69	10,14
Tipo de vivienda	100	100	100	100	100	100	100
Rancho desechos	2,95	2,94	2,67	2,37	3,65	2,85	4,21
Rancho sólido	8,70	9,30	8,94	7,82	6,13	9,34	8,81
Casa de barrio	43,73	48,01	37,35	44,43	48,43	42,54	38,96
Casa rural	21,80	24,35	30,02	20,60	15,61	17,21	20,49
Bloque	3,83	2,94	3,36	4,13	6,70	4,45	3,71
Apartamento	8,23	5,32	7,38	8,54	8,48	10,97	10,40
Casa urbanización	8,01	5,80	8,15	8,56	7,76	9,07	10,04
Apartamento de lujo	0,82	0,52	0,27	1,50	0,49	0,79	0,79
Quinta	1,93	0,83	1,85	2,05	2,75	2,78	2,59

Pero una reflexión más detenida sobre las otras casillas de la tabla no se corresponde con la lógica presentada anteriormente. En el caso de los tutelados, quiénes son el penúltimo tipo en orden decreciente de la orientación moderna, el 12% presente en los estratos A y B no está muy lejos del 14% total. Dicho en otras palabras, pareciera que los estratos A y B tienen tanto “tutelaje” como la media nacional. Para los desarraigados y los integrados, los dos tipos más modernos, el 51% en los estratos D y E no difiere significativamente del total.

Vamos ahora a revisar la relación con otra variable: el nivel educativo. Las observaciones son más o menos similares. El 65,6% de los rezagados no ha superado la primaria, cifra que – como es de esperar – supera el total (57%). Para el caso de los tipos culturales más modernos la relación es positiva con los niveles educativos superiores a la primaria: un 43% del total ha pasado de la primaria; 49% en el caso de los movilizados, 47% en los desarraigados y 49% en los integrados. Sin embargo, el

examen de las otras casillas nos da señales confusas. Para los tutelados, el porcentaje de gente con secundaria o más (13%) es casi el mismo que el total (14%). Es curioso que los porcentajes de analfabetismo y de gente sin nivel educativo en los desarraigados y los integrados no se muestren muy diferentes, no sólo del total, sino de otras clases no modernas como los tutelados.

Si leemos los porcentajes por categorías de nivel educativo, vemos cómo la variable, en efecto, escala. Es decir, a medida que vamos hacia tipos culturales más modernos, los niveles educativos más altos tienden a presentar porcentajes mayores y viceversa. En el caso de la primaria se ve claramente una tendencia lineal ascendente; a medida que el tipo es más moderno, menor porcentaje de población se concentra en dicho nivel. A partir de esta última observación pareciera que lograr niveles de escolaridad mayores a la primaria es crucial para el proceso socializador, posiblemente por la conformación mucho más universalista, incluso en términos organizacionales y docentes, tanto de la secundaria como de los otros niveles superiores: técnico y universitario. No obstante, sabemos también que quienes en mayor medida alcanzan estos niveles de instrucción no son precisamente los más pobres, ya que en general se requiere un mínimo de condiciones materiales para completarlos.

Si observamos la relación con otras variables relacionadas con el estrato socioeconómico, como es el caso del tipo de vivienda, las contradicciones siguen presentes. Si bien para los integrados el 13,4% que habita en casa, quinta o apartamento de lujo resulta lógico al superar el 10,8% total, resulta muy disonante que los desarraigados y los integrados tengan mayor proporción de gente viviendo en ranchos (12% y 13% respectivamente) que los rezagados (12%) y los tutelados (11%).

Haciendo referencia a los contextos sociales inmediatos a los individuos, se procedió a examinar la relación de los tipos culturales con algunas variables que permitieran caracterizar el entorno familiar de la persona. Una de estas variables fue el origen familiar, donde interesaba buscar la relación entre las orientaciones modernas y el origen extranjero o nacional de la persona. A diferencia de lo que se piensa, no se mostraron mayores relaciones de dependencia entre estas variables. Las proporciones tienden a mantenerse estables, así por ejemplo el 86,2% de las personas son venezolanos (incluyendo, descendientes de venezolanos) y esta proporción se mantiene para los tipos culturales: 86% en los rezagados y 88% en los integrados. En el caso de los europeos y descendientes de europeos (4,3%) su presencia es casi estable en todos los grupos: 3,3% en los rezagados y 5,7% en los desarraigados.

Cuadro 3: Distribución porcentual de la población por origen familiar según los tipos culturales.

Origen familiar	Total	Reza- gados 27,60%	Tutelados 10,89%	Emanci- pados 25,16%	Movili- zados 4,18%	Desarrai- gados 18,91%	Integrados 13,27%
	100	100	100	100	100	100	100
Venezolano	86,17	85,76	87,87	85,47	88,01	84,79	88,35
Latinoamericano	3,13	4,10	2,26	3,02	2,44	3,31	1,98
Descendiente de							
LatinoAmer	3,70	4,30	4,01	3,97	3,31	3,08	2,65
Europeo (1)	4,33	3,35	3,20	4,52	4,20	5,75	4,91
Otros	2,70	2,51	2,65	3,01	2,04	3,07	2,14

(1) Europeos de origen y descendientes de europeos

En cuanto a la estructura familiar (nuclear, extendida, pareja sola) no se observaron mayores relaciones con el tipo cultural. Sin embargo, sí se observan algunas relaciones con quién crió a la persona. El 75% declaró haber sido criado por la mamá – situación cónsona con el carácter matrilineal de la familia venezolana. Si observamos estas proporciones con los tipos culturales, podemos notar que tienden a aumentar, ligera pero notoriamente, con los tipos de mayor tendencia a las orientaciones modernas. El 79% de los desarraigados y el 81% de los integrados fueron criados por sus madres. En el caso de la crianza compartida (padre y madre) se encontró que el 16% de los casos se encontraban en esta modalidad. La proporción tiende a aumentar en los tipos de los rezagados y los tutelados: 20% en los rezagados y 19% en los tutelados. Por otro lado, usando una variable que estima la estabilidad familiar partiendo de las separaciones dentro de la familia, al observar la relación de los tipos culturales con la estabilidad familiar podemos ver que los ambiente estables, tanto de la familia de la persona, como de sus antecesores, tiende a favorecerse en los tipos culturales de los integrados y los desarraigados. Un 57% resultó presentar ambientes familiares bien estables, pero este porcentaje llega al 63% en los movilizados y desarraigados, y 66% en los integrados.

Cuadro 4: Distribución porcentual de la población por crianza y estabilidad familiar según los tipos culturales.

Variables Demográficas y Familiares	Total	Reza- gados	Tute- lados	Emanci- pados	Movili- zados	Desarrai- gados	Integrados
		27,60%	10,89%	25,16%	4,18%	18,91%	13,27%
Quién lo crió	100	100	100	100	100	100	100
Mamá	75,28	70,08	71,58	76,18	78,01	79,04	81,25
Papá	2,67	3,12	3,07	2,55	3,31	1,74	2,77
Ambos	15,97	19,77	18,80	15,29	13,13	13,74	11,14
Familiar	4,81	5,54	5,18	4,91	4,03	4,06	4,02
Otro	1,27	1,47	1,38	1,07	1,51	1,43	0,82
Estabilidad familiar	100	100	100	100	100	100	100
Todos estables	57,50	51,28	50,95	57,07	63,10	63,52	66,27
Estables; antecedentes inestables	35,03	38,63	40,24	35,80	30,46	31,22	28,68
Inestable; antecedentes estables	3,49	4,70	3,26	3,39	3,41	2,45	2,87
Todos inestables	3,98	5,39	5,54	3,73	3,03	2,81	2,18

Un grupo de variables que se exploró fue aquél relacionado con las aspiraciones y los aspectos vivenciales de las personas. Frente a la pregunta sobre las aspiraciones a la riqueza de las personas, el 32,8% expresó que le gustaría ser igual de rico. Como es de esperarse, estas proporciones son mayores en tipos como los rezagados (38,8%) y los tutelados (35%); en el caso de los tipos desarraigado e integrado, la tendencia es a aspirar a la riqueza. El 18% de la población desea ser muy rica, pero para los desarraigados esta proporción es del 22% y para los integrados el 27%. Esta tendencia se confirma en la pregunta sobre el porqué se trabaja. La idea del trabajo como forma de manutención se relaciona un poco con los tipos menos modernos, mientras que el trabajo como forma de superación – incluso material – se relaciona con los tipos modernos. Igual sucede con la preferencia por ser empleado o dueño: ser dueño tiende a relacionarse con los tipos modernos, obviamente por el deseo de control, y las aspiraciones de estos grupos.

Cuadro 5: Distribución porcentual de la población gustos sobre riqueza y percepción del trabajo según los tipos culturales

Vivencias y gustos	Total	Reza- gados	Tute- lados	Emanci- pados	Movili- zados	Desarrai- gados	Integrados
		27,60%	10,89%	25,16%	4,18%	18,91%	13,27%
Cuán rico le gustaría ser	100	100	100	100	100	100	100
Igual de rico	32,85	38,85	35,45	34,25	28,32	27,96	23,96
Rico	45,80	42,62	49,46	44,79	54,28	47,10	46,77
Muy rico	17,97	13,73	11,88	17,78	14,71	22,36	26,92
No contesta	3,39	4,80	3,21	3,18	2,69	2,58	2,35
Para qué trabaja	100	100	100	100	100	100	100
Para mantenerse	39,10	40,36	41,06	38,52	41,82	37,52	37,32
Para hacerse rico	1,12	0,73	0,57	1,10	0,55	1,17	2,53
Para superarse	19,59	15,08	17,42	20,93	20,73	23,43	22,40
No contesta	40,19	43,82	40,95	39,45	36,90	37,89	37,74

Finalmente se exploró la relación entre las edades de las personas entrevistadas y los tipos culturales. Si bien no se espera encontrar alguna relación contundente, pudiera ser imaginable que los tipos más modernos estuvieran en relación con edades menores que las presentadas por los tipos menos modernos. Sin embargo, tal como se muestra en el cuadro siguiente, no existen relaciones contundentes. El promedio de edad de toda la población es de casi 37 años, promedio que se repite más o menos en todos los tipos culturales: los integrados presentan la edad más baja con 35,6 años y los rezagados la edad más alta con 37,3 años. Si observamos la distribución por grupos de edad dentro de cada tipo cultural podemos notar que no presenta mayores diferencias con la distribución total. Aproximadamente entre 26% y 28% para el rango entre 18 y 25 años salvo para los integrados que presentan 31%; 26% para el rango entre 26 y 35 años donde los rezagados muestran 24%; un tercio de la población (32,3%) entre 36 y 55 años, siendo los movilizados quienes presentan un 35%; y, finalmente, con más de 56 años existe un 13% de la población, sin mayores diferencias entre los tipos culturales.

Cuadro 6: Distribución porcentual de la población por grupos de edad según los tipos culturales.

Grupos de edad	Total	Reza- gados	Tute- lados	Emanci- pados	Movili- zados	Desarrai- gados	Integrados
		27,60%	10,89%	25,16%	4,18%	18,91%	13,27%
Edad promedio	36,8	37,3	36,9	36,3	36,9	37,0	35,9
De 18 a 25 años	28,4	28,8	25,6	28,8	26,4	28,0	30,8
De 26 a 35 años	26,0	23,7	28,4	27,5	25,9	26,4	25,3
De 36 a 55 años	32,3	33,2	33,2	31,3	34,6	32,0	31,6
De 56 y más años	13,2	14,3	12,8	12,4	13,2	13,6	12,4

La naturaleza subjetiva de las variables que conforman los tipos culturales hace que éstas sean variables “duras”, es decir, que difícilmente presenten una correlación clara y contundente con variables objetivas como los estratos socioeconómicos. A pesar de esto, como hemos observado, sí existen algunas relaciones, pero no son contundentes. Las relaciones entre los estratos y las orientaciones actitudinales no son del todo contundentes, mostrando incluso algunas contradicciones. La valoración del individuo sobre los temas de control, valores modernos y confianza no es la variable que determina sus logros sociomateriales. Sin embargo, la educación –variable fundamental en la adquisición de orientaciones modernas– tiene una relación un poco más clara con los estratos pero, de igual manera, deja algunos contrasentidos. La interrogante es cuál estrato ocuparían algunas personas con niveles educativos medios y altos y que se encuentran en los estratos D y E de existir condiciones económicas más favorables. Debemos tener en cuenta que las orientaciones modernas no se adquieren con el estrato directamente; es en la medida en que el estrato expone a las personas a ambientes modernos (escuela, universidad, trabajo formal, redes de capital social, vida asociativa) que éstas adquieren actitudes modernas.

EL PESO DE LAS VARIABLES EN LA ORIENTACIÓN ACTITUDINAL

Con miras a determinar la relación que existe entre diversas variables con la orientación actitudinal, se procedió a calcular las correlaciones entre éstas, tanto para el total de la población como para cada tipo cultural en particular. A efectos de estas correlaciones, con la ayuda de técnicas factoriales, se construyó una variable continua que sintetizara a estas tres variables parciales⁴. En el cuadro siguiente se presentan las

4 Para las correlaciones se requieren variables continuas; sin embargo, con un margen de error, se pueden usar variables ordinales, como es el caso con el nivel educativo. Siendo que la

correlaciones resultantes entre las variables seleccionadas, la orientación actitudinal –la variable continua sintética construida para este análisis– y el nivel educativo tanto para el total de la población como para los diferentes tipos culturales.

Cuadro 7: Correlaciones de la orientación actitudinal con otras variables por orden de importancia según tipo cultural

	<i>Total</i>	<i>Integrados</i>	<i>Desarraigados</i>	<i>Movilizados</i>	<i>Emancipados</i>	<i>Tutelados</i>	<i>Rezagados</i>
1ra variable	<i>Promedio educativo del hogar (0,25)</i>	Promedio educativo del hogar (0,32)	Nivel educativo (0,29)	Estrato (0,20)	Promedio educativo del hogar (0,21)	Promedio educativo del hogar (0,19)	Grupo religioso (0,16)
2da variable	<i>Nivel educativo (0,24)</i>	Nivel educativo (0,31)	Promedio educativo del hogar (0,28)	Promedio educativo del hogar (0,17)	Nivel educativo (0,20)	Nivel educativo (0,17)	Asociatividad (0,13)
3ra variable	<i>Estrato (0,23)</i>	Estrato (0,30)	Estrato (0,26)	Nivel educativo (0,15)	Estrato (0,19)	Estrato (0,15)	Promedio educativo del hogar (0,13)
4ta variable	<i>Asociatividad (0,18)</i>	Ingreso (0,21)	Ingreso (0,21)	Ingreso (0,15)	Asociatividad (0,16)	Asociatividad (0,11)	Nivel educativo (0,12)
5ta variable	<i>Ingreso (0,17)</i>	Asociatividad (0,12)	Asociatividad (0,16)	Asociatividad (0,14)	Ingreso (0,15)	Grupo Religioso (0,09)	Relación a personas (0,12)

Hay que recordar que la naturaleza subjetiva de estas variables, como lo expresamos anteriormente, hace que sean “duras” al momento de establecer indicadores estadísticos de asociación o causalidad; así pues, si bien los indicadores obtenidos no son numéricamente altos, para este caso los consideramos muy relevantes. En el caso de las correlaciones con la orientación actitudinal para *el total* de la población, podemos notar que las variables educativas tanto individuales (el nivel educativo de la persona) como las del hogar (el promedio educativo del hogar) presentan una relación positiva importante con la orientación actitudinal, en ambos casos con niveles semejantes de correlación (alrededor de 0,24). Esta correlación se refleja luego con el estrato (0,23). En una escala menor, existe también una relación positiva con la asociatividad y el ingreso.

Este procesamiento nos ayuda a corroborar algunas ideas obtenidas del análisis descriptivo de los tipos culturales. Una variable que tiene un papel importante en las orientaciones actitudinales son las variables educativas. Este procesamiento coloca a

“ordinalidad” de los tipos culturales no es del todo exacta, se prefirió entonces crear esta variable sintética a través de métodos factoriales, específicamente el análisis de componentes principales.

éstas como el conjunto más influyente sobre las orientaciones, confirmando también el peso positivo de la educación en la modernidad de las personas.

Sólo en dos casos no se presenta la educación como la variable con mayor correlación con la orientación actitudinal. En el caso de *los movilizados*, es el estrato social quien presenta la mayor correlación. Es en este grupo donde pudiera eventualmente explorarse una relación más clara entre condiciones socioeconómicas y orientaciones modernas, teniendo presente que este tipo cultural solo abarca un poco más del 4% de la población. Para el caso de *los rezagados* mencionábamos la razón por la que no era la educación la variable con mejor correlación; sin embargo, el hecho de que ésta sea la asociación a grupos religiosos merece una reflexión más detenida. Un procesamiento rápido entre los tipos culturales y las religiones nos muestra que no existen mayores diferencias: más o menos 85% son católicos; del 15% restante, 5% son evangélicos, 5% ateos, 2% judíos y el 3% queda repartido entre otras religiones. Estas proporciones se presentan de manera parecida en todos los tipos culturales. Por otro lado, no se trata tampoco de que el grupo de los rezagados tenga una mayor tendencia hacia la asociatividad religiosa que los otros grupos; todo lo contrario, es el grupo con mayor porcentaje de personas que nunca han tenido participación en asociaciones de este tipo (67%). La lectura que se puede hacer de este resultado es que en este grupo la asociatividad religiosa se relaciona más positivamente con la orientación actitudinal. En otras palabras, dentro de los rezagados la gente que participa en asociaciones de tipo religioso presenta orientaciones actitudinales más modernas en relación con el resto de las personas dentro de este tipo cultural. De alguna manera, si nos atenemos estrictamente a los resultados, frente a la ausencia de la escuela, pareciera que la Iglesia o el grupo religioso los que hacen el papel de agentes de socialización.

AL INTERIOR DE LOS TIPOS CULTURALES

Intentando profundizar más en la naturaleza y la descripción de estos tipos culturales, se realizó una exploración taxonómica hacia su interior para saber, a través de la clasificación de los datos, cómo se constituyen dichos grupos y quiénes lo conforman. Para este procesamiento se recurrió a las técnicas del análisis de correspondencias múltiples, y a la clasificación mixta. Siendo que nuestro interés es más descriptivo que estadístico, pues nos concierne más saber dentro de un universo amplio de variables cuáles describen y clasifican mejor dentro de un tipo cultural, se prefirió la amplitud de variables en el análisis al rendimiento óptimo de los indicadores estadísticos. Después de todo, y a pesar de la gran cantidad de variables, los factores construidos para la clasificación presentaban niveles aceptables de explicación.

Dado que puede ser extenso el análisis de las clasificaciones resultantes (unas 22 clases en total como puede observarse en la tabla), en esta parte presentamos la síntesis

de estas clasificaciones y en el trabajo “*Detrás de la Pobreza*” presentamos la descripción detallada de estas. A continuación reseñamos las clases obtenidas para cada uno de los tipos culturales.

Cuadro 8: Tipos obtenidos en la clasificación mixta según tipo cultural

Clase	Tipos culturales					
	Movilizados	Integrados	Emancipados	Rezagados	Desarraigados	Tutelados
1	Individualista (47%)	Popular Trabajadora (39%)	Popular Trabajadora (52%)	Trabajador (61%)	Popular Trabajadora (57%)	Trabajador (77%)
2	Interdependiente tradicional (10%)	Profesional Urbana (31%)	Profesional Urbano (19%)		Profesional Urbano (19%)	Interdependiente tradicional (3%)
3	Interdependiente moderno (23%)	Excluido (9%)	Excluido (10%)	Excluido (14%)	Excluido (3%)	—
4	Ama de casa (20%)	Ama de casa (21%)	Ama de casa (19%)	Ama de casa (25%)	Ama de casa (21%)	Ama de casa (20%)

En el tipo cultural de *los movilizados*, se obtuvieron cuatro clases. A diferencia de los otros tipos culturales, las variables que mejor discriminan dentro de este grupo son las orientaciones actitudinales. Un primer grupo es caracterizado por los que presentan un *control de tipo individualista*, un nivel de desconfianza media y un tipo de preferencias valorativas correspondiente al tradicional y a la valoración por desempeño. Un segundo grupo se caracteriza por la *desconfianza baja, la preferencia valorativa tradicional, y un tipo de control interdependiente*. Un tercer grupo se describe por la *alta desconfianza, el control interdependiente y las preferencias valorativas modernas*. Un último grupo, que esta vez sí se caracteriza por variables sociales, es el de *las amas de casa*.

Dentro del tipo cultural de *los integrados*, se pueden distinguir cuatro clases. La primera la identificamos como *la popular trabajadora* y es el grupo de mayor peso dentro de los integrados. Tiene un nivel educativo básico, y en ella el trabajo es visto como una forma de manutención. Concentra casi la mitad de los integrados que provienen de escuelas públicas, y un 80% de los integrados con categoría ocupacional de obreros. Casi la mitad de este grupo proviene del estrato D. Un segundo grupo es también caracterizado por variables laborales, en este caso –los identificamos como *los profesionales urbanos*– la categoría de ocupación característica es la de empleado, residentes en su mayoría de la Gran Caracas. Una buena parte de este grupo es de nivel universitario y proviene del estrato B. Su carácter holgado –por lo menos, no limitado a la supervivencia– les permite concebir el trabajo como un medio de superación. El tercer grupo, uno de los que denotan las inconsistencias de las relaciones entre nivel socioeconómico y tipo cultural, es el de *los excluidos*. Representa un 9% dentro de los integrados. Sus integrantes carecen de nivel educativo y provienen del estrato E. Se

- Otra constante es la existencia de subgrupos que son caracterizados por su *pobreza extrema*: provienen del estrato E, no tienen trabajo y no pasaron por el sistema formal de educación. Según sea el tipo cultural donde se presente este grupo constante, tienen una mayor o menor proporción dentro de cada tipo cultural: desde 3% en los desarraigados hasta 14% en los rezagados, los dos extremos de los tipos culturales. Esto nos confirma lo mencionado anteriormente. Si bien hay una relación positiva entre tipos culturales no modernos y estratos sociales bajos, esta relación no es ni lineal ni contundente, pues existen algunos grupos que deben ser tomados en cuenta, ya que no se corresponden con dicha relación. Nuestra duda, presentada anteriormente, se hace presente: estos integrados o desarraigados pertenecientes a las clases excluidas, ¿seguirían siéndolo en un contexto económico más productivo?
- En tres tipos culturales (integrados, emancipados y desarraigados) se conformaron grupos que pueden identificarse como *profesionales urbanos*: personas con estudios superiores –universitarios o técnicos–, correspondientes a los estratos A y B, que habitan en su mayoría en la Gran Caracas. A diferencia de su clase opuesta mencionada en el apartado anterior –los excluidos– estos profesionales aparecen en las clases con orientaciones modernas más evidentes (integradas y desarraigadas) y en los emancipados, tipo cultural que se comportaba un poco como un reflejo de los promedios nacionales. Su alto nivel educativo nos refuerza la idea de que el rol de la educación formal en la orientación moderna es capital. Lo observable en este caso es que es la educación privada quien refleja esta relación. La idea de que la modernización es una experiencia de socialización individual y no parte de un proyecto societal va en esta línea. No se trata de que la educación privada responda a los intereses individuales sino que es el esfuerzo individual el que hace posible el acceso a la educación privada y, en consecuencia, a una mayor exposición a las orientaciones modernas. Sin embargo, la educación pública también juega un papel en las orientaciones modernas.
- En las clases de los tipos culturales se pueden diferenciar dos tipos de clases vinculadas al trabajo: una clase que podemos denominar como la *trabajadora popular*, caracterizada por trabajos manuales (obreros) o por cuenta propia, en algunos casos vinculada al estrato D; y una *clase trabajadora*, caracterizada principalmente por los empleados. Uno de las diferencias significativas entre estas clases y la clase de los profesionales urbanos es que, para estos últimos, existe una tendencia a percibir el trabajo como un medio de superación, mientras que para las clases trabajadoras esta percepción se orienta más hacia la manutención. No se trata de que su percepción del trabajo los ubique en una parte de la escala social; es más bien que su situación sociomaterial –de supervivencia o de cierta holgura– les permite darle una u otra concepción al significado del trabajo. Sin embargo, y retomando en parte la reflexión sobre el rol de la educación formal en las orientaciones modernas, hay que reconocer que la educación pública también juega un papel en

las orientaciones modernas. La diferencia está en el hecho de que la educación privada se asocia a niveles educativos universitarios y públicos, y la educación pública a los niveles de primaria y secundaria. A pesar de esto, las personas que provienen de los planteles públicos –y por ende, se asocian al nivel educativo de primaria o secundaria, y estratos medios y bajos de la población– se conforman también como clases en los tipos culturales más modernos como los integrados y los desarraigados. De tener una escuela pública que motivara y empujara a sus estudiantes hacia la educación superior, no se mostraría tan claramente esa asociación de la escuela pública con estratos medios y bajos, y de la escuela privada con los estratos altos y profesionales.

- Sin lugar a dudas, más que la situación sociomaterial, *el acceso a una buena educación formal* se traduce: primero, en una mejoría de la situación sociomaterial (cuestión largamente estudiada); segundo, en la adopción de orientaciones más modernas. Por un lado, el nivel educativo es, sin duda, un ingrediente clave en estas cosas; pero, por otro lado, la calidad de la educación se encuentra reflejada en la manera en que la educación privada se asocia a los grupos con mejores desempeños socioeconómicos, en contraste con la educación pública. No es que la educación privada sea elitista; el problema es que la educación pública no ofrece realmente el desempeño necesario para las poblaciones que no pueden acceder a la educación privada. La ausencia de un proyecto modernizador a escala societal implica, entre otras cosas, la ausencia de un proyecto de igualación en la calidad de las oportunidades para la población.
- En el caso de los movilizados, tipo cultural cuyos subgrupos no se caracterizaron por variables socioeconómicas, el hecho de que haya sido caracterizado por las variables de las tipologías parciales puede estar relacionado con la talla de este tipo: comprende sólo un 4% de la población total. Si bien existen diferencias de tipo socioeconómico dentro de este grupo, es probable que, dada la talla del grupo, hayan privado finalmente las diferencias entre las tipologías parciales.

CONCLUSIONES

Según lo expresado en otros estudios y en la teoría, se esperaría una clara relación entre los tipos culturales y los estratos socioeconómicos, pues la orientación de actitudes hacia posturas modernas se traduciría en un nivel apreciable de logro sociomaterial siendo que las personas tendrían actitudes más productivas y orientadas al logro. Claro está que la relación no sería del 100%. Sin embargo, el examen de los datos nos muestra que si bien hay una relación en los extremos de las variables (pobres y tipos no modernos – no pobres y tipos modernos) esta relación en términos cuantitativos solo puede calificarse de “estar por encima de la media”. La presencia de una cantidad de casos

considerables en las casillas que pudiéramos llamar “disonantes” (pobres y tipo moderno – no pobre y tipo no moderno) y la poca relevancia del resto de las casillas, conduce a pensar que la relación entre personalidad moderna y productividad puede depender de factores que están más allá de lo microsocioal. En todo caso, los datos nos muestran que no es la orientación al logro un elemento esencial en la condición sociomaterial de las personas.

Hasta el momento, nuestra unidad de observación han sido los individuos, y las conclusiones que podemos obtener de estos datos deben tener esto en cuenta; pero esto no implica que el fenómeno sea individual. *En otras palabras, puede haber elementos de carácter institucional y/o societal que favorezcan o inhiban el éxito sociomaterial, más allá de las orientaciones del individuo.* El hecho de que una persona presente orientaciones modernas, y carezca de condiciones socioeconómicas aceptables, no significa que la relación entre estrato y orientación sea falsa; lo que significa es que existen otras variables que están operando contra el éxito individual. De igual manera sucede cuando observamos las tendencias inversas, personas con niveles más que aceptables de vida y orientaciones poco modernas. Estos mecanismos “perversos” se hacen evidentes en la vida real con casos como universitarios pobres o gente sin estudios exitosa, donde lo que llama la atención no es que existan, sino que sean más común de lo esperable.

Un factor a tener en cuenta en la lectura de estos resultados son las crisis económicas y sociales que han sacudido al país en los últimos 25 años, donde con toda razón se puede imaginar que éstas han “arrastrado” consigo a parte de los grupos de los tipos modernos. En otras palabras, la crisis ha atentado contra las orientaciones modernas. Nos centramos especialmente en aquellos casos donde la persona tiene todos los atributos para ser exitosa – orientación moderna y estudios profesionales – pero por alguna razón no lo es. Del 100% de casos que responden a aquellos que tienen educación profesional y son de los tipos culturales desarraigados o integrados – los que presentan mayor modernidad en sus orientaciones – tenemos que solo un 65% corresponde a los estratos A y B. Si nos limitamos a los integrados y profesionales, un 40% se encuentran en los estratos C y D. *Nuestra hipótesis es que, en épocas de menor pobreza, es muy probable que estos casos hubieran ocupado más fácilmente los estratos A y B de la población pero que, con las crisis económicas, han sido afectados en su nivel de vida.* Uno de los temas que se desarrolla ampliamente en “*Detrás de la Pobreza*” es el problema de la ausencia de instituciones que encaucen los esfuerzos individuales hacia el desarrollo.

Un punto importante en este estudio es el rol de la educación dentro del desarrollo social y personal. Es una relación ampliamente tratada en la literatura. No en balde los clásicos de la modernidad liberal hacían énfasis en el papel de la escuela. La relación de los tipos culturales con los niveles educativos, si bien no tanto como esperamos, sí apunta a que el nivel educativo puede tener mayor relación con los tipos, que los estratos socioeconómicos. El argumento es claro: *el estrato socioeconómico no “dota” al*

individuo de una personalidad moderna, en todo caso se espera que la persona moderna aumente las probabilidades de éxito sociomaterial. En pocas palabras, vivir bien no nos hace modernos, sino el ser modernos debería hacernos vivir bien. Por el contrario, el nivel educativo sí debería dotar al individuo de esta orientación moderna, pues la adquisición de conocimientos conlleva a la autonomía del individuo –el locus interno– frente a las eventualidades de la vida. En este sentido, es necesario una reflexión sobre la escuela y su papel en la socialización de las personas. No hay duda de que uno de los principales conductos de modernidad dentro de un proyecto societal, o por lo menos de la autonomía del individuo, es la escuela y, en general, el sistema educativo. Más que el mismo Estado e, incluso, que algunas instancias del mundo privado, la escuela venezolana fue una de las beneficiadas de la modernidad venezolana, pues en su momento apuntó claramente a un objetivo preciso: la extensión de la educación primaria. A pesar de la crisis que golpea a las escuelas, el sistema educativo venezolano queda como el único mecanismo de difusión societal de la modernidad, pues otros espacios como el mundo del trabajo formal y productivo, las familias, el mundo de la asociación política y civil, se han visto reducidos o ahogados por las crisis económicas y políticas.

La tesis de que la situación y el éxito material de las personas son producto de sus orientaciones actitudinales no es aplicable, por lo menos, a la Venezuela actual. Podemos encontrar personas con orientaciones modernas en situación de pobreza (estratos E y D) casi con la misma frecuencia con la que se encuentran en el total nacional. Incluso, cuando calculamos la correlación de los tipos culturales con variables como el ingreso, notamos que si bien la relación es positiva, no presenta mayor significación, lo que nos lleva a pensar que la relación positiva entre el estrato y el tipo se debe en buena parte al nivel educativo: el último vínculo de la socialización moderna.

Esto no implica que las tesis que soportan la relación entre éxito sociomaterial y orientaciones actitudinales sean falsas. De hecho, la relación positiva entre los tipos culturales y el nivel educativo señala, en cierta medida, que es cierta la tesis; el reverso se produce en el momento en que los niveles educativos no se traducen en bienestar material. Aquí es donde interviene, negativamente, la acción de un contexto social y económico recesivo y sostenido en el tiempo. Lo que realmente se espera es que las personas con orientaciones modernas tengan la posibilidad de dotarse de mejores herramientas –entre ellas la educación– que les permitan incrementar su autonomía frente a las eventualidades, y asegurarse un mejor futuro. De este hecho se produce la relación positiva entre educación y el tipo cultural, por lo que debería verse reflejado en las condiciones de vida de las personas.

La crisis socioeconómica sostenida en los últimos 25 años que es la causa de la pobreza, y no las orientaciones de las personas, ha llevado a que los esfuerzos de las personas en lo formativo no se transformaran en un mejoramiento del nivel socioeconómico. La situación, hecha más compleja por elementos políticos,

institucionales, sociales, y la retroalimentación de lo cultural, operan entonces como un catalizador algo caótico haciendo que los individuos tengan que luchar con condiciones adversas para lograr la condición de vida deseada: por esto, los ejemplos más citados de casos que salieron de la pobreza se refieren a aquellos que dieron la espalda a todo y, de manera individualista y explotando al máximo los recursos, salieron adelante. Nuestra idea de superación de la pobreza es justamente lo contrario: un contexto social y económico que no fomente el individualismo y que de oportunidades de desarrollo para todos. En “*Detrás de la Pobreza*” se hace hincapié en esta idea de una sociedad con instituciones modernas que, con el apoyo de una economía productiva y abierta, sea el camino para empezar a superar la pobreza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOCOCK, Robert (1996) “The cultural formations of modern society”. En: S. HALL; D. HELD; D. HUBERT; K. THOMPSON (Eds.) *Modernity. An introduction to modern societies*. Cambridge; Oxford: Blackwell Publishers. Cap. 5, pp. 149-183.
- DE VIANA, Mikel (1998) “Determinantes Culturales de la Pobreza. Intervenciones Posibles en Orden al Cambio Cultural Modernizador.” Caracas: Mimeo. Borrador No.10 de Trabajo del Proyecto *La Pobreza en Venezuela. Causas y Posibles Soluciones*. UCAB.
- ESPAÑA, Luis Pedro (2001) “Superar la pobreza en Venezuela: el camino por recorrer”. En: UCAB-ACPES, *Superar la pobreza. El camino por recorrer*. Volumen 2 de los documentos del Proyecto Pobreza. Caracas: UCAB, pp.7-27
- FAIRBANKS, Michael; Stace LINDSAY (1997) *Plowing the sea: Nurturing the hidden sources of growth in the developing world*. Harvard: Harvard Business School Press.
- GRISWOLD, Wendy (1994) *Cultures and societies in a changing world*. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- GRUSON, Alberto (1997) *Estudio de los factores culturales de la pobreza en Venezuela*. Caracas: mimeo.
- LINDSAY, Stace (2001) “La cultura, los modelos mentales y la prosperidad nacional”. En: HUNTINGTON, Samuel P.; Lawrence E. HARRISON (Eds) *La cultura es lo que importa. Cómo los valores dan forma al progreso humano*. Buenos Aires: Planeta, cap. 21, pp. 371-386.
- PORTER, Michael E. (2001) “Actitudes, valores, creencias y la microeconomía de la prosperidad”. En: HUNTINGTON, Samuel P.; Lawrence E. HARRISON (Eds) *La cultura es lo que importa. Cómo los valores dan forma al progreso humano*. Buenos Aires: Planeta, cap. 2, pp. 56-72.
- SMILDE, David (2001) “Protagonismo cultural desde la pobreza: respuesta a Mikel de Viana”. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 7, nº1,

pp. 45-64.

TOURAINÉ, Alain (1994) *Crítica de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

TROMPENAARS, FONS; Charles HAMPDEN-TURNER (1998) *Riding the waves of culture. Understanding diversity in total business*. New York; McGraw-Hill. Segunda Edición.

UGALDE, Luis (2001) "Superación de pobreza y cambio de horizonte cultural-institucional". En: UCAB-ACPES, *Superar la pobreza. El camino por recorrer*. Volumen 2 de los documentos del Proyecto Pobreza. Caracas: UCAB, pp. 55-60.

ZAPATA, Roberto (1996) *Valores del venezolano*. Caracas: Conciencia 21.

LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA ESCOLAR VENEZOLANO: EL CASO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL¹

BLAS A. REGNAULT M. *

Resumen

El presente artículo trata sobre los aspectos estratégicos que debe tener en cuenta los decisores de políticas para alcanzar la universalización de la Educación Inicial, y así dar acceso al desarrollo temprano de todos los niños de 0 a 6 años de edad. En efecto, en Venezuela pensar la universalización, hacerla viable, supone tener en cuenta no sólo lo que tradicionalmente se entiende como política educativa, sino aspectos relacionados con la diversidad social, cultural y económica que vive hoy día la población venezolana. La aplicación de una política de este tipo supone alcanzar niveles de cobertura que superan en primer lugar las inequidades en el acceso, en segundo lugar las desigualdades en el desempeño del sistema y por último, las desigualdades en las formas de atención según el sector social al cual se dirige la acción pedagógica. Para lograr la universalización hará falta conocer en profundidad los déficits institucionales en el servicio a nivel nacional y la relación que se establece entre el niño, la familia y la Escuela.

Palabras Claves: Educación Inicial, Sistema Escolar; Equidad.

Abstract

This paper presents some strategies that should keep in mind the policymakers to reach the universal coverage of the Initial Education, and this way to give access to the early development of all the children from 0 to 6 years old. In Venezuela it supposes to consider aspects related with the social, cultural and economic diversity that lives the Venezuelan population: 1. Reach covering levels that overcome the

* Sociólogo. Investigador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas del IIES-UCAB.

1 El presente texto corresponde a un trabajo de investigación realizado para la Dirección de Preescolar del Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) en el marco de un trabajo sobre "El Análisis de la Gestión Administrativa de la Inversión Social y de los Costos de la Atención para el Nivel de Educación Inicial".

inequities in the access; 2. inequalities in the system performance and; 3. lastly, the policymakers should pay attention on the inequalities according to the social sector to which goes the pedagogic action. To achieve this goal the next 10 years, it will be necessary, on one hand, to know the institutional handicap on the service at the country, and on the other hand, it is necessary to understand the relationship between children, family and School.

Key word: Initial Education, School System, Equity

Résumé

Le present article porte sur les défis de l'universalisation de l'Education initial au Venezuela en tant que politique qui doit être soutenable et institutionnel. Pour attendre cet objectif, il faut d'abord tenir compte du probleme des inegalités d'acces, en second lieu, des inégalités de la performance du systeme, et en dernier lieu, les inégalités du service à partir de la diversité des secteurs sociaux et culturels où est dirigée l'action pédagogique. De la même manière, il faut tenir compte de la relation entre les déficits chroniques d'attention en et les besoins familiaux.

Mots clés: Education Initial, Système scolaire, equité.

INTRODUCCIÓN

El presente compone una serie de tres artículos² sobre la relación entre la Ciudadanía, la Equidad y el desarrollo institucional del sistema escolar venezolano. En este artículo trataremos el caso específico de la Educación Inicial o Educación Preescolar y los aspectos más relevantes a considerar a la hora de llevar a cabo una política de universalización que pretenda ser equitativa.

El impulso que ha tomado en el debate público el tema de la ciudadanía y la equidad es expresión de la crisis de integración social que desde hace por lo menos 25 años vive la sociedad venezolana. En efecto, gran parte de los problemas sociales y políticos que suceden hoy en día en Venezuela se explican porque en los últimos años hemos acumulado desigualdades sociales que han fragmentado el cuerpo social y las claves democráticas que servían de cemento para la convivencia.

2 El siguiente trata sobre la equidad de la Educación Básica en Venezuela, haciendo énfasis especialmente en las 2 primeras etapas. El tercero trata sobre la tercera etapa de la Educación Básica y la Educación Media, Diversificada y Profesional.

El debilitamiento de esta ciudadanía se observa en las instituciones que con mayor potencia tienen la función de incluir a los individuos en sociedad: El sistema de Seguridad Social, el Sistema de Salud y el Sistema Escolar³.

La acumulación del deterioro del vínculo de inclusión (o vínculo ciudadano) podría explicarse porque desde hace algún tiempo las políticas sociales no fueron lo suficientemente equitativas como para mantener integrada a la sociedad. En ese sentido, es necesario que entendamos que sin equidad hoy día no hay ciudadanía posible. Hoy más que nunca la ciudadanía pasa por el reconocimiento de la diversidad de los sujetos sociales. En un sentido amplio, la equidad supone que las instituciones sociales encargadas de integrar, se ocupen de las circunstancias, de los contextos y de las situaciones sociales, económicas, políticas y culturales de partida, debiendo atender en forma adecuada y suficiente las desventajas que vayan en contra de aspectos vitales de la existencia humana y responder a las diferencias en términos de características personales, contextuales y proyectos de vida que impiden realizar a plenitud estos aspectos (D'Elia y Maigón, 2004).

La reconstrucción de la ciudadanía desde el sistema escolar es una acción doblemente difícil: por un lado, porque hay que “poner al día” el servicio educativo, superando los déficits acumulados de atención, haciendo, a su vez, que estas instituciones orienten su acción hacia la diferencia para buscar la igualdad. Por otro lado, porque a partir de este reconocimiento de la diferencia se debe procurar lo común. Cuando hacemos referencia a la ciudadanía nos referimos a un vínculo que no se agota en la nacionalidad (o ciudadanía territorial), o en la legalidad (la ciudadanía jurídica). Se trata de una ciudadanía social que se define por derechos, garantías y deberes mutuos entre las instituciones gubernamentales y los miembros integrantes de la sociedad (Touraine, 1994: 97; Baby, 2000: 1)⁴.

La ciudadanía desde la Equidad es un concepto amplio que no debe confundirse con el concepto de Igualdad de Oportunidades (Fernandez-Shaw, 2003). Ésta supone tres niveles de inclusión en las políticas educativas, a saber:

-
- 3 La crisis de la Democracia venezolana se observa en el fallo de dos de sus vínculos fundamentales: el vínculo de *representación política de intereses* (está relacionado con la crisis de los partidos políticos y de las asociaciones que representan intereses organizados – Sindicatos, etc.) y el *vínculo de ciudadanía* (inclusión) (Regnault, 2002).
 - 4 “En la relación de Ciudadanía encontramos las políticas sociales, como vivienda, salud, educación, empleo, migración También encontramos las contribuciones de los ciudadanos a la colectividad, como el servicio militar y parte de la tributación fiscal. Existe igualmente en el campo de la Ciudadanía las relaciones formales entre los ciudadanos, como el derecho de familia. Por último, en este campo relacional encontraremos las formas de representación que establece el sistema político entre el Colectivo y el Estado” (Grusón, Parra y Regnault: 1998)

- a. *Inclusión en el acceso a la educación* como derecho social básico. Ello es la probabilidad de acceso al servicio; lo que supone de entrada la existencia del servicio en el contexto social cercano a las familias.
- b. *Inclusión desde las diferencias*, tanto socioeconómicas como socio-culturales. Esto es un sistema escolar que debe tener cuenta procesos de acceso y selección encubiertos en el sistema, a pesar de que exista toda la posibilidad física y formal del servicio educativo. En muchos casos, la propia dinámica social genera formas de autoselección y exclusión, por lo cual hace falta que el sistema escolar tenga cuenta de la heterogeneidad social, económica y cultural. Aquí se incluye toda la discusión de etnias y género.
- c. *Inclusión desde la diversidad para la integración social*. Hace falta que el sistema escolar sea competente para crear una ciudadanía común entre los individuos de una sociedad, por diversa y heterogénea que ésta sea. Los distintos entornos socioeconómicos y culturales que debe manejar un sistema escolar, exigen acciones particulares que permitan que los resultados obtenidos en la escuela sean fructíferos en el entorno inmediato de cada egresado de la escuela sin que esto deje de estar integrado en un contexto social más global

Lo anterior representa el marco de referencia de nuestro estudio sobre la ciudadanía, la equidad y el sistema escolar venezolano. Tal como lo anunciamos más arriba, nos dedicaremos en este artículo exclusivamente a la Educación Inicial.

En efecto, la Educación Inicial hoy día forma parte de las estrategias de Estado para garantizar mayor equidad en la población. El objetivo de los próximos años será concretar la universalización de la Educación Inicial con el fin de dar acceso al desarrollo temprano a todos los niños de 0 a 6 años de edad. Sin embargo, pensar la universalización, hacerla viable, supone entonces considerar diversos aspectos que hagan posible el proyecto, y que tenga cuenta de las condiciones sociales, culturales y económicas que vive hoy día la población venezolana.

En Venezuela la Educación Inicial no está comenzando desde cero. Al contrario, ella cuenta con una tradición desde 1936. Desde 1957 el crecimiento de la matrícula ha sido de gran importancia, dejando en 2002 una red de aproximadamente 11.800 preescolares en todo el territorio nacional. Sin embargo, la distribución de estos preescolares no es uniforme en todo el territorio. Aún se observan inequidades en el acceso, que hará falta resolver en los próximos años. En ese sentido, el análisis de la matrícula y de la cobertura de preescolar que nos proponemos hacer permite avanzar ciertas ideas sobre los obstáculos que deberá enfrentar la gerencia de este cambio institucional. Esos obstáculos se derivan principalmente de las características de la oferta institucional (planteles) que existe hoy día en Educación Inicial, y de las características de la población objetivo de la política educativa. En efecto, para lograr el objetivo en los próximos 10 años, hace falta, por un lado, conocer en qué consisten los déficits institucionales en el servicio a

nivel nacional, y por otro lado, hace falta comprender la relación que se establece entre el niño, la familia y la Escuela⁵.

I. LAS CLAVES SOCIALES DE LA ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN INICIAL

La asistencia a lo que hoy día llamamos Educación Inicial convencional supone, tal como muchos autores lo han demostrado, un proceso de socialización secundaria temprana (fuera de la familia) que, bien orientado, sienta las bases para el desarrollo integral y el éxito escolar. Supone además, un inicio en la vida institucional distinta a la familia, lo que incorpora reglas y patrones de hábitos en los niños que asisten al nivel. Sin embargo, la noción de Educación Inicial es más amplia que la noción de Preescolar (Myers, 2000). Este término, que comenzó a utilizarse en América Latina a partir de 1990, se fue desarrollando sobre todo en el ámbito de los programas “no convencionales” (o fuera del aula). En Venezuela los programas llamados “no convencionales” se llevaron a cabo en zonas rurales o marginales urbanas, en algunos casos asociados con gobiernos regionales o centros asistenciales y dirigidos a padres de niños en edades comprendidas de 0 a 3 años⁶. El alcance de esta política de atención a este grupo etéreo ha sido muy limitado y variable, dejando sin resolver la tensión que siempre existe entre las características asistenciales del servicio y el componente pedagógico del mismo (Rodríguez, 1999).

Aunque en Venezuela no estamos comenzando de cero, la observación sistemática de la matrícula histórica y de la cobertura del nivel, sobre todo para el componente convencional del nivel preescolar, nos ha suscitado dos ideas que a lo largo del artículo orientarán la discusión:

- 1) La matrícula de la Educación Preescolar evoluciona con menos intensidad que la matrícula de la Educación Básica, porque hay condiciones institucionales (propias de la oferta educativa), familiares (relacionadas con la dinámica social que allí se vive) y legales (derivados de la no obligatoriedad del nivel) que condicionan la incorporación de los niños en edad preescolar (Egido Galvez, 2000).
- 2) La Educación Preescolar es un fenómeno urbano por excelencia, que se concentra sobre todo en grandes ciudades. Ello hace que el acceso sea desigual respecto a otras

5 Sobre el tema de la equidad y la prestación de servicios educativos ver los trabajos de Rivero (2000) y Marchesi (2000) sobre reforma, sistema de indicadores y desigualdad educativa en América Latina.

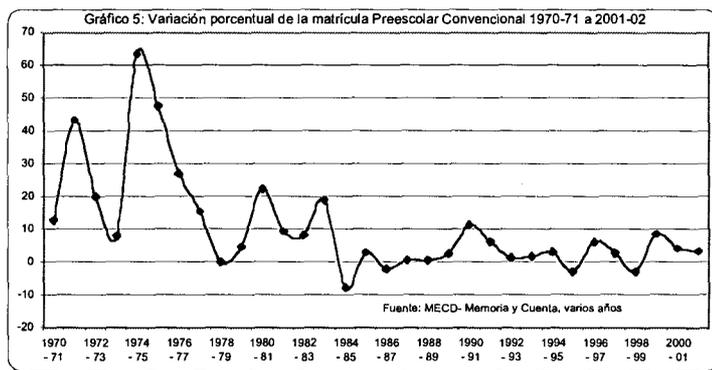
6 En Venezuela el impacto de esta política se evaluó parcialmente en un trabajo realizado en 1.999 llamado “Sistematización de experiencias exitosas de atención al niño” realizado por Alberto Rodríguez bajo el patrocinio de Ministerio de Educación - OEA.

educación en general. Esto trajo como consecuencia que los crónicos problemas de cobertura se acentuaron o empeoraron.

- Transferencia del gasto en educación a las familias.

Ahora bien, observando el crecimiento porcentual de la matrícula desde 1970, podemos identificar algunas etapas importantes.

Un primer periodo de fuerte expansión de 1974 a 1978, en el cual se observa un marcado crecimiento de la matrícula de Preescolar que podría estar asociado al pleno empleo y al crecimiento económico de la época, lo que pudo haber impulsado la



demandas de las familias de programas de atención y educación de la primera infancia. En este período es cuando se crea la Dirección de Educación Preescolar (dejó de ser una División del Ministerio de Educación) y

cuando se inicia la creación de Programas de Cuidado Diario. De igual forma en este período hubo circunstancias internacionales que condicionaron la importancia dada al nivel (Año Internacional del Niño 1979).

Segundo período de contracción de la matrícula ubicado de 1984 a 1989: Cae la matrícula entre 20 y 27 puntos porcentuales consecuencia de una gran contracción de las finanzas públicas. La década de los 80 está marcada por el Viernes negro y por la caída de los ingresos petroleros en 1986.

Tercer período de nueva expansión de la matrícula entre 1990 a 1991, donde se incrementa la cobertura en 5%. En ese período se encuentra el plan de enfrentamiento de la pobreza del gobierno, con programas compensatorios. Este es el período donde se masifica el programa Hogares y Multihogares de Cuidado Diario.

Cuarto período de 1995 a 1998: Al inicio del período hay una contracción de la cobertura en Preescolar. Aquí hay un factor externo que se hace presente, la crisis bancaria, y un factor interno relacionado con una orientación de las políticas educativas más a la calidad, dando por sentada la cobertura como un problema ya resuelto. Es el período de reformas administrativas del sector público. A lo interno del Ministerio de Educación hay un mejoramiento de los sistemas de información, y de sistema de

calidad. La DEPE se reorienta hacia el nuevo diseño curricular. La década de los 90 enfoca las políticas hacia la calidad más que a la cobertura. Inclusive, la cobertura del Preescolar y de la Educación Básica pierde aceleración y presenta tasas de crecimiento negativas. Ello nos conduce a pensar que las políticas educativas de la época abandonaron su impulso hacia la equidad. Es obvio que ese abandono no se hace de manera intencional, sino de manera ciega, pues se dio por resuelto el problema de la cobertura. Al final de este período, asociado a los programas sociales de la Agenda Venezuela, se observa un aumento de la cobertura posiblemente relacionado con la oferta nutricional y otras políticas asistenciales y de apoyo en los centros educativos.

Quinto período de expansión de 1999 a 2001. Esta nueva expansión de la cobertura de preescolar puede estar asociada al aumento del gasto público en educación y a la bonanza petrolera. De igual forma esta expansión puede deberse a la prohibición del cobro de la contribución para el mantenimiento cotidiano de los centros educativos y a la incorporación del componente nutricional en éstos. Esta decisión pareciera que tuvo un impacto inmediato en el crecimiento de la matrícula. Sin embargo, ella afectó la gestión interna de los planteles en el mantenimiento y en la adquisición de materiales básicos de aprendizaje.

¿Cómo hacer que la cobertura no se haga tan dependiente de factores externos? ¿Cómo hacer para crear muros de contención institucional que protejan los logros alcanzados? Además, ¿cómo aprovechar los momentos de bonanza económica para crecer y echar bases para el crecimiento continuo de la matrícula, a pesar que su aceleración baje producto de los factores financieros? Estas preguntas no son solamente planteadas en el contexto venezolano, todos los sistemas escolares se suelen plantear estas cuestiones. Una propuesta básica es fijar metas posibles de crecimiento en períodos determinados, teniendo escenarios de variabilidad de las finanzas a partir de un presupuesto predeterminado de alcance de la meta⁹. En otras palabras, conocer el costo real de un aumento de la cobertura con el fin de fijar dos tipos de metas, aquellas metas que se cumplirían en situación de presupuesto sin recortes, y aquellas metas que se cumplirían en situación de crisis de finanzas públicas.

Por otro lado, parece adecuado sugerir que la cobertura debe ser flexible de acuerdo a las características de la población atendida. La tendencia de ampliar la cobertura para todos los niños entra en tensión con la necesidad de adecuar los programas de Educación Inicial a las características culturales, geográficas y sociales de las diversas familias que ocupan el territorio nacional. En otras palabras, la Dirección de Educación Preescolar debe continuar abriéndose a la creación de diversas opciones que atiendan la diversidad sociocultural y económica de la población venezolana.¹⁰

9 Sobre el tema de la viabilidad de la universalización de la cobertura (Educación para Todos) ver UNESCO. EFA Global. Monitoring report. 2002

10 El uso de los mapas temáticos en este informe se lo debemos al sociólogo José Luis Fernández-Shaw, quien nos facilitó el trabajo realizado por el INE-SIGEL en 1.999 en la Clasificación, Caracterización y Tipología de los municipios de Venezuela.

La desigualdad en el acceso se observa cada vez más como un problema de carencia de opciones del servicio que permita a las familias insertar su lógica sociocultural en el proceso de Educación Inicial. En el entendido que es en esta etapa donde existe la idea por parte de las familias que es necesario guardar al niño en casa hasta que tenga la edad suficiente para asistir con mayor autonomía a la Escuela. Este es el tema del próximo punto, donde tocamos las condiciones sociológicas de la demanda de la Educación Inicial. Sin embargo, las desigualdades en educación no se quedan allí. El sistema escolar debe tener cuenta de procesos de acceso y selección encubiertas en el sistema. Es decir, que a pesar de que existan todas las posibilidades físicas y formales de existencia del servicio educativo, la propia dinámica social podría hacer posible ciertas formas de autoselección y exclusión del acceso de los niños. Para ello hace falta que el sistema escolar tenga cuenta de las desigualdades y de la heterogeneidad social, económica y cultural.

Matrícula Preescolar Convencional por dependencia y medio geográfico 2001-2002																
Medio Geográfico	Nacional		Estadal		Municipal		Autonoma		Privada		Privada Subv. Oficial		Privada Subv. MECD		Total Med. geo	
	Nro	%	Nro	%	Nro	%	Nro	%	Nro	%	Nro	%	Nro	%	Nro	%
Urbano	358.171	77,4	104.894	54,2	9.801	82,5	35.281	98,3	124.254	99,0	11.545	96,7	20.712	95,2	664.658	77,0
Rural	104.554	22,6	88.814	45,8	2.085	17,5	602	1,7	1230	1,0	388	3,3	1.033	4,8	198.706	23,0
		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		Total Mat. preesc.
Total	462.725	53,6	193.708	22,4	11.886	1,7	35.883	4,2	125.484	14,5	11.933	1,4	21.745	2,5	863.364	100,0

Fuente: SMEE - OMI MECD

A partir del cuadro anterior se puede observar que la cobertura de la matrícula en el medio rural es mucho menor que en el medio urbano. Se trata proporcionalmente de solo 23% de la matrícula, siendo que 77% restante es matrícula en ciudades. Sin lugar a dudas, la importancia de los planteles preescolares de dependencia oficial es de primer orden. En efecto, si observamos la fila de totales del cuadro anterior (última), podemos resaltar que 81.6% de la matrícula es responsabilidad Oficial en sus diferentes dependencias, y 18.4% es atendida por planteles de dependencia privada (No Subvencionados y Subvencionados). El sector oficial se encarga de 196.055 niños en el área rural, lo que nos indica que en 99% la matrícula del área rural pertenece al sector oficial (22.8% de ella de dependencia Nacional, 45.8% de dependencia Estadal y 17.5% de dependencia Autónoma). La presencia del sector oficial corrige los defectos del mercado en la provisión del servicio educativo en el área rural, otorgando oportunidades en los lugares en los cuales los particulares no lo harían. Es obvio que el área rural no resulta un incentivo interesante para el sector privado en Preescolar. Por otra parte, llama la atención que en el área rural son las Escuelas Privadas de religiosos las que tienen más presencia por parte del sector privado. La matrícula privada es eminentemente urbana en 98% de los casos atendidos, es decir, donde pareciera haber "mercado".

La distribución de los planteles en el territorio nacional refleja lo que hemos venido diciendo (ver cuadro siguiente y mapas temáticos sobre distribución de éstos en el país). De los 11.779 planteles de preescolar que existen en Venezuela, 9.230 (es decir, casi 80%) pertenecen al sector oficial, de los cuales 40% son de dependencia Nacional y 33% Estadal. Sin embargo, la responsabilidad del sector oficial es mayor porque la proporción en el área geográfica rural es de 5.267 planteles de dependencia oficial, del total de 5.327 planteles, lo que corresponde a 98% de los planteles en el área rural.

Planteles Preescolar Convencional por dependencia y medio geográfico 2001-2002																
Medio geográfico	Nacional		Estadal		Municipal		Autonoma		Privada		Privada Subv. Oficial		Privada Subv. MECD		Total	
	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
Urbano	2.400	50,7	1.099	27,7	115	66,1	349	96,7	2.163	98,3	101	94,4	225	93,4	6.452	54,8
Rural	2.333	49,3	2.863	72,3	59	33,9	12	3,3	38	1,7	6	5,6	16	6,6	5.327	45,2
Total	4.733	100	3.962	100	174	100	361	100	2.201	100	107	100	241	100	11.779	100

Fuente: SMEE - OMI MECD

Planteles de Preescolar de Dependencia Nacional



Planteles de Preescolar de dependencia privada



Planteles Preescolar Dep. nacional.shp
1 Det 2:1
Venezuela.shp
Zanaruel_region.shp

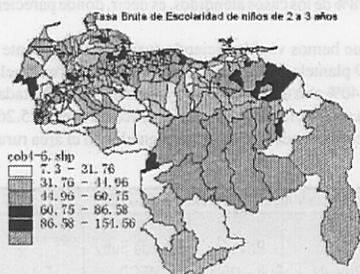
Planteles Preescolar Dep. Privada.shp
1 Det 2:1
Venezuela.shp
Zanaruel_region.shp

La mayor cobertura se encuentra en zonas urbanas de alta productividad económica

En Venezuela la desigualdad educativa se observa en primer lugar como desigualdad en el acceso, y luego como una desigualdad en el desempeño. La desigualdad en el acceso es un obstáculo institucional que impide la entrada en el sistema escolar o la continuación en el mismo una vez alcanzado cierto nivel. Cuando la Escuela está presente la asistencia depende de la decisión de las familias. La Tasa Bruta de Escolaridad de la Educación Básica está por encima de 110%, mientras que la cobertura del preescolar, dependiendo de la edad se encuentra entre 25% y 65%.

La caracterización de la situación de la cobertura por municipio es clave para tomar decisiones a la hora de invertir en Educación Inicial. Entre otras cosas porque las condiciones de la población no son uniformes, razón por la cual la oferta no puede ser uniforme. Condiciones de tipo cultural, geográfico, sociales y de edad influyen en la heterogeneidad de la demanda.

La mayor cobertura del preescolar la encontramos en municipios periféricos a las empresas de manufacturera y petroleras (Tocopero en Falcón), petroleras (Urbaneja en Anzoátegui) y en Chacao, un municipio con evidente prosperidad económica.

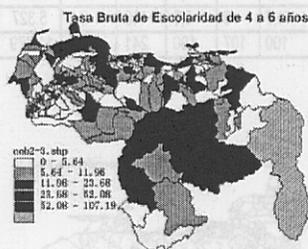


Los 3 Municipios con *mayor* cobertura de 2 a 3 años

TOCOPERO	Falcón	107,2
D. B. URBANEJA	Anzoátegui	94,4
CHACAO	Miranda	69,1

Los 3 Municipios con *menor* cobertura de 2 a 3 años

RIO NEGRO	Amazonas	00,0
P NOGUERA	Mérida	00,1
UREÑA	Táchira	00,1



Los 3 Municipios con *mayor* cobertura de 4 a 6 años

CHACAO	Miranda	154,6
TOCOPERO	Falcón	103,4
D. B. URBANEJA	Anzoátegui	102,6

Los 3 Municipios con *menor* cobertura de 4 a 6 años

GUAINIA	Amazonas	7,3
A. E. BLANCO	Barinas	14,3
URIBANTE	Táchira	15,2

Los municipios que presentan coberturas muy bajas están ubicados en zonas deprimidas económicamente, en donde el componente indígena es importante o la ruralidad es el patrón de organización social (los Andes o los Llanos). Es obvio entonces que la política pública debe proponerse realizar programas especiales orientados a estas poblaciones. Estos programas deberían ser construidos en cooperación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de cada zona, procurando concertar las metas de cobertura. Para ello hace falta flexibilizar la oferta, y crear una gestión en alianza con sectores de la región que permita adecuar la acción en función de la particularidad de la zona.

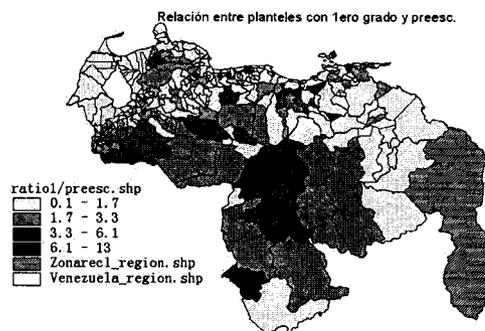
Desde hace algún tiempo, en Venezuela se viene discutiendo sobre el déficit de planteles según los grados de estudio. Efectivamente, pareciera que el sistema escolar venezolano no ofrece de manera uniforme todos los niveles en todos los municipios del país. Es lo que se suele llamar el efecto "embudo" del sistema escolar: existen más secciones en los grados inferiores que en los grados superiores. Este hecho obliga a las familias a enviar a los niños a otros municipios para continuar sus estudios o a detener sus estudios producto de la ausencia del grado. Es clásico el comentario sobre el déficit secular de secciones y planteles de séptimo grado respecto a las secciones de primer grado. Sin embargo, no solo la tercera etapa de Educación Básica presenta déficit de secciones; de la misma manera, pero con menor magnitud, se presenta en el cuarto grado y en el Preescolar. Es por ello que hemos realizado un simple "ratio" entre la cantidad de planteles de primer grado y la cantidad de planteles de preescolar, cuarto grado y séptimo grado con el fin de aproximarnos al déficit real por municipios (*).

La evidencia empírica nos muestra que el promedio nacional de planteles 2001-2002 con primer grado es mayor que el promedio nacional de planteles con los niveles nombrados. En efecto, por cada plantel que presta el servicio de preescolar encontramos 1.3 planteles con primer grado. Mientras que hay casi dos planteles que ofrecen 1er grado por cada plantel que ofrece 4to grado. Esta relación empeora a 8,6 planteles que ofrecen 1er grado por cada plantel que ofrece 7mo. Es necesario aclarar que mientras esta relación sea mucho mayor que 1 significa que existen **mas primeros grados** que preescolares, cuartos o séptimos grados. Si es menor que 1 significa que existen **menos primeros grados** que preescolares, cuartos o séptimos grados. En otras palabras, la relación ideal es un cuarto grado o un séptimo grado por cada primer grado. En un municipio cuya relación es cercana a 1, las probabilidades de continuar en otros niveles de educación básica son mayores que en un municipio cuya relación se encuentra lejos de 1.

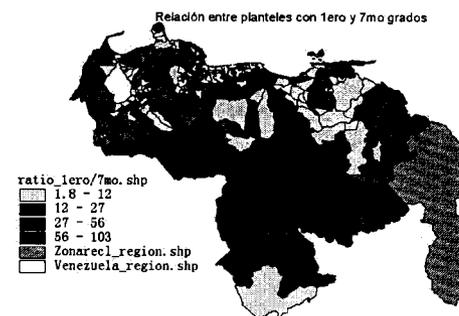
Este dato revela un grave problema de inequidad en el acceso, o de probabilidad de culminar los ciclos escolares obligatorios propuestos desde 1.980 en la Ley orgánica de Educación.

* Este indicador es limitado y no se debe sobreestimar, pues no tiene cuenta de la cantidad de población que potencialmente sería atendida por el sistema escolar. Sin embargo permite dar una idea aproximada de las inequidades en el acceso. Este indicador debería estar acompañado por otros como capacidad de absorción matricular por municipio.

El déficit de planteles de preescolar es menor que el déficit de planteles de séptimo grado

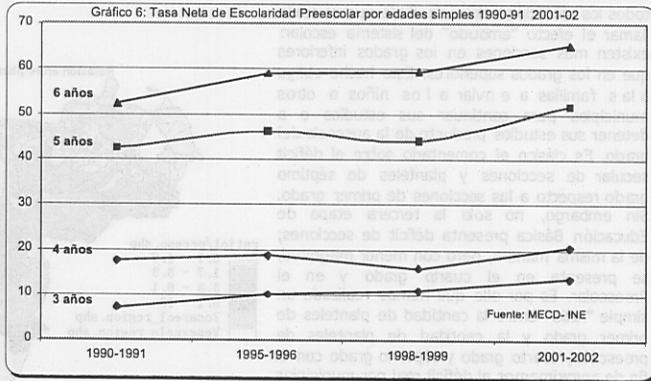


Promedio nacional	1,3	1,9	8,6



III. LA EDAD, EL NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA OFERTA

En el gráfico que mostramos se puede observar claramente un hallazgo relevante: mientras la cobertura en la población de 3 años oscila entre 19% y 20%, la cobertura de 4 años en adelante se encuentra por encima del 40% de la población a partir de 1990. Llegando a tasas



tales como 65,2% en el año 2001-2002 para 5 años de edad. De la misma manera es importante explicar que la Tasa Específica de Escolaridad en Preescolar de los niños de 6 años se encuentra entre 7% para 1990-1991 y 13,8% para 2001-2002. Sin embargo, para llegar a conocer la cobertura de los niños en esta edad hace falta saber que 67,5% es cubierto por el Primer grado y 12% cubierto por segundo grado. En definitiva, los niños con 6 años de edad asisten o al nivel preescolar, o al primer grado o al segundo grado, cubriendo así 93,3% en 2001-2002.

Tasa Neta de Escolaridad 2001-2002 de niños de 6 años por grados	
Preescolar	13,8
Primero	67,8
Segundo	11,5
Tercero	0,3
Total	93,3

Fuente: MECD-SMEE 2001-2002

El problema a resolver en los próximos años es la baja cobertura en edades menores de 3 años. Una política específica para esas edades tal vez resolverá la baja cobertura. En ese sentido, es importante resaltar que la baja cobertura se debe tanto a aspectos relacionados con la oferta institucional, como a aspectos relacionados con las

características sociales de la demanda. Expliquemos esto: en el aparte anterior mostramos datos sobre la rigidez de oferta educativa en preescolar, lo que sin duda afecta la cobertura en edades inferiores a los 4 años. Esa rigidez se manifiesta en una oferta uniforme para una población que además de necesitar una atención diferenciada por edades, se encuentra en zonas geográficas y socioculturalmente diversas. Sin embargo, la baja cobertura en estas edades no se explica sólo por la rigidez de la oferta. Para edades menores a 3 años hace falta generar una política que tenga en cuenta los aspectos relacionados con las características culturales de las familias. En efecto, según los datos observados, pareciera que las familias venezolanas desean postergar el contacto de sus niños con formas educativas diferentes a la crianza de la casa. Razón por la cual hace falta que estas familias se sensibilicen con la idea de que el desarrollo temprano tiene la misma importancia pedagógica que asistencial.

Cuando se piensa en un servicio para niños menores a los 3 años, se suele asimilar estos a Hogares de Cuidado Diario o Multihogares, ambientes que emulan las características familiares, en donde el componente educativo tiende a verse de manera complementaria. No hay que olvidar que el eje de ejecución de esos programas lo llevan las Madres Cuidadoras y no Docentes. De tal manera, no nos debe extrañar que esta postergación del contacto con formas educativas diferentes a las ocurridas en el hogar puede estar reforzada por estos servicios que desde la década de los 70 se vienen ofreciendo en el país.

Por otro lado, podemos aventurarnos a pensar que entre los límites que las familias perciben para enviar a niños antes de los 3 años a una asistencia preescolar se encuentran los de carácter biológico, relacionadas con el control de esfínteres; además de otras relacionadas con la autonomía del niño (desarrollo del lenguaje, entre otros) que limita a la madre intercambiar con el niño sobre la cotidianidad de la Escuela.

Sin duda, llama la atención el hecho de que a medida que el niño se va acercando a los 6 años la tasa de asistencia escolar aumenta. Hemos corroborado esto a través de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) del Instituto Nacional de Estadística, y a través de la Tasa Específica de Escolaridad mostrada en el gráfico que abre este aparte.

Sin embargo, no podemos decir que se trata de una relación de causalidad entre lo que piensan las familias y la asistencia al Preescolar, no podemos decir tampoco que se trata de una posición tomada respecto a la edad en la cual deben ir los niños a una educación fuera del ambiente familiar. Lo que es evidente es que la asistencia al preescolar tiene muchos más condicionantes que la asistencia a la Educación Básica.

En la siguiente tabla observaremos una comparación entre países a partir de la Tasa Media de escolarización de los programas de atención a niños en la primera infancia.

Tasa media de escolarización de programas de atención y desarrollo de la primera infancia.

	Años de edad	1998	2001
Venezuela	2 a 3	8,7	11,6
	4 a 6	38,3	43,7
Argentina	3 a 5	55,8	
Bolivia	4 a 5	36,4 (99)	
Brasil		45, (96)	
Colombia	5 a 6	41,7	
Costa Rica	5 a 6	82,8	
Chile	0 a 2	30,3	
	2 a 3	22	
	5 a 6	83 (1996)	
Cuba	0 a 5	98	
México	3 a 5	76,3	
	5	81,4	

Fuente: citado por Myers 2000; de los informes nacionales de evaluación EPT

En el siguiente cuadro observamos una comparación de Tasas Específicas de Escolaridad por edades de 2 a 6 años entre Venezuela y países de Europa.

Edades	Tasas Específica de Escolaridad para niños de 2 a 6 años					
	Venezuela		Alemania	Francia	España	Portugal
	1998-1999	2001-2002	1997	1997	1997	1997
2 años	2,5	1,5	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.
3 años	16,0	20,7	47,0	99,0	57,0	44,0
4 años	44,2	51,9	71,0	100,0	100,0	55,0
5 años	59,4	65,2	79,0	100,0	100,0	65,0
6 años	11,1	13,8	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.

Fuente: Venezuela MECD, SMEE/ Proyecciones INE Censo 1990/ European Commission (1997) citado por Egado (2.000)

En ambos cuadros se observa que Venezuela no se encuentra en la peor posición del hemisferio, mucho menos en América Latina. Por eso es relevante la Tasa Específica de Escolaridad porque nos da una aproximación del comportamiento de la cobertura a partir de las edades. Nos dice con precisión la proporción de niños que asisten al preescolar según su edad.

Tasa media de escolarización de programas de atención y desarrollo de la primera infancia.

	Años de edad	1998	2001
Venezuela	2 a 3	8,7	11,6
	4 a 6	38,3	43,7
Argentina	3 a 5	55,8	
Bolivia	4 a 5	36,4 (99)	
Brasil		45, (96)	
Colombia	5 a 6	41,7	
Costa Rica	5 a 6	82,8	
Chile	0 a 2	30,3	
	2 a 3	22	
	5 a 6	83 (1996)	
Cuba	0 a 5	98	
México	3 a 5	76,3	
	5	81,4	

Fuente: citado por Myers 2000; de los informes nacionales de evaluación EPT

En el siguiente cuadro observamos una comparación de Tasas Específicas de Escolaridad por edades de 2 a 6 años entre Venezuela y países de Europa.

Edades	Tasas Específicas de Escolaridad para niños de 2 a 6 años					
	Venezuela		Alemania	Francia	España	Portugal
	1998-1999	2001-2002	1997	1997	1997	1997
2 años	2,5	1,5	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.
3 años	16,0	20,7	47,0	99,0	57,0	44,0
4 años	44,2	51,9	71,0	100,0	100,0	55,0
5 años	59,4	65,2	79,0	100,0	100,0	65,0
6 años	11,1	13,8	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.

Fuente: Venezuela MECD, SMEE/ Proyecciones INE Censo 1990/ European Commission (1997) citado por Egado (2.000)

En ambos cuadros se observa que Venezuela no se encuentra en la peor posición del hemisferio, mucho menos en América Latina. Por eso es relevante la Tasa Específica de Escolaridad porque nos da una aproximación del comportamiento de la cobertura a partir de las edades. Nos dice con precisión la proporción de niños que asisten al preescolar según su edad.

Los docentes del nivel preescolar cuentan con mayor capital profesional que los docentes de educación básica

Los docentes de preescolar presentan un capital profesional mucho más consolidado que el capital profesional de los docentes de Educación Básica. Al respecto, 71% de esos docentes cuenta con título profesional de licenciado en Educación o Técnico Superior en Educación, mientras 63% de los docentes de básica son Licenciados en Educación o TSU. Por otra parte, los docentes de Preescolar no titulados representan 7,5% del total, mientras que los docentes de Básica son 13% quienes no cuentan con título docente. Ello supone que los docentes de preescolar con título docente del MECD representan proporcionalmente un número mayor que inclusive los docentes sin título de todo el sistema escolar (incluyendo todas las dependencias), ya que según datos 1998-1999 los "Sin Título" representan un 24% (MECD -SMEE 1998-1999).

Es por ello que para poder presentar una fotografía sobre la situación del capital profesional de los docentes de preescolar a nivel nacional, hemos contado con la colaboración de la OMI - MECD, quienes han provisto la información sobre los docentes de dependencia nacional, para preescolar y para Básica niveles I y II presentes en la nómina del MECD. Para información detallada por entidad federal ver anexos.

No obstante, el número de niños atendido por docente, se encuentra por debajo de lo esperado, es decir, 25 niños por docente. Para solucionar este problema, es importante elevar el número de niños atendidos por docente. Además de distribuir de manera más equitativa el servicio por región.

Nota: La información sobre recursos humanos del MECD

Respecto a la información sobre Docentes y Directores de todo el sistema escolar y Escuelas por dependencia, es importante hacer notar que fue solo en el período 1998-1999 en el que se recogió la información censal respecto a la situación de los docentes. No todas las entidades federales ni el nivel de preescolar contaban con información de calidad. Sin embargo, la información era suficiente para calcular el error de esos datos y poder expresar aspectos importantes del capital profesional de los docentes venezolanos. La información en cuestión fue transcrita solo ese año, y desde la fecha el Sistema de Información del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (SMEE) no presenta dichos datos.

Título	Años de servicio	Preescolar			Educ. Básica		
		Docente de Aula	% años servicio	% Título	Docente de Aula	% años servicio	% Título
Profesor o Lic. en Educ	menos de 1 año	620	5,8		2.609	5,8	
	entre 1 y 2 años	1.146	10,7		7.037	15,7	
	entre 3 y 5 años	1.094	10,2		5.265	11,7	
	entre 6 y 10 años	1.313	12,3		5.898	13,1	
	entre 11 y 15 años	1.928	18,0		7.525	16,7	
	entre 16 y 20 años	1.817	17,0		6.398	14,2	
	21 y más años	2.770	25,9		10.229	22,8	
	TOTAL	10.688	100,0	44,0	44.961	100,0	53,6
TSU en Educ.	menos de 1 año	926	13,7		1.263	16,2	
	entre 1 y 2 años	1.951	28,9		2.990	38,4	
	entre 3 y 5 años	1.203	17,8		941	12,1	
	entre 6 y 10 años	826	12,2		625	8,0	
	entre 11 y 15 años	676	10,0		682	8,8	
	entre 16 y 20 años	569	8,4		631	8,1	
	21 y más años	599	8,9		661	8,5	
	TOTAL	6.750	100,0	27,8	7.793	100,0	9,3
Maestro o Bach. Docente	menos de 1 año	8	0,2		87	0,4	
	entre 1 y 2 años	15	0,3		196	1,0	
	entre 3 y 5 años	12	0,2		235	1,2	
	entre 6 y 10 años	30	0,6		474	2,4	
	entre 11 y 15 años	491	9,7		2.893	14,6	
	entre 16 y 20 años	1.458	28,9		5.142	25,9	
	21 y más años	3.035	60,1		10.789	54,4	
	TOTAL	5.049	100,0	20,8	19.816	100,0	23,6
Docente no graduado	menos de 1 año	400	21,8		2.011	17,8	
	entre 1 y 2 años	575	31,4		4.346	38,4	
	entre 3 y 5 años	221	12,1		1.204	10,6	
	entre 6 y 10 años	118	6,4		697	6,2	
	entre 11 y 15 años	275	15,0		1.106	9,8	
	entre 16 y 20 años	58	3,2		377	3,3	
	21 y más años	184	10,0		1.570	13,9	
	TOTAL	1.831	100,0	7,5	11.311	100,0	13,5
TOTAL GENERAL		24.318	100	100	83.881	100	100

Fuente: Dirección de Personal MECD/ Nómina MECD 2002-2003

La edad del niño y el nivel educativo de la madre son los factores más importantes en la asistencia al Preescolar

¿La ocupación de las madres influye en la asistencia de sus hijos al Preescolar? ¿Es el nivel educativo que estas madres han alcanzado el factor que define la asistencia? ¿Los niños de hogares con menores ingresos asisten proporcionalmente más que los de mayores ingresos familiares? Cuáles son los factores más influyentes en la asistencia al Preescolar?

Preocupados por estas interrogantes, el equipo decidió realizar un procesamiento de la Encuesta de Hogares por Muestreo del primer semestre de 2.000. De las familias encuestadas, hemos escogido las 8.076 familias de la muestra en las cuales existen madres con niños menores de 7 años de edad. El hallazgo es relevante para considerar algunos aspectos característicos de la familia venezolana: Los factores de mayor influencia en la asistencia al preescolar son *la edad del niño y el nivel educativo de la madre*. En este primer procesamiento no hemos podido diferenciar las familias según el área urbana/rural, sin embargo el cuadro que mostramos a continuación demuestra que no hay diferencias significativas en el porcentaje de asistencia de los niños cuyas madres se encuentran desempleadas, con empleo o dedicadas a las labores del hogar. De igual forma se observa que en niños de la misma edad el ingreso familiar no es el factor que explica su asistencia al preescolar que en niños de la misma edad.

Cuando observamos el porcentaje de asistencia de los niños tomando como referencia el nivel educativo de la madre, logramos obtener diferencias significativas a partir de los 4 años de edad. En efecto, las diferencias de asistencia de niños con madres que cuentan con educación superior pueden llegar a ser de casi 30% respecto a las madres que no tienen nivel.

Además hay variaciones importantes cuando tomamos la evolución de la asistencia por edades simples. En efecto, de un promedio de 17.2% de niños que asisten a la edad de 2 años, la población pasa a 69% de asistencia a los 6 años de edad.

Características de las Madres y Porcentaje de niños que asisten al Preescolar por Edades

Ocupación de la Madre	2 años	3 años	4 años	5 años	6 años
Empleada	16,2	24,7	37,6	49,6	69,1
Desempleada	20,3	15,4	38,1	55,9	69,3
Estudiante	6,7	22,2	42,1	60,0	90,9
Oficios del Hogar	18,4	20,3	32,7	45,3	68,2
Otra situación	10,0	9,1	25,0	16,7	80,0
Nivel Educativo de la Madre					
Sin nivel	16,7	15,1	26,4	28,6	49,6
Básica y media	17,8	21,9	35,1	47,2	69,3
TSU/Universitario	15,9	22,3	41,7	65,6	78,4
Ingreso familiar					
menos de Bs. 150.000	17,2	20,3	34,5	47,6	67,3
de 150.000 a 249.999	14,8	24,9	34,7	46,0	68,8
de 250.000 a 499.999	20,3	18,9	39,7	49,2	70,2
de 500.000 a 1 millón	22,5	25,5	30,9	51,6	78,6
1 millón o más	22,2	33,3	36,4	59,1	65,5

Fuente: Encuesta de Hogares por muestreo
Primer semestre año 2000

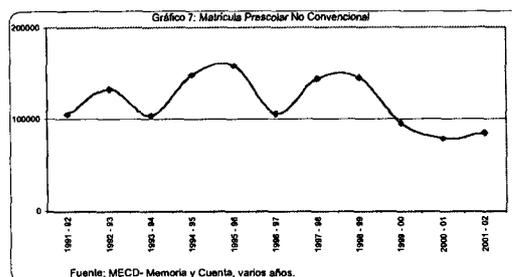
El Preescolar No Convencional es una herramienta estratégica de flexibilización de la oferta

Los datos obtenidos de la matrícula de Educación Preescolar no Convencional no nos permite hacer inferencias sobre su impacto en la población. Las variaciones porcentuales son enormes, y es probable que se deba a la calidad del registro del programa (doble contabilidad, entre otros errores).

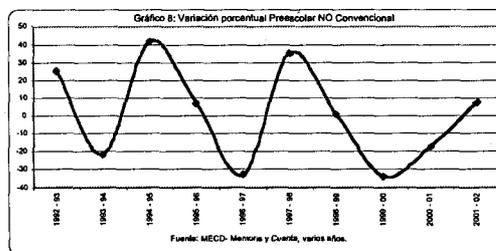
Consideramos que el “no convencional” es una estrategia importante de flexibilización y diversidad de la oferta porque permite adecuarla a situaciones particulares.

Se podría tener la impresión que la baja calidad de los datos es síntoma de la poca valoración que se tiene de las estrategias no convencionales. Y es que las estrategias no convencionales se entienden como muy costosas, poco rentables, muy difíciles de medir su desempeño.

Sin embargo es bueno avanzar dos argumentos para apoyar las estrategias no convencionales en Educación Inicial: En primer lugar, se trata de una actividad pedagógica que llega donde no llega el Preescolar formal. En segundo lugar la rentabilidad es alta porque los costos sociales de la no asistencia al preescolar (repetencia y deserción) descienden en aquellos sectores de la población de mayor fragilidad. Es obvio que supone en un primer momento un esfuerzo costoso, pero que a largo plazo garantiza la optimización en la escolarización de los niños.



Importancia de indicadores: El conocimiento de ciertos indicadores sobre la eficiencia del sistema y la desigualdad en el acceso nos permite describir y comprender de qué manera el sistema escolar debe corregir su diseño “natural” para hacerse más equitativo. En otras palabras, el sistema escolar es consecuencia de las relaciones sociales que se van tejiendo en torno a la educación y a lo político como formas de relaciones, encubriendo ocasionalmente desigualdades que no son evidentes a primera vista. De allí que es muy importante contar con indicadores que nos permitan comprender la distribución del servicio y la eficiencia del mismo. Un buen grupo de indicadores proporciona un instrumento poderoso para ampliar el conocimiento sobre el impacto social del sistema escolar y orienta la toma de decisiones. Sobre la calidad de las estadísticas educativas en América Latina ver McMeekin, R. (1998)



Abstract

This paper shows estimations of intergenerational social mobility registered in Venezuela, with data obtained from the Cultural Determinants of Poverty Survey (EDCP). This survey was conducted by the Institute for Economic and Social Research of Universidad Católica Andrés Bello between 1997 and 1998. It begins with an introduction to the subject, emphasizing that social mobility is a different approach to inequality, focussed on the evaluation of barriers associated to persistence of disadvantages among generations for certain social groups. Later is presented briefly a theoretical and methodological discussion about measurement of mobility, then is exposed the procedure used to classify subjects and their parents in EDCP. Subsequently, results are shown using different indicators: first, it is registered a high mobility, even in comparison to more developed countries; second, mobile subjects' composition vary according to birth cohort and size of settlement. The paper proposes that these differences reflect structural changes in labor market, caused by the modernization process. Additionally, different loglinear models are tested in order to identify which describes better social mobility registered in Venezuela. **Key words:** Social class, Social mobility, Social inequality.

Résumé

Le présent travail a pour but montrer les estimations de la mobilité inter-générationnelle enregistrée au Vénézuéla et calculées selon l'Enquête de Déterminantes Culturelles de la Pauvreté (EDCP) menée à but par l'Institut de Recherches Économiques et Sociales de l'UCAB entre 1997 et 1998. On commence avec une présentation du sujet, en soulignant que la mobilité sociale constitue une approche différente à ce qui est le phénomène de l'inégalité parce que celle-là permet d'évaluer l'existence d'obstacles qui mènent à la persistance des inconvénients de certains groupes sociaux dans le temps. Après, on présente brièvement une discussion théorique et méthodologique sur les problèmes pour identifier les classes et mesurer la mobilité. On expose postérieurement la procédure utilisée pour classer les interviewés et ses pères dans le cas de l'EDCP. Par la suite, on présente les résultats obtenus en utilisant plusieurs indicateurs: d'abord, on enregistre une haute mobilité, même en rapport avec les pays développés. Postérieurement, on vérifie que la composition des mobiles change selon la cohorte et le taille du centre peuplé et on propose que ces différences répondent à des changements structurels sur le marché de travail, produit du processus de modernization. Additionnellement, on essaie des différents modèles avec un analyse log-linéaire afin d'identifier le plus approprié pour comprendre la mobilité enregistrée dans la société vénézuélienne.

Mots clés: Classes sociales, Mobilité sociale, Inégalité sociale

INTRODUCCIÓN

En las ciencias sociales la desigualdad es un tema recurrente. En el caso de América Latina, la prolongada crisis económica y social vivida a partir de los años 80 ha incentivado múltiples estudios sobre la pobreza, sus condicionantes y las formas de atacarla. El gran contingente de estudios llevados adelante por especialistas de distintas disciplinas ha permitido aumentar en gran medida el conocimiento sobre los grandes problemas sociales que enfrenta la región y ha orientado las reformas de las políticas públicas en muchos países.

Sin embargo, el conocimiento sobre la situación de las desigualdades sociales que se desprende de la identificación de los grupos considerados como pobres (independientemente del tipo de indicador o método utilizado) o de los estudios sobre la desigualdades de ingreso, cuenta con una dificultad por no considerar la dimensión temporal del fenómeno. El tipo de fuente utilizada (Encuestas de Hogares y Censos) no permite contar con información longitudinal que muestre si la pobreza persiste en el tiempo para un mismo grupo de población; no se puede identificar barreras de diversa índole que pudieran estar asociadas a la persistencia de la pobreza en el tiempo.

Los estudios de movilidad social constituyen un enfoque distinto del problema de la desigualdad ya que permiten conocer en qué medida las desigualdades observadas se mantienen en el tiempo, bien sea a lo largo de la vida laboral de las personas (movilidad intra-generacional) o entre generaciones (movilidad inter-generacional). De alguna manera, al aproximarnos al estudio de la movilidad podemos conocer el grado de apertura o cierre de las sociedades concretas al evaluar la probabilidad de que la pobreza o las desventajas socioeconómicas sean heredadas de generación en generación.

Dos sociedades con distribuciones del ingreso semejantes pueden suscitar distintos juicios sobre su justicia en virtud del proceso mediante el cual se ha producido la desigualdad resultante. Joseph Stiglitz (2000) presenta una visión de la desigualdad y la justicia distinta a la propuesta por Rawls: que una sociedad sea justa no se refiere únicamente a los beneficios que se garantizan a las personas peor ubicadas en la estructura socio-económica, además es importante considerar si las reglas de juego vigentes nos conceden a todos la misma probabilidad de terminar siendo los peor situados en dicha estructura (p. 46).

En una sociedad en la que existe discriminación (basada en raza, lengua, género u otros factores) será evidente en estudios longitudinales que las personas ubicadas en los estratos o clases más desfavorecidos serán siempre las mismas. Por el contrario, en el ideal de una sociedad meritocrática, la distribución de las ocupaciones o los ingresos debería ser independiente de las condiciones de origen de los distintos individuos y relacionarse únicamente con sus distintos niveles de esfuerzo, capacidad y disposición a asumir riesgos. Por lo anterior, Stiglitz formula que el grado de justicia de una dis-

tribución dada se desprende de en qué medida ésta es producto de la *responsabilidad individual* y no de la herencia de diversos atributos.

Las sociedades contemporáneas, aún las más desarrolladas económicamente, se encuentran aún lejos de alcanzar este ideal meritocrático y diversas variables adscriptivas siguen influyendo en los resultados que obtienen los individuos en cuanto a su ocupación e ingresos. En este contexto, los estudios de movilidad social no remiten a una distribución normativa de las probabilidades de ascenso o descenso social, sino que permiten comparar los niveles de apertura o cierre de las distintas sociedades o las variaciones en el tiempo dentro de un mismo país.

Si bien parece sugestivo este enfoque basado en la movilidad para conocer las dinámicas sociales que favorecen o no la igualdad, existen múltiples dificultades teóricas y metodológicas asociadas a este tipo de estudio y que presentaremos brevemente a lo largo del presente artículo. En primer lugar, el término *movilidad social* remite a un concepto sociológico clave que ha estado rodeado de amplia polémica durante el siglo XX: clase social. A este elemento se dedica la primera parte del presente artículo, donde se expone la dificultad de traducir en indicadores empíricamente verificables el concepto de clase y cuáles han sido las soluciones utilizadas en los estudios más recientes realizados sobre el tema. Luego de aclarar la discusión terminológica, nos centramos en el tema de la movilidad social y las interpretaciones que se ofrecen a las diferencias internacionales y su relación con los procesos de industrialización o, en términos más generales, desarrollo económico.

En el segundo apartado nos dedicamos al problema metodológico, comenzando con los tipos de fuente de información usualmente utilizadas para medir movilidad, sus ventajas e inconvenientes. En el caso de Venezuela, no se ha contado con fuentes estadísticas que brinden datos que posibiliten la estimación de movilidad intergeneracional a nivel nacional, por lo que la información obtenida a través de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza (EDCP) resulta de gran valor, aún cuando presenta algunas limitaciones que se exponen también en esta sección.

A partir de la tercera sección se presentan los resultados de las estimaciones de la movilidad intergeneracional en Venezuela, utilizando distintos indicadores empleados en diversos estudios internacionales y que permiten las comparaciones. Por último, el artículo intenta interpretar los resultados en función del proceso de modernización existente en buena parte del siglo XX.

1) EL PROBLEMA DE IDENTIFICAR LAS CLASES SOCIALES

Desde la definición de clase de propuesta por Marx, basada en la propiedad de los medios de producción, dentro de la teoría social se ha desarrollado una prolongada

discusión sobre cuáles son los principios en los que se basa la estratificación de las sociedades modernas: ¿sólo los económicos (Marx) o participan también o, en mayor medida, los signos de status (Weber)?

Frente a esta disputa que se origina en los clásicos, la tradición funcionalista en la sociología a inicios del siglo XX dejó a un lado el término clase, que no sólo implica la existencia de diferencias socio-económicas en las sociedades sino, adicionalmente, la configuración con base en éstas de sujetos políticos. En esta corriente se adoptará el concepto de estratificación, según el cual las diferencias socio-económicas y de status conforman un continuum de posiciones que reciben recompensas diferenciales por su contribución a la vida social y es dentro de esta tradición donde aparecen los primeros estudios empíricos con el objetivo de medir movilidad ocupacional y determinar el peso de las variables intervinientes².

Aún cuando en una vía paralela se mantuvo la tradición marxista en el análisis de clase, esta postura teórica afrontaba con dificultad el crecimiento de las llamadas “clases medias” durante el siglo XX, por contradecir la hipótesis de la proletarización que debía resultar del avance del capitalismo. Ante esto, autores como Poulantzas (1977) proponían salidas como el concepto de “nueva pequeña burguesía” con el cual se engloba a un creciente y heterogéneo grupo social (que no puede ser catalogado como burguesía o proletariado), por lo que resulta de poca utilidad para explicar el funcionamiento de las sociedades contemporáneas.

A pesar de estas dificultades de la propuesta marxista, la visión de una sociedad estática y equilibrada que ofrecía el funcionalismo no podía explicar la persistencia de las desigualdades o los nuevos conflictos políticos. Frente a ello, diversos autores propondrán el rescate del término clase social para la sociología no marxista, retomando elementos como la explotación y el conflicto, pero incluyendo también otros factores que parecen decisivos para la definición de la configuración de las clases en las sociedades contemporáneas:

- la propuesta según la cual el centro del conflicto de clases está en la dominación y el poder, por tanto el enfrentamiento entre propietarios y no propietarios es sólo una forma entre otras existentes en que se presenta este conflicto en las sociedades contemporáneas³ (Dahrendorf, 1962).

2 Una exhaustiva exposición de la tradición funcionalista en los estudios de estratificación y movilidad se encuentra en Cachón (1989).

3 La propuesta de Dahrendorf se asemeja a la de Poulantzas por cuanto ambos identifican el cambio registrado en el papel del capitalista, distinguiendo entre la posesión formal de medios de producción y el control del proceso productivo. Ambos reconocen que estos papeles son normalmente ejercidos por distintos actores en el capitalismo contemporáneo.

- El concepto de *capacidades de mercado*, que no sólo se refiere a la disposición de capital económico sino también a otros elementos (como las credenciales educativas), en los cuales se basa el intercambio desigual que perpetúa la explotación y genera conflicto (Giddens, 1972)
- Afirmación de la dimensión simbólica en la reproducción de la dominación de clases (función de reproducción social de la reproducción cultural), mediante el concepto de *habitus* que se refiere al sistema de disposiciones que orienta las prácticas y percepciones de los actores y es en parte producto de la interiorización de la arbitrariedad cultural (dominación cultural) que se impone a través de la escuela (Bourdieu y Passeron, 1977). Al mismo tiempo, el espacio social se concibe como la coexistencia de distintos campos en los que los actores compiten y son jerarquizados de acuerdo a un tipo específico de capital sea económico, cultural o social (Bourdieu, 1991).

Estas propuestas teóricas tienen el objetivo de aseverar la formación en las sociedades contemporáneas de grupos socio-económicos estables, generados por diferentes causas que se constituyen en clases sociales en conflicto (en contraposición a la noción de estratificación como simple sistema de distribución de recompensas). El énfasis está más en el proceso mediante el cual se reproducen o estabilizan las desigualdades que en la posibilidad de que se registre movilidad o intercambio entre los grupos⁴. Sin embargo, esta noción de clase (como grupo distintivo, con tendencia a la estabilidad y con características propias), pronto se trasladará a las mediciones empíricas de la movilidad. Estas proposiciones teóricas favorecerán un nuevo tipo de estudios, basado en el análisis de los cambios entre ocupaciones agrupadas en clases. Esta tradición fue iniciada por John Goldthorpe en Gran Bretaña (1987) y continuada en múltiples estudios comparativos internacionales⁵.

A fines de este siglo también cobran nuevo auge los estudios de clase de orientación marxista en virtud de la aparición de una nueva propuesta teórica (Wright, 1994) que intenta responder a la cuestión de la heterogeneidad de las sociedades contemporáneas proponiendo la coexistencia de diversos mecanismos de explotación (propiedad de los medios de producción, control de las organizaciones y credenciales educativas), para cada uno de los cuales se genera un par de clases antagónicas. El interés de Wright no consiste únicamente en formular una teoría que pudiera explicar apropiadamente la realidad social partiendo de una óptica marxista, sino que además se propone su

4 Excepto en la obra de Bourdieu, para quien la noción de trayectoria, y no sólo el monto y composición del capital, forma parte de la definición de las clases (Bourdieu, 2001).

5 Erikson y Goldthorpe (1987,1992); Ishida, Goldthorpe y Erikson (1991); Ishida, Muller y Ridge (1995); Carabaña (1999); Jorrat (2000), por citar sólo algunos de los estudios que realizan sus estimaciones de movilidad utilizando el esquema de clases desarrollado por Goldthorpe.

verificación empírica. Así, durante los años 80 y 90 en los países desarrollados se adelantaron dos proyectos internacionales de estudio sobre clases y la movilidad: en primer lugar, el proyecto CASMIN⁶ dirigido por Erikson, Goldthorpe y Portocarrero (1992) y el proyecto Encuesta de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase, dirigido por Wright⁷. Desde la perspectiva de este último, el estudio de la movilidad tiene un sentido distinto ya que tiene menor importancia la evaluación de las probabilidades individuales de ascenso o descenso, que la identificación de trayectorias modales, características de los individuos provenientes de ciertos grupos, y que son las que en definitiva explican la movilidad social registrada.

La abundancia de datos sobre movilidad inter-generacional en distintos países permitió evaluar dos hipótesis contrapuestas sobre la relación entre industrialización, desarrollo y movilidad: en primer lugar se encuentra la propuesta funcionalista según la cual el proceso de desarrollo económico origina incrementos permanentes de la movilidad; en segundo lugar están quienes proponen la no tendencia o falta de correlación entre movilidad y desarrollo⁸. La postura de Carabaña (1999) se basa en la reinterpretación de los datos del proyecto CASMIN y sostiene que el proceso de cambio estructural⁹ puede entenderse en 3 etapas:

- Fase 1, inicio de la industrialización: alta movilidad ascendente proveniente de los trabajadores agrícolas que se desplazan a ocupaciones industriales.
- Fase 2, industrialización tardía o avanzada: el proceso de industrialización se da en conjunto con el inicio del proceso de terciarización, la movilidad es de origen agrícola y también de obreros hacia las nuevas ocupaciones más calificadas del sector servicios.
- Fase 3, terciarización: disminución de la movilidad desde ocupaciones agrícolas, predominio de la movilidad de origen obrero hacia el sector servicios.

Tanto las diferencias entre países como los cambios en el tiempo dentro de un mismo país pueden explicarse al saber en cuál de estas fases se encuentra cada colectivo y así, las diferentes tendencias de la movilidad registrada se explican no sólo por las particularidades de cada país, sino por un fenómeno general que puede ocurrir con diversa duración e intensidad en los distintos países.

Esta discusión en torno al papel de la movilidad y su relación con los procesos de desarrollo económico es de gran importancia al considerar el caso de los países de

6 Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations

7 Una síntesis de los resultados está en Wright (1997).

8 Esta discusión se presenta en Erikson y Goldthorpe (1992) y es resumida por Carabaña (1999), quien recoge la propuesta de los anteriores para proponer una nueva explicación.

9 Entendido como el cambio en las estructuras de las ocupaciones en el origen y el destino.

América Latina, por ser ésta una región que se encuentra en acelerado proceso de cambio. Si bien aún no pueden ser considerados países desarrollados, durante el siglo XX han experimentado grandes transformaciones: aumento de la población urbana, disminución de la fecundidad y la mortalidad, crecimiento del sector industrial y de los servicios. La principal diferencia del proceso de modernización registrado en la región es que aún cuando algunos de los cambios han ocurrido con una mayor velocidad que en los países más desarrollados, desde la década de los sesenta los estudiosos de la región han enfatizado la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas, producto de una modernización no sólo incompleta, sino además excluyente.

Hemos visto que los estudios de movilidad son una forma de visualizar los cambios ocurridos en la estructura de las ocupaciones en una sociedad y que, al mismo tiempo, nos ofrecen una visión longitudinal del problema de la desigualdad. Por ambas razones deberían constituir una de las piezas fundamentales para la comprensión del funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, los estudios de movilidad social en América Latina fueron poco frecuentes después de la época de predominio de las teorías de la dependencia, en la cual había una fuerte influencia del marxismo y por tanto, el tema de las clases y su conflicto era central.

Se mantuvo en los años recientes el interés por la desigualdad, pero utilizando otros conceptos como pobreza, marginalidad y vulnerabilidad (Filgueira, 2001). Ello en gran medida por la orientación de los científicos sociales latinoamericanos a dar respuesta a la necesidades de información de los estados en virtud de las prolongadas crisis económicas y sus efectos sobre el bienestar social. Sin embargo, en los años recientes se ha producido un incremento de los estudios sobre la estructura de clases y la movilidad que se verifica por el crecimiento de la bibliografía sobre el tema¹⁰.

Al inicio de esta sección hemos mostrado la dificultad que entraña emprender estudios sobre movilidad por no existir aún consenso sobre qué es una clase social y cómo puede ser identificada empíricamente. Frente a este problema, el sociólogo se enfrenta a dos retos (Carabaña, 1999): que el esquema de clasificación a utilizar sea aplicable a cualquier sociedad y, a la vez, que sea explicable teóricamente. Si se cree que no es posible el logro de ambos objetivos, la tentación es no utilizar el concepto de clase por las dificultades teóricas que implica (lo que explicaría que los estudios sobre desigualdad se centren en la distribución del ingreso o la pobreza) o bien conformarse con la elaboración de categorías ad hoc. Esta última ha sido la postura de buena parte de los estudios sobre movilidad en la región (Hoffman y Portes, 2003; Kessler y Espinoza, 2003), que proponen sus propios esquemas de clase sin intentar mantener la comparabilidad con estudios internacionales previos. Si bien pudiera afirmarse que la

10 Binder y Woodruff (1999); Behrman, Birdsall y Székely (2000); Jorrat (2000); Zualles Cueto (2000); Klein y Tokman (2001); Gurrieri y Sáinz (2003); Portes y Hoffman (2003); Kessler y Espinoza (2003).

realidad latinoamericana no se ve reflejada claramente en las clasificaciones utilizadas en los países desarrollados¹¹, el recurso de la comparación internacional seguiría siendo indispensable para afirmar las características distintivas de la realidad latinoamericana.

Un punto en común entre la tradición de las investigaciones sobre movilidad en América Latina y los países desarrollados se refiere a un fenómeno ampliamente mencionado en la literatura latinoamericana, referida a cómo las transformaciones en los mercados laborales tienen efectos sobre los procesos de movilidad. Para ello, diversos autores han utilizado el término de movilidad estructural¹², entendida como aquella porción de la movilidad registrada que se debe a un cambio en las distribuciones de origen y destino. Este fenómeno ha sido central en las investigaciones sobre movilidad en América Latina (Filgueira, 2001), mostrándose amplia evidencia de que una alta proporción de la movilidad registrada en los países estudiados era de tipo estructural. Si bien basándose en este hecho (predominio de la movilidad estructural, bajo peso de la movilidad circulatoria o de reemplazo) se pueden sacar conclusiones desfavorables sobre el grado de apertura de las sociedades latinoamericanas, cabe resaltar que los estudios comparativos internacionales muestran también una alta correlación de la movilidad estructural con el monto de movilidad global (Carabaña, 1999). Una línea de análisis más fructífera sería, entonces, tratar de observar cómo los cambios en el tiempo de la movilidad registrada pueden asociarse a la aceleración o desaceleración de los procesos de cambio estructural en el mercado de trabajo, en otras palabras, al ritmo del proceso de desarrollo económico.

2) CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

A lo largo de este apartado presentaremos los aspectos más relevantes de la metodología utilizada para la estimación de la movilidad intergeneracional. En primer lugar, se discute sobre los distintos tipos de fuente que se pueden utilizar para el estudio de este fenómeno. Posteriormente se presentan las características de la fuente utilizada en el presente trabajo, así como sus limitaciones para el estudio. Por último, se presenta de forma abreviada cuál fue el procedimiento utilizado para identificar la clase de origen y destino de los entrevistados, información con la cual se obtienen luego los indicadores de movilidad.

11 Tanto Filgueira (2001) como Klein y Tokman (2001) resaltan que uno de los principales cambios en el mercado de trabajo en la región se refiere al crecimiento de la informalidad. En el trabajo de Kessler y Espinoza (2003) muestran que para el caso de Buenos Aires alrededor del 50% de los entrevistados no cuentan con un contrato de trabajo estable, habiéndolo tenido sus padres. Este fenómeno puede llevar a interpretaciones erróneas de la movilidad entre ocupaciones puesto que la seguridad y el ingreso asociados a ellas pueden ser muy distintos en el presente.

12 Ver Filgueira (2001), Klein y Tokman (2001), Gurrieri y Sáinz (2003).

Para el estudio de la movilidad intergeneracional se puede utilizar dos tipos de fuente: las encuestas tipo panel (la muestra de individuos se entrevista sucesivas veces a lo largo del tiempo) y las encuestas retrospectivas, en las cuales se entrevista a la muestra una sola vez y entre las preguntas se requiere información sobre su historia laboral y la ocupación de los padres. La mayoría de los estudios que hemos citado hasta el momento se basan en un diseño retrospectivo, aunque también hay importantes experiencias tipo panel para el análisis de la movilidad, como el Wisconsin Longitudinal Study, que ha obtenido información sobre educación y empleo sucesivamente hasta tener datos sobre tres generaciones (Warren y Hauser, 1997) y otras más recientes como el British Household Panel Study y el East German Panel Study (Solga, 2001).

La principal ventaja con que cuenta el diseño de encuestas panel se refiere al grado de certidumbre con que se refleja en cada ronda las características de los entrevistados, pero las múltiples mediciones cuentan también con inconvenientes como posibles cambios en las categorías entre las rondas y, sobre todo, la pérdida de información proveniente de la mortalidad en las aplicaciones sucesivas de la encuesta (en cada nueva ronda es menor el tamaño de muestra), lo que conlleva a que sea difícil establecer la validez o significación de las estimaciones sobre la trayectoria de la población en su conjunto. Un problema adicional lo constituye el mayor costo que implica este tipo de diseño, así como el mayor tiempo requerido para obtener resultados.

A pesar de su menor costo y aunque carecen de los problemas asociados a los panel, los estudios retrospectivos también pueden ofrecer importantes dificultades. La principal de ellas se refiere a que se debe confiar en la memoria del entrevistado para registrar los eventos pasados; sin embargo, se ha demostrado que puede existir un bajo margen de error al recoger información sobre la historia en ocupación y educación en un contexto adecuado de entrevista (Solga, 2001).

La Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza (EDCP) fue realizada entre 1997 y 1998 en el marco del Proyecto *La Pobreza en Venezuela. Causas y Posibles Soluciones*. Esta encuesta se puede clasificar dentro de las encuestas retrospectivas, aunque su principal objetivo no era la medición de la movilidad social, sino obtener información sobre valores y actitudes que puedan estar relacionados con la situación socioeconómica de las personas¹³. Dentro de este marco y con la finalidad de identificar otras variables que pudieran explicar las actitudes individuales, una sección del instrumento se dedica a recoger información sobre padres, hermanos, abuelos, cónyuge e hijos con respecto a diversas variables: lugar de nacimiento, educación y ocupación, entre otros¹⁴. Si bien la encuesta no recoge la historia laboral de los entrevistados (y por tanto no puede ser utilizada para medir movilidad intra-generacional), la información

13 Un resumen de los principales resultados del estudio sobre cultura y pobreza es presentado por Tito Lacruz y se publica en este mismo número bajo el título "¿Culturalmente pobres?"

14 Detalles sobre el diseño del instrumento y la muestra se puede ver en IIES, 1998.

registrada sobre los padres nos permite realizar una primera estimación de la movilidad social intergeneracional en Venezuela basada en la comparación de ocupaciones entre padres e hijos^{15,16}. Esta estimación se hace con base en el esquema de clasificación propuesto por John Goldthorpe (1987), ampliamente utilizado en estudios comparativos internacionales.

A pesar de la importancia de poder realizar estimaciones novedosas sobre el funcionamiento de la sociedad venezolana, es importante considerar las limitaciones de la fuente en virtud de que el instrumento no fue diseñado específicamente para la medición de movilidad intergeneracional. Los principales problemas que se encuentran son los siguientes:

- Temporalidad de la ocupación de los padres: Es una convención en los estudios de movilidad cuando se parte de diseños retrospectivos, preguntar sobre la ocupación del padre en un momento específico de la vida del entrevistado (por ejemplo, cuando el entrevistado tenía 15 años) y así se establece para toda la muestra una misma referencia temporal para el momento inicial o clase de origen. En el caso de la EDCP, sólo se preguntó ocupación del padre y al hacerlo así, se perdió la información de aquellos padres que se encontraban inactivos al momento de la encuesta. Para el resto de los casos, la ocupación declarada es sólo una aproximación a la clase de origen ya que puede haber ocurrido movilidad a lo largo de la vida laboral del padre.
- Las preguntas sobre características laborales no se hacen de igual forma a los distintos grupos: entrevistados, sus cónyuges y sus padres. Fue necesario hacer adaptaciones al esquema de clasificación por la pérdida de información resultante de desconocer la categoría de ocupación y el tamaño de la empresa para los padres de los entrevistados.

15 En Venezuela durante los años 80 se realizó un importante estudio empírico sobre la caracterización de las clases sociales en Venezuela (Briceño-León, 1992). Sin embargo, este trabajo no se proponía la estimación de movilidad inter-generacional en los términos en los que se ha definido en el presente estudio.

16 Un trabajo reciente de Ortega (2004) se propone estimar la movilidad social registrada en Venezuela utilizando el método propuesto por Berhman, Birdsall y Székely (2000). Estas estimaciones se basan en el análisis de las brechas educativas de los jóvenes: el método propone aislar el efecto de las condiciones familiares sobre las brechas al comparar la situación educativa de hermanos residentes en el mismo hogar. Si bien la existencia de estudios previos le permite comparar con otros países de la región y los Estados Unidos, estos resultados no pueden considerarse con propiedad estimaciones de movilidad ya que no se incluye ninguna referencia a las ocupaciones y el efecto de la educación sobre la movilidad que en este método se da por supuesto, constituye por el contrario una hipótesis a ser verificada (Ishida, Müller y Ridge, 1995; Brauns et al, 1999). Adicionalmente, el método trabaja únicamente con población joven y parece arriesgado concluir sobre la movilidad pasada o futura con base en una población sobre la que no se puede predecir la trayectoria laboral.

- No se cuenta en la EDCP con una variable que forma parte del esquema de clasificación de Goldthorpe: si el trabajador tiene bajo su supervisión a otros trabajadores, lo cual nos impide identificar a una de las clases que propone el autor: supervisor de trabajadores manuales.

Aún a pesar de estas limitaciones, se considera que las estimaciones de movilidad con base en la EDCP pueden ser válidas y en todo caso, la disminución del número de categorías (por estar imposibilitados de identificar algunas de las clases del esquema) lo que provoca en los resultados es una subestimación de la movilidad, ya que quedarán clasificados en un mismo grupo ocupaciones que en realidad pertenecen a clases distintas.

Una vez enumeradas las limitaciones, a continuación pasamos a un breve recuento de los pasos del procedimiento realizado para clasificar a los entrevistados de acuerdo a las clases propuestas por Goldthorpe:

1. Identificación de la población de referencia: para el estudio de actitudes realizado en la EDCP, se tomó al azar una muestra aleatoria entre las personas mayores de 18 años residentes en las viviendas seleccionadas. Dado que el objetivo del estudio no era medir la movilidad, en esta muestra de personas encontramos diversas situaciones laborales. Para efectos del presente estudio, se seleccionaron aquellos entrevistados que han registrado alguna movilidad con respecto a la situación de sus padres: los actualmente ocupados o desocupados (que han tenido alguna ocupación) y los que aún estando inactivos, se encuentran casados o unidos y, por tanto, puede atribuírseles la clase de sus cónyuges. Con base en estos criterios, el análisis se circunscribe a 9.375 casos.
2. Recodificación de las ocupaciones declaradas: las ocupaciones de entrevistados, cónyuges y padres está registrada en la EDCP con el código ISCO 88¹⁷ a 4 dígitos, es decir, a un nivel de precisión que permitía utilizar la clasificación propuesta. Para agrupar estas ocupaciones se utilizó una rutina automatizada proveniente del *International Stratification and Mobility File (ISMF)*¹⁸.
3. Asignación de las clases a los núcleos conyugales: Se mantuvo como unidad de análisis a las familias, para lo cual se utilizó el modelo de ocupación dominante de Goldthorpe (1987), de acuerdo al cual se compara la ocupación de ambos cónyuges para establecer la clase actual y la ocupación dominante se selecciona de acuerdo a los siguientes criterios:
 - 3.1. El trabajo remunerado domina a las situaciones de desempleo o inactividad y el empleo a tiempo completo domina al empleo a tiempo parcial.

17 Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones por sus siglas en inglés (OIT, 1991).

18 Disponible en: <http://home.scw.vu.nl/~ganzeboom/ismf/index.htm>.

- 3.2. Los empleos más cualificados dominan a los menos cualificados, los empleos no manuales a los manuales y los empleos por cuenta propia o propietarios dominan a los empleados.
4. Identificación de la clase de origen: Se tomó como clase de origen a la clase del padre¹⁹ y sólo se tomó la ocupación de la madre cuando el entrevistado declaró no haber conocido a su padre (3% de la muestra).

A lo largo de este procedimiento ocurrieron pérdidas de información producto de diversas causas: entrevistados que no declaran ocupación y padres inactivos o que no declaran ocupación, principalmente. De los 9.375 casos inicialmente seleccionados para el estudio, 80% de los casos contaba con información válida en todas las variables necesarias para la clasificación. Es por tanto con estos 7.523 casos con los que se realizan los cálculos que permitirán estimar la movilidad intergeneracional registrada en Venezuela.

3) EL MONTO DE LA MOVILIDAD REGISTRADA

La base de los cálculos de la movilidad es la tabla resultante de cruzar la clase de origen con la de destino (o actual). A continuación en el Cuadro 1 se presenta la tabla de movilidad resultante de la muestra de la EDCP.

Cuadro 1
Venezuela 1997-1998: Distribución de los Entrevistados por Clase Actual según Clase de Origen (Porcentajes sobre el total)

Destino Origen	Altos directivos	Bajos directivos	Rutinario no manual	Manual calificado	Manual no calificado	Trabajadores agrícolas	Total
Altos directivos	1,1	0,6	1,3	0,5	0,3	0,0	3,7
Bajos directivos	0,7	1,2	1,6	0,3	0,5	0,1	4,4
Rutinario no manual	2,2	2,9	9,4	3,4	4,1	1,0	23,0
Manual calificado	0,9	1,1	4,2	3,0	2,6	0,3	12,1
Manual no Calificado	1,2	2,9	8,9	5,5	8,2	1,6	28,2
Trabajadores agrícolas	1,0	1,8	7,6	4,2	6,3	7,5	28,5
Total	7,2	10,5	33,0	16,9	22,0	10,5	100,0

Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza.

19 Se registró un 81% de madres inactivas.

movilidad y ésta descende a menor grado de urbanización, siendo la diferencia entre Caracas y el área rural de 12 puntos en la movilidad total y 11 en la ascendente. Un patrón semejante se observa en los indicadores por región: las regiones caracterizadas por una mayor urbanización e industrialización son las que presentan mayor movilidad, y en las regiones más tradicionales y rurales, la movilidad es menor (especialmente, en la región llanera).

Buena parte de la movilidad registrada proviene de la movilidad estructural, aunque el peso de este componente es distinto en los diversos grupos: es mucho mayor para las mujeres que para los hombres, no muestra tendencia marcada según tamaño del centro poblado o región, pero sí según cohortes. La mayor movilidad estructural se registra en las cohortes mayores y hay una tendencia descendente, aunque con altibajos, a medida que pasamos a las cohortes más jóvenes. Esto nos refleja que mientras en las cohortes mayores era menor la movilidad, ésta estaba en gran medida ligada a importantes transformaciones en el mercado de trabajo: buena parte de la movilidad era forzada por los cambios en la “estructura de oportunidades” (Filgueira, 2001).

En los grupos más jóvenes la movilidad aumentaba, aún cuando disminuía la proporción de movilidad estructural, lo cual quiere decir que los cambios eran mayores que los forzados por las transformaciones en el mercado de trabajo, por lo cual podría afirmarse una progresiva apertura de la sociedad venezolana. En último término, se da un brusco cambio con respecto a la movilidad estructural de la cohorte más joven, lo cual podría ser un indicador de una estabilización de la estructura del mercado de trabajo: las transformaciones precedentes han sido tales que las ocupaciones de las generaciones más jóvenes se parecen en gran medida a la de sus padres. Otra forma de entender estos resultados puede ser en sintonía con la propuesta de Julio Carabaña con respecto a las 3 fases del proceso de cambio estructural en el mercado de trabajo: en la cohorte más joven disminuye la movilidad total, junto con la movilidad estructural y la ascendente. Podríamos pensar que en los últimos años, al no darse un con fuerza el proceso de tercerización, que brinde mayores oportunidades de ascenso a los hijos de trabajadores manuales urbanos, el efecto ha sido una disminución de la movilidad para los más jóvenes²¹. Sin embargo, dada la juventud de esta cohorte y por el hecho de que muchos de sus efectivos se encontraban dentro del sistema educativo al momento de la encuesta, es probable que pudieran observarse cambios en estos indicadores si se hiciera una nueva medición cuando esta cohorte tuviera una mayor edad. Por tanto, no podemos concluir claramente sobre el significado de este cambio de tendencia.

Los indicadores de movilidad absoluta global nos muestran unos resultados que parecen mostrar una gran apertura. Sin embargo, es importante compararlos con los obtenidos en otros países para los cuales se han hecho estudios semejantes. Esta comparación se muestra en el Cuadro 3.

21 Semejante al análisis propuesto por Carabaña (1999) para los casos de Hungría y Polonia.

Cuadro 3
Comparación Movilidad Registrada en Venezuela
con Países Proyecto CASMIN y España

País	Móviles (%)	Casos
Eire	53,2	787
Polonia	58,7	14.239
Irlanda del Norte	61,3	949
R.F. Alemana	62,1	1.937
Escocia	63,8	2.192
Inglaterra	64,9	4.634
Francia	64,9	9.254
España	65,9	14.687
Venezuela	69,6	3.627⁽¹⁾
Japón	70,2	1.060
Australia	70,4	1.654
Suecia	72,4	1.134
Estados Unidos	74,0	10.944
Hungría	79,0	6.912

(1) Los resultados de Venezuela en este cuadro se refieren sólo a los hombres para hacer los datos más comparables con el proyecto CASMIN.

Fuente: Carabaña (1999), *Tabulados Especiales EDCP*.

Al poner los resultados obtenidos para Venezuela en conjunto con los países del proyecto CASMIN encontramos que está situada entre los países de mayor movilidad, situación que suele estar relacionada con países “nuevos” (caso de Estados Unidos y Australia) en los que no existen los efectos de una estructura feudal previa, o países de industrialización reciente. Con esta comparación podemos concluir que la movilidad registrada en Venezuela ha sido notable, incluso en comparación con países de mayor desarrollo económico (que se supone, tienen una menor desigualdad y, por tanto, ofrecen mayores oportunidades a los más desfavorecidos).

Para comprender los flujos de la movilidad absoluta registrada no basta con saber la magnitud, es necesario conocer cuál es la clase de procedencia de los individuos móviles. Estos resultados se presentan a continuación en el Cuadro 4.

Cuadro 4
Venezuela 1997-1998: Estables y Móviles por Clase de Origen según Sexo, Cohorte
Tamaño del Centro Poblado y Región (%)

	Estables	Móviles					
		De I	De II	De III	De VI	De VIIa	De VIIb
Total	30,4	2,7	3,3	13,6	9,1	20,0	21,0
Hombres	33,7	2,4	2,9	14,6	9,2	17,0	20,2
Mujeres	25,8	3,0	3,7	12,3	9,1	24,1	22,0
Cohorte 1 (hasta 1926)	33,2	0,0	1,2	10,1	4,5	10,6	40,4
Cohorte 2 (1927-1936)	31,4	1,1	1,2	9,9	9,5	12,7	34,1
Cohorte 3 (1937-1946)	31,4	1,6	1,8	13,8	7,0	14,4	29,9
Cohorte 4 (1947-1956)	27,4	2,2	1,6	12,9	9,3	20,0	26,6
Cohorte 5 (1957-1966)	27,6	2,0	3,3	14,5	9,8	19,6	23,2
Cohorte 6 (1967-1979)	33,2	3,7	4,5	13,7	9,1	22,5	13,3
Gran Caracas	25,4	5,3	5,3	15,9	10,3	20,9	17,0
Ciudades							
Grandes	27,5	3,1	4,4	15,8	12,6	22,5	14,1
Ciudades							
Intermedias	30,3	2,3	3,9	13,0	7,3	21,0	22,1
Ciudades							
Pequeñas	28,5	1,6	1,6	12,1	9,5	18,4	28,3
Area Rural	37,8	0,9	1,0	10,9	6,1	17,4	25,9
Central	29,3	2,7	2,9	14,2	10,4	19,2	21,3
Centro-							
Occidental	36,8	1,7	2,1	12,5	7,0	19,5	20,5
Los Andes	35,2	1,8	2,0	12,5	8,1	16,6	23,8
Zulia	27,4	2,5	4,2	16,0	9,9	23,8	16,1
Guayana	24,7	2,0	2,9	11,5	16,2	24,8	17,9
Oriente	29,9	1,6	3,2	11,7	9,3	19,9	24,3
Los Llanos	38,1	0,5	1,0	9,5	1,9	15,1	33,9

Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza.

Como era de esperar, el grueso de los móviles son individuos cuyos padres eran trabajadores manuales no calificados o trabajadores agrícolas (clases VIIa y VIIb, respectivamente), entre ambos grupos se concentra el 41% de la movilidad registrada para el total de la muestra. Se aprecia un cambio de tendencia entre estas dos clases de origen al observar las variaciones registradas entre las cohortes: en las cohortes mayores predomina abiertamente la movilidad de origen agrícola (40%) y el peso de esta categoría va descendiendo a medida que pasamos a las cohortes más jóvenes. Ya en la cohorte 6 (nacidos entre 1967 y 1979) es mayor la movilidad registrada desde los orígenes manuales no calificados, lo cual nos podría estar mostrando que es en este

grupo de edad cuando ha pasado el efecto del proceso de migración rural - urbana y, consecuentemente, ha habido una pérdida de importancia de las ocupaciones agrícolas para pasar al panorama ya presentado en otros estudios realizados en América Latina (Kessler y Espinoza, 2003) donde la mayor movilidad se registra a partir de posiciones obreras hacia ocupaciones más calificadas del sector urbano. Sin embargo, tal como se había sugerido anteriormente al revisar los datos de movilidad global (total de móviles, movilidad estructural), el aumento de la movilidad de origen obrero no ha sido suficiente para compensar la disminución en la movilidad de origen agrícola, lo cual se relaciona con el descenso de la movilidad total en la cohorte más joven del estudio.

El comportamiento de la clase de origen de los móviles según tamaño del centro poblado, como era de esperar, nos muestra que en la Gran Caracas y las grandes ciudades predomina la movilidad de orígenes manuales no calificados, en las ciudades intermedias el peso de este grupo y el de los trabajadores agrícolas es casi el mismo, mientras que en las ciudades pequeñas y el área rural, se incrementa la movilidad proveniente de orígenes agrícolas. Este patrón se mantiene en las diferencias observadas entre las regiones, resaltando nuevamente el caso de la región Los Llanos, en la cual la movilidad de origen agrícola es la más alta del país.

Hemos estudiado hasta el momento la movilidad absoluta global, es decir, el monto general de estables y móviles. Para tener un panorama más claro sobre el problema de la desigualdad entre las personas provenientes de distintos orígenes hace falta ir más allá y estudiar el fenómeno de la movilidad absoluta particular, que se refiere a la distribución de los destinos en cada clase de origen; esto es, no ya cuál es el origen de los individuos que registran movilidad, sino a cuáles clases efectivamente llegan los originarios de las distintas clases. El resultado para el conjunto de la muestra se presenta en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Venezuela 1997-1998: Distribución de los Entrevistados por Clase Actual según Clase de Origen. Porcentajes de salida (outflow)

Destino Origen	Altos directivos	Bajos directivos	Rutinario no manual	Manual calificado	Manual no calificado	Trabajadores agrícolas	Total
Altos directivos	28,8	17,0	33,8	12,5	7,6	0,2	100,0
Bajos directivos	16,9	26,5	36,7	7,0	11,2	1,6	100,0
Rutinario no manual	9,6	12,5	40,9	14,8	17,7	4,4	100,0
Manual calificado	7,1	9,1	34,8	24,6	21,8	2,6	100,0
Manual no calificado	4,4	10,2	31,4	19,5	29,0	5,6	100,0
Trabajadores agrícolas	3,6	6,3	26,7	14,8	22,2	26,5	100,0
Total	7,2	10,5	33,0	16,9	22,0	10,5	100,0

Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza.

Al observar los resultados de las tasas de movilidad particular, encontramos en primer lugar una clara diferencia entre las ocupaciones urbanas y los trabajadores agrícolas, ya que la proporción de hijos de trabajadores de las clases restantes tienen un muy baja participación en su clase actual como trabajadores agrícolas: varía entre 0,2% y 5,6% mientras que un 26,5% de los hijos de trabajadores agrícolas se mantienen en ese mismo grupo de ocupaciones. Es en esta columna donde se presentan las diferencias más altas de todo la tabla.

La ocupación que presenta una mayor proporción en los provenientes de todos los orígenes, es la clase de los trabajadores rutinarios no manuales, quienes muestran un peso mayor incluso que las propias clases de origen de cada grupo; es decir, es más frecuente que un trabajador proveniente de origen obrero o incluso, bajos y altos directivos, terminen en una ocupación rutinaria no manual que en su propia clase de origen. Este resultado que parece de difícil comprensión puede ser causado por la propia estructura de clases utilizada (recuérdese que en este estudio no se ha identificado a la clase de propietarios de pequeñas empresas) o bien podría considerarse como un nuevo indicador de un proceso de ralentización del proceso de cambio estructural que ha limitado el crecimiento de puestos de trabajo de mayor calificación. Esta última posibilidad se considera altamente probable, en virtud de la prolongada recesión económica que ha vivido el país y que ha tenido importantes efectos sobre la estructura del mercado de trabajo por el incremento del sector informal (Orlando, 2001), hecho que ha tenido una relación directa con el crecimiento de la pobreza en los últimos años (Riutort, 1999).

Tratando de evaluar si hay evidencias de que exista una barrera entre ocupaciones manuales y no manuales, encontramos que puede haberla, pero sólo con respecto a las posiciones directivas porque ya hemos visto la alta proporción de trabajadores rutinarios no manuales provenientes de origen manual, sea urbano o rural. Se observa que el porcentaje de llegada a las clases I y II (altos y bajos directivos) es mucho menor para quienes provienen de orígenes agrícolas, aumenta poco a poco a medida que se pasa a clases más altas de la escala. Sin embargo, no puede hablarse con propiedad de la existencia de una barrera manual – no manual, ya que la diferencia entre el origen rutinario no manual y el de trabajadores manuales calificados es de apenas 2 puntos porcentuales. En todo caso, parece más apropiado hablar de una barrera entre las ocupaciones de categoría directiva y el resto.

El análisis precedente se ha hecho con base en la movilidad registrada en el conjunto de la muestra, pero ya anteriormente hemos visto que tanto el monto de movilidad como el origen de los móviles varía al considerar grupos específicos en virtud del sexo, la edad, el tamaño del centro poblado o la región de residencia. Para tratar de obtener información sobre los posibles cambios en los destinos de las distintas cohortes (que en los indicadores de movilidad global mostraban importantes cambios de tendencia), se procederá a la realización de una prueba estadística que permitirá verificar si se produce

una asociación entre clase de destino y cohorte, para cada de las clases de origen. En otras palabras, se pretende conocer si ha habido variación en la movilidad particular a lo largo del tiempo. Los resultados se presentan en el Cuadro 6.

Cuadro 6
Medida G^2 de las Tasas de Movilidad Particular por Cohortes

Clase de Origen	G^2	Nº de casos	Grados de libertad	Probabilidad
Altos directivos	35,48	264	20	0,018
Bajos directivos	36,28	311	25	0,067
Rutinario no manual	63,43	1.705	25	0,000
Manual calificado	45,45	887	25	0,007
Manual no calificado	51,41	2.051	25	0,001
Trabajadores agrícolas	89,21	2.282	25	0,000

Nota: G^2 se refiere a χ^2 de razón de verosimilitud.

Fuente: Tabulaciones Especiales EDCP.

Los menores valores de G^2 son los encontrados en las clases I y II, es decir, los orígenes en posiciones directivas. Para estos grupos se observa un baja asociación entre clase de destino y cohorte, expresado tanto por el menor valor de G^2 , como en una menor significación estadística de los resultados. En las clases restantes se puede afirmar que sí ha habido cambios en el tiempo por cuanto se verifica la asociación entre cohorte y clase de destino. Los resultados son, además, significativos en términos estadísticos.

A lo largo de la presente sección hemos mostrado diversos indicadores sobre la movilidad absoluta registrada, tanto en términos globales, como en las diversas clases de origen. Han salido a relucir una serie de hechos que nos dan luces sobre el funcionamiento de la sociedad venezolana: la movilidad ha sido mayor en las áreas urbanas (a mayor tamaño del centro poblado, mayor movilidad), los móviles han provenido de trabajadores manuales, aunque el predominio de cada sector (agrícola, obreros) varía en los diversos grupos de edad y en los distintos entornos (nuevamente, se verifica la diferencia entre área urbana y rural), se observa una disminución de la

movilidad en los más jóvenes, que se relaciona con un descenso de la movilidad de origen agrícola que no se ve compensada por un aumento proporcional de la movilidad de trabajadores manuales no calificados. En cuanto a la movilidad particular, se ha encontrado que quienes tienen su origen en clases directivas (I y II) muestran un patrón distinto de movilidad, por la distancia que se observa en el resto de las clases para llegar a estas posiciones. Esta diferencia se vio corroborada posteriormente por ser estas clases las que han mostrado menos cambios en sus destinos en las diversas cohortes.

4) INDICADORES DE MOVILIDAD RELATIVA

Los resultados que se han mostrado hasta el momento se refieren a la magnitud de la movilidad registrada (individuos móviles en relación con el total), características o componentes de la movilidad global (al distinguir tipos de movilidad –estructural o circulatoria–), tasas de movilidad (al estudiar la movilidad absoluta particular). Sin embargo, ninguno de estos indicadores nos da respuesta sobre las cuestiones planteadas al inicio del trabajo, relativas al grado de apertura o fluidez de las sociedades, como aproximación al problema de la perpetuación de las desigualdades. Para acercarnos a este fenómeno es necesario introducir el concepto de movilidad relativa.

En primer lugar, la movilidad relativa global se refiere a la apertura de una estructura de clases, es decir, la facilidad con que los individuos pueden pasar de una clase a otra (Carabaña, 1999). La prueba de este tipo de hipótesis se hace mediante las diversas técnicas estadísticas que permiten verificar la existencia de asociación entre 2 variables nominales, ya que si la asociación entre origen y destino es muy alta se puede concluir que la sociedad en cuestión es cerrada (es poco probable el intercambio entre clases) y si hay independencia entre origen y destino, se concluye que la sociedad es completamente abierta, ya que el origen de los individuos no condiciona su clase de destino. En el cuadro 7 se prueba la hipótesis de independencia entre origen y destino para el conjunto de la muestra y los grupos constituidos por el sexo y la cohorte de nacimiento.

Encontramos que sólo para uno de los grupos considerados no puede rechazarse la hipótesis nula: se refiere a la cohorte mayor, la que contaba con 71 años o más al momento de la encuesta. Para este grupo, la probabilidad de que la distribución encontrada se deba al azar es muy alta, por lo que puede concluirse que existe independencia entre la clase de origen y la de destino. Este resultado puede estar causado por un efecto del tamaño de muestra ya que este grupo es el que posee un menor número de casos, y es sabido que mientras mayor es el tamaño de muestra, mayor la probabilidad de hallar asociaciones estadísticamente significativas (Briones, 1990).

Para el conjunto de la muestra y los grupos restantes, se verifica que existe asociación entre las clases de origen y destino. Este resultado era de esperar, tal como habíamos enunciado al inicio del presente trabajo, las sociedades contemporáneas se encuentran

Cuadro 7
Venezuela: Indicadores de Movilidad Relativa Global.
Prueba de Hipótesis de Independencia por Sexo y Cohortes

Sexo y Cohorte	χ^2	Grados de Libertad	Probabilidad
Total	1378,0	25	0,00
Hombres	823,7	25	0,00
Mujeres	589,5	25	0,00
Cohorte 1 (hasta 1926)	18,0	20	0,59
Cohorte 2 (1927-1936)	109,0	25	0,00
Cohorte 3 (1937-1946)	136,6	25	0,00
Cohorte 4 (1947-1956)	262,0	25	0,00
Cohorte 5 (1957-1966)	379,7	25	0,00
Cohorte 6 (1967-1976)	704,7	25	0,00

Fuente: Tabulaciones Especiales de la Encuesta de Determinantes Culturales de la Pobreza.

aún lejos de este ideal meritocrático. Aún cuando hemos constatado la existencia de asociación entre clase de origen y destino, este tipo de prueba no nos permite conocer la naturaleza de esta asociación, ni describir en cuáles grupos se verifica más apertura o más cierre. Para ello hay que recurrir a otros conceptos de movilidad relativa y nuevas pruebas estadísticas que mostraremos más adelante.

Continuamos ahora con la exposición del concepto de movilidad relativa particular. Este indicador intenta comparar la movilidad registrada en la tabla con un mismo patrón para todas las clases. Existen distintas propuestas de cálculos de índices, en relación con el patrón de comparación a utilizar²². Nosotros hemos escogido calcular el indicador utilizando como patrón de referencia la movilidad registrada por los trabajadores

22 En Cachón (1989) y Carabaña (1999) se hace una exposición de los distintos índices utilizados en la literatura sobre movilidad.

En primer lugar, se prueba nuevamente la hipótesis de independencia o movilidad perfecta. Como podemos observar, éste es el modelo que peor se ajusta a los datos observados²⁴. A continuación se prueba el modelo de movilidad cuasi - perfecta, que se basa en una partición de la tabla al considerar sólo los casos que están fuera de la diagonal principal. Lo que se busca verificar es si, dejando a un lado a los inmóviles, en el resto de la tabla se observa independencia entre clase de origen y destino. Podemos observar que en este segundo modelo la bondad de ajuste se incrementa de forma notable, sin embargo tampoco aquí se verifica estadísticamente la independencia entre orígenes y destinos: la probabilidad de que la distribución encontrada se deba al azar es muy baja, por tanto, se concluye que sigue existiendo asociación entre origen y destino, aún aislando el efecto de la diagonal principal.

Por último, en el cuadro 9 se prueba un tercer modelo llamado *Fluidez social constante*. Ha sido ampliamente discutida en la bibliografía la llamada hipótesis FJH que propone que la fluidez social es “básicamente la misma” en los países industrializados y se ha probado empíricamente con los datos del proyecto CASMIN (Erikson y Goldthorpe, 1992; Carabaña, 2002). En el momento no se cuenta con la información que posibilite incluir los datos resultantes del presente estudio en modelos que permitan probar si éstos tienen la misma fluidez que los países del proyecto CASMIN. Sin embargo, se puede verificar parcialmente la hipótesis FJH al probar si en los datos de Venezuela se observa fluidez constante en el tiempo, lo cual se hace incluyendo en el modelo la variable cohorte. El resultado de esta prueba es un G^2 menor incluso al del modelo de cuasi – independencia (por tanto, parece mejorar la bondad del ajuste); sin embargo, no se comprueba la hipótesis de fluidez social constante ya que la probabilidad de que las diferencias encontradas se deban al azar es demasiado baja y por tanto, se debe aceptar que sí ha habido cambios en la fluidez social registrada en las distintas cohortes. Se intentó probar el mismo modelo para distintos grupos de cohortes que nos permitieran establecer períodos en los cuales sí se mantuvo una fluidez social constante. Los resultados se presentan a continuación.

24 En el análisis loglineal, el ajuste perfecto del modelo a los datos observados está presente cuando $G^2=0$. Esto ocurre en el modelo saturado, aquél que incluye todos los efectos posibles (Nigel, 1981). El objetivo es identificar el modelo más simple que brinda la mayor bondad de ajuste.

Cuadro 10
Venezuela: Prueba hipótesis FJH o CnSF (Fluidez social constante) en grupos de Cohortes

Cohortes	G ²	Grados de libertad	Significación	No. Casos
Total	170,81	125	0,00	7.500
Cohorte 1-3	60,74	50	0,14	1.029
Cohorte 4-5	24,37	25	0,50	3.648
Cohorte 4-6	68,17	50	0,04	6.471

Fuente: Tabulados Especiales de la EDCP. Cálculos Propios.

Al dividir la tabla según cohortes se obtienen mejoras en la bondad de ajuste del modelo, y adicionalmente, se encuentran grupos en los que puede sostener la hipótesis de fluidez constante en el tiempo. Así encontramos que se mantienen constante en las cohortes 1 a 3 (nacidos antes de 1927, hasta la cohorte nacida entre 1937 y 1946), es decir, las cohortes que nacen y desarrollan sus primeros años de vida antes del inicio del período democrático. Constituyen un segundo grupo las cohortes 4 y 5 (nacidas entre 1947 y 1957), quienes se ha demostrado son las primeras cohortes beneficiarias del proceso de masificación del sistema público de enseñanza y que muestran cambios importantes en sus indicadores educativos con respecto a las cohortes precedentes (González, 2003).

Se muestra también en el cuadro 10 el resultado de probar si existe fluidez constante entre las cohortes 4, 5 y 6 y se encuentra que al tomar las tres cohortes en conjunto se debe rechazar la hipótesis nula, incluso con un nivel de significación de 5%. Lo anterior significa, que al introducir a la cohorte 6 aparecen diferencias significativas asociadas a esta variable. Por tanto, se considera prudente mantener como un período de estabilidad las cohortes 4 y 5 y dejar aparte a la cohorte 6 que, como ya hemos visto anteriormente en los indicadores de movilidad absoluta, muestra un cambio importante en relación con la tendencia observable en las cohortes mayores.

CONCLUSIONES

La descripción de la movilidad social registrada en Venezuela hecha a lo largo del presente trabajo nos muestra que ha existido una importante movilidad y que ésta ha sido primordialmente ascendente. La caracterización según tipo de movilidad evidencia que la movilidad registrada se ha debido en gran medida a cambios estructurales en el mercado de trabajo, principalmente el cambio de ocupaciones agrícolas a ocupaciones

del sector urbano impulsado por el proceso de modernización que favoreció la migración rural-urbana. La magnitud de la movilidad total y ascendente varía de acuerdo a algunas características claves como la cohorte de nacimiento, la región del país y el tamaño del centro poblado, registrándose mayor movilidad a mayor tamaño del centro poblado.

La clase de origen que muestra una mayor frecuencia entre los móviles son los trabajadores no calificados, aunque el peso de los agrícolas y no agrícolas varía de acuerdo a la cohorte y el tamaño del centro poblado: a medida que se pasa a las cohortes más jóvenes, disminuye la proporción de móviles de origen agrícola y aumenta la de trabajadores manuales no calificados.

Luego de la descripción de la magnitud de móviles e inmóviles de acuerdo a las diferentes variables que hemos mencionado, se comenzó a mostrar las diferencias en la probabilidad de alcanzar distintas clases de acuerdo a la clase de origen, tanto mediante las tasas de movilidad particular como con las probabilidades de llegar a las distintas clases en relación con los trabajadores manuales no calificados. Se observaron importantes diferencias, las más resaltantes referidas a las clases I y II (altos y bajos directivos) y las clases VIIa y VIIb (trabajadores manuales no calificados y trabajadores agrícolas). Estas clases que están en los extremos de la clasificación utilizada muestran comportamientos diferentes a los de las clases intermedias, por lo que podría pensarse en la existencia de barreras que dificultan la movilidad desde las clases más bajas o hacia las más altas.

Las pruebas realizadas con análisis loglineal dan como resultado que la movilidad registrada en Venezuela no se ajusta a los modelos de movilidad perfecta o cuasi - perfecta. Si bien para el conjunto de la muestra no se prueba la hipótesis de fluidez social constante (CnSF o FJH), sí se logra determinar distintos períodos en que los patrones de movilidad se mantienen. Las cohortes se agrupan de manera consistente con los resultados educativos que se ha encontrado en estudios previos, cambios que están directamente relacionados con el inicio del período democrático y sus políticas de masificación del sistema educativo público (González, 2003). Estos resultados deben, sin embargo, ser tomados con cautela a la hora de sacar conclusiones sobre la relación entre educación y movilidad, ya que los logros educativos no se quedan estancados a partir de la cohorte 5, por el contrario, son los más jóvenes quienes ostentan un mayor promedio de años de escolaridad y aún a pesar de este mayor logro, tal como hemos visto anteriormente, en esta cohorte disminuye la movilidad total y la movilidad ascendente.

Es importante intentar explicar esta aparente paradoja. Probablemente en estos resultados se expresa el efecto del crecimiento económico o, en términos más generales, el desarrollo. Mientras las cohortes mayores, además de haber incrementado su escolaridad, ingresan al mercado de trabajo en momentos de crecimiento sostenido, la cohorte más joven lo hace en el medio de una recesión que se instala desde la década de los 80.

Con los resultados que acabamos de resumir, al intentar hacer un balance sobre las ganancias en justicia o igualdad que ha obtenido la sociedad venezolana en los últimos años, es importante resaltar que la evidencia disponible no muestra una sociedad especialmente cerrada. Por el contrario, las estimaciones realizadas nos sitúan entre los países con alta movilidad intergeneracional. Y aún cuando no se validan las hipótesis de movilidad perfecta o cuasi-perfecta y se presume la existencia de barreras que dificultan la movilidad desde ciertas clases, también los datos nos muestran que la sociedad ha experimentado una progresiva apertura: al pasar de las cohortes mayores a las más jóvenes, se verifica una disminución del peso de la movilidad estructural, mientras se mantiene la tendencia ascendente de la movilidad total y ascendente.

El gran cambio educativo experimentado por las cohortes nacidas entre 1947 y 1957 podría haber tenido un efecto sobre la movilidad registrada por esas mismas cohortes, cuya experiencia se distingue significativamente de las anteriores al proceso de masificación educativa y también sobre esa progresiva apertura que parecen sugerir los resultados de movilidad estructural y circulatoria. Si bien la educación no puede considerarse una panacea ya que su efecto sobre la movilidad no es directo y amerita un estudio con mayor detalle (y la prueba de ello está en la cohorte más joven), vale la pena tener presente que aún cuando la modernización, en general, y la masificación del sistema de enseñanza, en particular, hayan sido desiguales o incompletas, han logrado en un período de tiempo relativamente corto transformar radicalmente características centrales de la población venezolana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andersen, Lykke (2000): *Social mobility in Latin America*, Instituto de Investigaciones Socio – Económicas, Universidad Católica Boliviana, La Paz.
- Berhman, Jere, Birdsall, Nancy y Székely, Miguel (2000): “Intergenerational mobility in Latin America: deeper markets and better schools make a difference”, Birdsall, Nancy y Graham, Carol (eds.): *New markets, new opportunities? Economic and social mobility in a changing world*, Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Binder, Melissa y Woodruff, Christopher (1999): *Intergenerational mobility in educational attainment in Mexico* en: <http://www-irps.ucsd.edu/irps/faculty/mexeduc.pdf>.
- Bourdieu, Pierre (1991): *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus.
- Bourdieu, Pierre (2001): *Poder, derecho y clases sociales*, Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude (1977): *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, Barcelona: Laia.

DECLIVE DE UNA ECONOMÍA PETROLERA Y LA CUESTIÓN DE LA VIVIENDA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS¹

IRENE LAYRISSE DE NICULESCU*

Resumen

El agravamiento del problema de la vivienda en Venezuela es una manifestación del proceso de decrecimiento económico y empobrecimiento ocurrido en las últimas décadas. Si bien éste ha sido un proceso complejo, se atribuye su origen a la reducción permanente de las exportaciones petroleras en los años ochenta. Desde entonces fueron postergadas las reformas y políticas públicas requeridas para reducir la dependencia de la renta petrolera y adecuar la economía y las finanzas públicas al nuevo contexto internacional. Prevalció la inercia institucional así como los rasgos inconvenientes de las economías petroleras. En ese sentido, se destacan la persistente volatilidad del gasto fiscal y sus efectos adversos sobre la estabilidad macro-económica y, en consecuencia, sobre la inversión, el empleo y el salario real. Respecto a la vivienda, se resalta el impacto sobre el mercado formal y el deslizamiento de la demanda de las familias de ingresos medios hacia los programas sociales, al mismo tiempo que aumentaban significativamente los requerimientos de atención habitacional pública de las familias de menores ingresos. En general, el documento tiene por objeto mostrar las restricciones económicas a la formulación de la política habitacional, como pilar básico de la política social y de reducción de la pobreza.

Palabras clave: Crecimiento económico, Vivienda, Política habitacional, Infraestructura y Desarrollo urbano.

1 Una primera versión de este documento es publicada en *Habilitación de Barrios. Política de Estado. La recomposición de la ciudad informal*, Carmelita Brandt y Marta Vallmitjana (comps.), Instituto de Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.

* Economista. Doctora en Ciencias, Mención Urbanismo. Prof. Titular del Instituto de Urbanismo de la FAU-UCV.

Abstract

The worsening of the housing problem in Venezuela is a manifestation of the economic decrease and impoverishment process spread over the last decades. Although this one has been a complex process, its origin is attributed to the permanent decrease of the oil exports during the eighties. Since then the reforms and public policies required to reduce the dependence of the oil rent and to adapt the economy and the public finances to the new international context were postponed. Institutional inertia prevailed as well as the inconvenient features of the oil economies. In this sense, the persistence of the fiscal expenditure volatility is stressed as well as its adverse effects on macroeconomic stability and, consequently, on investment, employment and real wage. With regard to housing, the impact on the formal market is underlined as well as the sliding of the middle income households demand towards the social programs. At the same time that the lowest income households' requirements of public housing were significantly increasing. In general, the paper intends to point out the economic restraints to the housing policy design, as a basic pillar of the social and poverty reduction policies.

Key Words: Economic growth, Housing, Housing policy, Infrastructure and Urban development.

Résumé

L'aggravation du problème du logement au Venezuela est une manifestation du processus de décroissance économique et d'appauvrissement des dernières décennies. Bien qu'il s'agit d'un processus complexe, son origine est attribuée à la diminution permanente des exportations de pétrole pendant les années '80. Depuis lors les réformes et les politiques publiques exigées pour réduire la dépendance envers la rente pétrolière et pour adapter l'économie et les finances publiques au nouveau contexte international ont été repoussées. L'inertie institutionnelle a prévalu ainsi que les caractéristiques incommodes des économies pétrolières. Dans ce sens, la persistance de la volatilité des dépenses fiscales est ressortie ainsi que ses effets nuisibles sur la stabilisation macroéconomique et, par conséquent, sur l'investissement, l'emploi et le salaire réel. En ce qui concerne le logement, le fort impact sur le marché formel est souligné ainsi que le glissement de la demande des ménages des revenus moyens vers les programmes sociaux, en même temps que les besoins d'attention publique des ménages des plus bas revenus augmentaient de manière significative. En général, le but de cet article est de montrer les contraintes économiques pour la formulation de la politique du logement, comme pilier de base des politiques sociales et de réduction de la pauvreté.

Mots clés: Croissance Économique, Logement, Politique de logement, Infrastructure et Développement urbain.

INTRODUCCIÓN

Existe cierto consenso entre los profesionales e investigadores del sector vivienda acerca de la relativa efectividad de políticas habitacionales hasta los años setenta en Venezuela, pero que, desde entonces, éstas han sido desacertadas e ineficaces y requieren ser reformuladas y adecuadas al nuevo contexto económico y social del país. Una percepción similar, de pérdida de efectividad, parece ser también compartida en otras áreas relacionadas con las políticas públicas. Sin embargo, los problemas actuales del país difícilmente podrán encontrar soluciones a través de políticas sectoriales, ya que se requiere, como condición necesaria, la instrumentación de un conjunto de reformas estructurales e institucionales conducentes a revertir el proceso de involución económica y social ocurrido en los últimos veinticinco años. En ese orden de ideas, este documento presenta una interpretación de las causas del declive de la economía venezolana y el consecuente empobrecimiento de la población, del debilitamiento institucional del Estado y de las finanzas públicas, procesos estos que han conducido a la desmejora de las condiciones de vida de los venezolanos y, en particular, al agravamiento del problema de la vivienda. En la explicación del proceso de deterioro económico y social se coloca el énfasis en los determinantes macroeconómicos de índole estructural y, especialmente, los fiscales, así como en los aspectos institucionales relacionados. El enfoque adoptado intenta aportar una visión de conjunto sobre la problemática a afrontar, con el objeto de contribuir a definir el marco de restricciones a la formulación de la política habitacional, la cual debe constituirse en un pilar básico de la política social y de lucha contra la pobreza.

DECLIVE DE UNA ECONOMÍA PETROLERA

Después de décadas de crecimiento sostenido, en los últimos veinticinco años Venezuela ha sufrido un proceso de decrecimiento económico y de empobrecimiento que ha obedecido fundamentalmente a la disminución de las exportaciones petroleras desde los ochenta y la ausencia de una respuesta adecuada de las instituciones² y de las políticas públicas para enfrentarla.

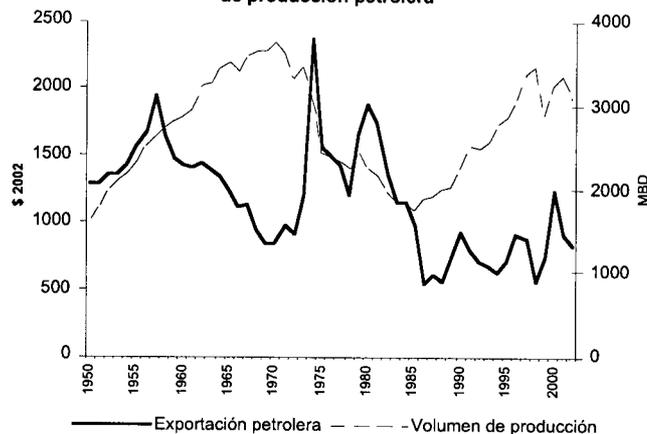
Efectivamente, ha persistido la supeditación a la renta petrolera de la economía interna y de las finanzas públicas. En ese sentido, Venezuela ha compartido los rasgos característicos que han presentado, en mayor o menor grado, las economías petroleras emergentes, a pesar de sus diferencias históricas, culturales y sociales. Especialmente,

2 Se utiliza el concepto “instituciones” en el sentido definido por North (2001). Las instituciones son las normas formales e informales que enmarcan el comportamiento de una sociedad,

pueden señalarse los siguientes (Bjerkholt y Niculescu, 2003): 1) ingresos fiscales volátiles y gasto público procíclico, 2) sesgo hacia la producción de los sectores no transables (comercio y servicios) en detrimento de los sectores transables no petroleros, especialmente del sector manufacturero, impulsor del progreso técnico y la productividad, conocido como “enfermedad holandesa”, 3) preponderancia del rol del Estado en la actividad económica y la distribución debido al elevado monto de recursos canalizados a través del sector público, 4) predominancia de la “búsqueda de renta” y menosprecio por la eficiencia y la productividad. Estas características y comportamientos “rentistas” tienden a perpetuarse e impedir la realización plena del potencial de crecimiento y de desarrollo social, lo cual ha llevado a preguntarse si la disposición abundante de ese recurso natural no renovable es una “maldición”, cuando en realidad el desempeño económico y social de los países petroleros depende de cómo se afronta esa condición.

Desde los años treinta, el nivel de actividad económica en Venezuela dependió crucialmente del efecto multiplicador del gasto público, fundamentalmente financiado con ingresos petroleros provenientes del resto del mundo,³ lo cual le proporcionó a ese gasto un alto potencial para impulsar la economía interna. Ese mecanismo tradicional de dinamización de la actividad económica funcionó durante décadas, generando un crecimiento sostenido y un avance favorable en términos de desarrollo económico y social, manifiesto en el aumento del ingreso real *per capita* y la mejora de los servicios públicos e indicadores sociales.

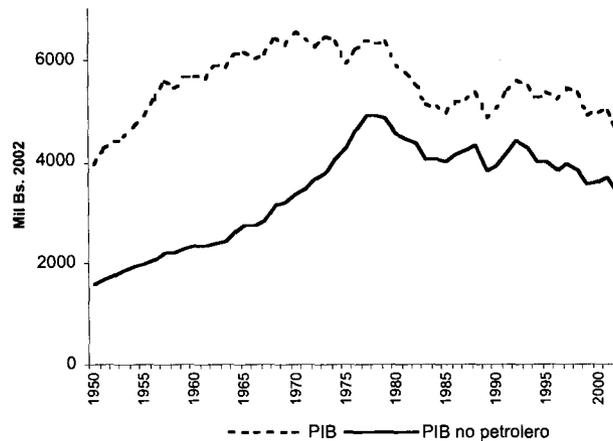
Gráfico 1
Exportación real *per capita* y volumen
de producción petrolera



mientras que las organizaciones son los actores de esa sociedad.

- 3 La gran diferencia entre el precio de venta en el mercado internacional y el costo de producción del petróleo da lugar a una renta que es en su mayor parte percibida por el Estado

Gráfico 2
 PIB y PIB no petrolero real *per capita*



No obstante, ese mecanismo de dinamización de la economía interna determinó así mismo una alta vulnerabilidad de la misma ante las fluctuaciones del mercado petrolero internacional, acentuadas desde inicios de los setenta por la mayor volatilidad de los precios. Esta debilidad estructural se evidenció en los años ochenta, cuando se redujeron drásticamente las exportaciones petroleras (gráfico 1). No sólo se produjo una contracción de 70% de las exportaciones petroleras *per capita* entre 1980 y 1986, sino que desde 1986 se redujo su nivel promedio,⁴ el cual fue incluso inferior a los presentados en las décadas de los cincuenta y sesenta.

Ese *shock* adverso de los ochenta hizo patente la necesidad de emprender reformas estructurales e institucionales que adecuaran las finanzas públicas y la economía interna al nuevo contexto petrolero. No obstante, prevaleció la inercia institucional y los efectos adversos fueron afrontados desde una perspectiva de corto plazo, con respuestas casuísticas y cambios frecuentes de las políticas públicas.⁵ Ante la ausencia de resultados satisfactorios, más bien se agravaron los rasgos inconvenientes de las economías petroleras y se acentuaron los conflictos por el reparto de la renta petrolera, mientras que las reformas requeridas fueron postergadas o sólo parcialmente instrumentadas.

venezolano, propietario del recurso natural, por concepto de regalías e impuestos.

- 4 Las exportaciones petroleras en términos reales pasaron de 1.900 a 600 dólares *per capita* entre 1980 y 1986, debido a la reducción paulatina de los volúmenes y el colapso de los precios petroleros en 1986. Desde 1986 el promedio anual de exportaciones petroleras ha estado cercano a 800 dólares *per capita*.
- 5 Al respecto, pueden señalarse las sucesivas modificaciones del régimen cambiario desde

Después de décadas de crecimiento sostenido del PIB no petrolero *per capita*, se inició en los ochenta un período de gran volatilidad del mismo, con tendencia decreciente (gráfico 2).⁶ Puede caracterizarse ese período como una sucesión de fases de crecimiento y de fases recesivas, resultantes de expansiones fiscales no sostenibles y de ajustes subsiguientes. En las coyunturas petroleras favorables, las autoridades cedieron a presiones de distintos sectores afectados por la disminución de la renta petrolera, inclusive generando compromisos permanentes de gasto corriente. Esas expansiones fiscales financiadas con incrementos transitorios de los ingresos petroleros no eran sostenibles y, al desmejorar el mercado petrolero, fue necesario recurrir a sucesivos programas de ajuste, básicamente de carácter fiscal y mediante maxidevaluaciones, con gran impacto inflacionario (gráfico 3), así como efectos recesivos sobre la economía no petrolera (gráfico 2) y redistributivos a favor del sector público y los tenedores de divisas.

Respecto a la inversión bruta fija (IBF), después de una fuerte expansión durante el auge petrolero de los setenta, ésta se redujo sensiblemente en términos reales *per capita* desde los ochenta, a niveles muy inferiores a los alcanzados en los cincuenta y sesenta (gráfico 4), comprometiendo las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Es importante destacar el efecto de desplazamiento de la inversión privada desde los años ochenta, ocasionado por las expansiones fiscales no sostenibles, a través de la acentuación de los desequilibrios monetarios, las devaluaciones, la alta y volátil inflación (Niculescu, 2001). La incertidumbre generada por la indisciplina fiscal y la consecuente inestabilidad macroeconómica afectó las decisiones de inversión y favoreció el traslado de gran parte del ahorro interno hacia activos externos (salida de capitales). Después de haber alcanzado 30% del PIB en 1977 y 1978, la inversión privada se contrajo a niveles inferiores a 10% del PIB desde mediados de los ochenta,⁷ presentando fuertes caídas en los períodos de devaluación y mayor inflación.

La acentuación de los desequilibrios macroeconómicos perjudicó la dinámica de acumulación y la eficiencia en la asignación de recursos, con efectos adversos en la

1983.

6 La fuente de información de las variables macroeconómicas es el Banco Central de Venezuela (BCV) y de las variables poblacionales y del mercado laboral, el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las series del período 1950-2002 con distintos años base fueron empalmadas a través de las tasas de variación. La transformación de las series reales base 1984 a precios de 2002 fue realizada a través del deflactor implícito del PIB de ese año y, por lo tanto, sólo representan un cambio de escala con fines ilustrativos, pues no se consideró la evolución de los distintos precios relativos. En el caso de las exportaciones petroleras en dólares y del volumen de producción petrolera, la fuente es Pdvs y para la deflación de las exportaciones petroleras se utilizó el índice de precios al mayor de Estados Unidos.

7 En términos reales *per capita*, la inversión privada se redujo en los años ochenta y noventa

Gráfico 5
Tasa de desocupación y tasa de informalidad

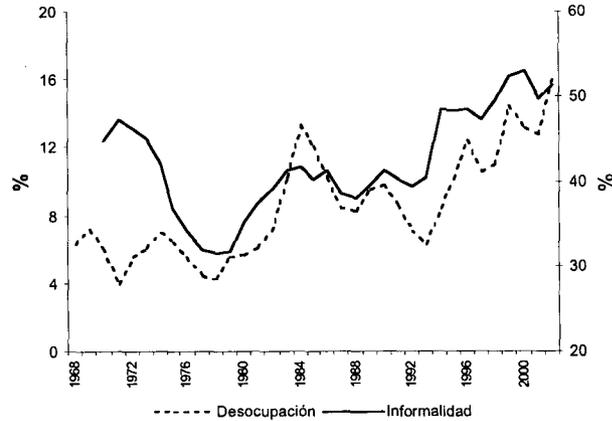
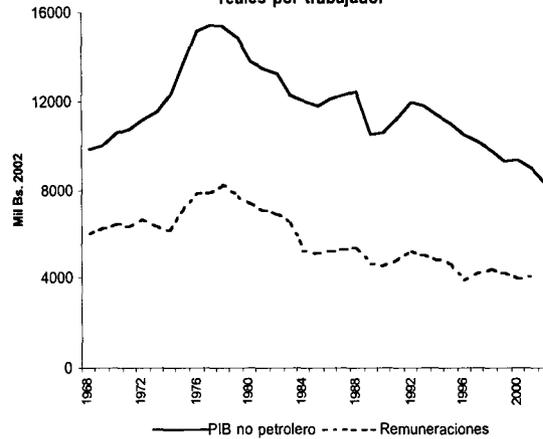


Gráfico 6
PIB no petrolero real y remuneraciones reales por trabajador



generación de empleo formal, la productividad y el salario real. Es importante destacar la tendencia creciente desde 1978 de la tasa de informalidad (desocupación encubierta) y la declinación paulatina de la productividad y del salario medio por trabajador

(gráficos 5 y 6).⁸ Ante la pérdida de la capacidad de generación de empleo por el sector formal de la economía, la población económicamente activa se ha ocupado en actividades informales de comercio y servicios de menor productividad y con remuneraciones bajas e inestables. Por su parte, la tasa de desocupación abierta sólo mostró una tendencia creciente a partir de 1994, acompañando desde entonces la tendencia ascendente de la tasa de informalidad.

Si bien la crisis política de las últimas décadas se originó por la incapacidad de los partidos tradicionales para interpretar a una sociedad que demandaba cambios de un sistema político desgastado, sin canales de participación diferentes a los electorales, la reducción de la renta petrolera, sus efectos económicos, fiscales y sociales adversos, en particular, la desmejora de los servicios públicos y la exacerbación de los conflictos distributivos, contribuyeron en gran parte a la acentuación de la crisis. La consecuente pérdida de legitimidad de los gobiernos y de los partidos políticos impidió, a su vez, la formación del apoyo político y social necesario para la instrumentación adecuada de las políticas y reformas emprendidas en los noventa.

La agudización de la crisis política en los noventa favoreció la elección de un presidente contrario a los partidos políticos tradicionales en 1998, sobre la base de un deseo de cambio. Si bien el nuevo gobierno contó con amplio apoyo en sus inicios, en el proceso constituyente de 1999 y en la relegitimación de los poderes públicos de 2000 fue perdiendo soporte en su ejercicio.

Desde 1999 se produjo un recrudecimiento del rentismo en las políticas públicas, reforzado por una defensa de la intervención del Estado en la economía, sobre la base de un diagnóstico desacertado respecto a las causas del deterioro económico y social. En particular, el proceso regresivo fue imputado a las políticas y reformas económicas emprendidas en los noventa, cuando ese proceso se había iniciado con bastante anterioridad. Si bien los resultados de las reformas de los noventa no fueron satisfactorios, esto no obedeció a una exacerbación de la economía de mercado, sino al contrario, a la inercia institucional y, en gran parte, a la persistencia de la indisciplina fiscal y la ineficacia de la gestión pública.

El aumento de la renta petrolera desde mediados de 1999 proporcionó de nuevo la ilusión de bonanza y de la posibilidad de aumentar el rol del Estado y del gasto público, retomando una visión voluntarista de las políticas públicas. En realidad ocurrió lo contrario, pues a medida que recrudecía el rentismo se fue acelerando el deterioro institucional del Estado y su capacidad de respuesta a las demandas sociales.

a un quinto del nivel alcanzado en 1978 (gráfico 4).

8 La productividad y el salario medio por trabajador del gráfico 6 resultan de la relación entre el PIB no petrolero y la remuneración a empleados y obreros (BCV) de cada año,

El nuevo gobierno asignó a la política de expansión de la producción petrolera (gráfico 1) y a la apertura comercial la causa del deterioro económico y de los ingresos fiscales y, por otra parte, atribuyó un origen distributivo al aumento de la pobreza, desestimando los efectos del proceso de desacumulación y de decrecimiento sobre el empobrecimiento general de la población. Aunque, ciertamente, estos procesos regresivos han tendido a afectar en mayor proporción a los sectores populares que no disponen de mecanismos de protección y que han debido ser objeto de una mayor atención por parte del Estado.

Respecto a la política petrolera, desde 1999 ésta fue reorientada hacia la defensa de los precios internacionales, a través de una más activa participación en la OPEP. La política de maximización de la renta petrolera significaba un retorno a la estrategia iniciada en los años setenta (gráfico 1), pero con menor impacto favorable en la actividad económica interna. Esa estrategia de defensa de los precios había provocado una reducción de la participación de la OPEP y de Venezuela en el mercado petrolero internacional. Los altos precios y las innovaciones tecnológicas favorecieron la incorporación de la producción de países con desventajas comparativas de explotación, mientras que por el lado de la demanda se incentivaban procesos de racionalización y sustitución del uso del petróleo.⁹

La defensa del precio implicó sucesivos recortes de producción y de los planes de inversión de Pdvsa, afectando las actividades internas vinculadas al sector. Aunado a ello, la incertidumbre generada por la ausencia de una estrategia económica definida y consistente y la indisciplina fiscal,¹⁰ afectaron la inversión y el producto no petrolero. Esta situación se fue agravando con el deterioro del Estado de derecho, la pérdida de confianza y la conflictividad política.

Por su parte, la política social careció de una estrategia estructural acertada y, aun cuando el gobierno enfatizó en la prioridad de afrontar la pobreza desde 1999, se desmantelaron los programas asistenciales anteriores sin instrumentar alternativas eficaces. Posteriormente, se planteó una estrategia de articulación de la política social a la política de “economía social” a través de créditos a microempresarios y cooperativas,

respectivamente, y la población ocupada del primer semestre de cada año (INE).

9 A Venezuela no le conviene una estrategia de exclusiva defensa de los precios en el mediano y largo plazo, ya que tiene cuantiosas reservas de petróleo: 76 mil millones de barriles de reservas probadas de crudos convencionales y 270 mil millones de barriles de reservas de crudos no convencionales en la Faja del Orinoco. Noruega, con reservas de petróleo de 23 mil millones de barriles, produce más de 3 millones de barriles diarios y tiene 4,5 millones de habitantes.

10 Al inicio se mostró cierta ortodoxia en materia fiscal y macroeconómica, pero las expansiones fiscales no sostenibles de 2000 y 2001 desencadenaron graves desequilibrios que ocasionaron la devaluación al inicio de 2002, mientras que las políticas comerciales y sectoriales fueron

pero, ante la falta de seguimiento y de asistencia técnica adecuados, esa política ha tenido poca efectividad, tanto desde el punto de vista económico como social.

El período 1999-2003 ha representado una extensión del proceso de decrecimiento y empobrecimiento de las últimas décadas, aunque en forma acelerada, tornándose crítica la situación económica y social. Si bien la economía creció transitoriamente en los años 2000 y 2001, el PIB real *per capita* se redujo de Bs. 5,3 millones en 1998 a Bs. 4,5 millones en 2002 (gráfico 2),¹¹ mientras que en 1978 era Bs. 6,5 millones. Por su parte, la pobreza siguió aumentando: 23% de la población se encontraba en situación de pobreza en 1978 y ese indicador alcanzó 60,1% y 69,1% en 1998 y 2002, respectivamente.¹² Aun cuando su origen fue principalmente de índole político-institucional, la aceleración del deterioro económico y social ha proporcionado mayor sustento a la crisis de gobernabilidad del Estado que padece actualmente Venezuela.

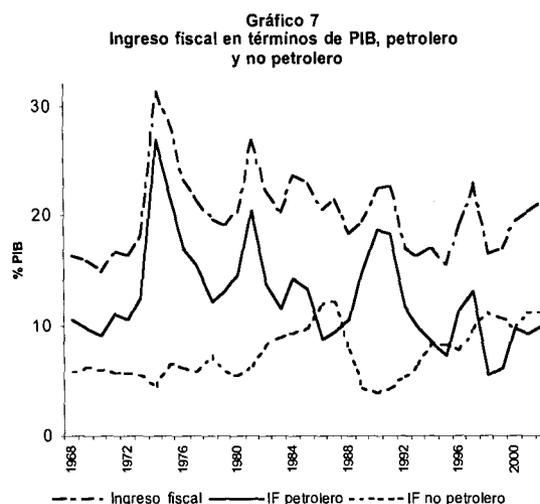
DEBILITAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

La disminución de las exportaciones petroleras desde los ochenta no sólo fue determinante en la reducción del PIB *per capita*, sino que, adicionalmente, produjo una merma de los ingresos fiscales en términos de PIB¹³ (gráfico 7). La ausencia de una reforma fiscal estructural para contrarrestar ese efecto ingreso y aumentar la productividad del gasto ha dado lugar a un desempeño deficiente de las finanzas y gestión públicas. Efectivamente, aunque ha aumentado la tributación no petrolera, ésta no ha compensado la reducción de los ingresos fiscales petroleros; por otra parte, la calidad del gasto fiscal se ha deteriorado y el mismo se ha mantenido por encima de un nivel sostenible, ocasionando la persistencia de déficit financieros desde mediados de los años ochenta. El debilitamiento de las finanzas públicas, con la consecuente pérdida de la capacidad de responder a las demandas sociales, explica parte del creciente deterioro institucional del Estado.

erráticas, tendieron a retornar al proteccionismo y desfavorecer el comercio subregional.

- 11 La disminución del PIB real *per capita* entre 1998 y 2002 fue 16,3%, mientras que la del PIB petrolero y la del PIB no petrolero fueron 23,7% y 12,7%, respectivamente, previéndose una caída adicional de alrededor de 10% del PIB total en 2003.
- 12 Documentos del Proyecto Pobreza, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Según el INE, 48,1% de la población se encontraba en situación de pobreza en el primer semestre de 2002.
- 13 La fuente de información de las variables fiscales es el BCV para el período 1968-1997 y la Oficina de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Ministerio de Finanzas para el período 1998-2002 y la fuente de la información presupuestaria del período 1968-2003 es la Oficina

Los ingresos fiscales no petroleros en términos de PIB presentaron dos períodos de expansión (gráfico 7), sin embargo, sólo desde los noventa se produjo un mayor esfuerzo por la recaudación no petrolera de carácter permanente. En el primer período 1982-1987, el aumento proporcional de los ingresos no petroleros obedeció fundamentalmente a la captación de ingresos no tributarios, a través de las utilidades cambiarias del BCV bajo un régimen de cambio múltiple y control de cambio. A partir de 1993 la tributación interna mostró una tendencia creciente, sustentada en la instrumentación del impuesto al valor agregado (IVA), transformado temporalmente en impuesto general a las ventas (1994-1999), ya que la participación del impuesto sobre la renta ha disminuido.¹⁴



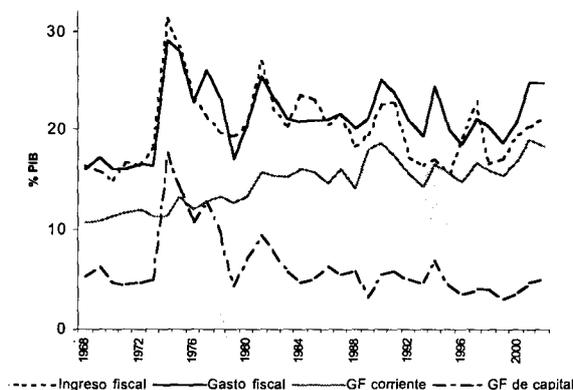
Por su parte, el gasto fiscal mostró un comportamiento volátil y procíclico, respecto a la evolución del mercado petrolero internacional (gráfico 8), lo cual propició la inestabilidad macroeconómica, como fue señalado en el aparte anterior. Respecto a su composición, destaca la tendencia decreciente de largo plazo del gasto de capital,¹⁵ aun

Nacional de Presupuesto (Onapre).

14 La recaudación del IVA se elevó a alrededor de 4% del PIB desde 1996, mientras que la del impuesto sobre la renta ha disminuido a alrededor de 2% del PIB.

15 El gasto de capital está constituido por la inversión directa del gobierno central, las transferencias de capital a los gobiernos subnacionales y entes descentralizados. En el gráfico 8 se incluye también en el gasto de capital la concesión neta de préstamos o inversión

Gráfico 8
Ingreso y gasto fiscal en términos de PIB, gasto corriente y
gasto de capital



si se excluyen los años setenta. Esto evidencia que los intentos de ajuste fiscal se dirigieron fundamentalmente hacia la reducción del gasto de capital, básicamente inversión en infraestructura, lo cual ciertamente ha incidido en la menor eficacia del multiplicador del gasto fiscal y en la reducción de su contribución al crecimiento económico, dadas las externalidades positivas que genera la dotación de infraestructura adecuada en las actividades productivas (OPAM, 1999).

Es importante resaltar también la recomposición del gasto primario en términos de PIB a favor de las transferencias (gráfico 9), fundamentalmente preasignaciones legales a estados y municipios¹⁶ y entes descentralizados, específicamente las referidas a la Ley de Política Habitacional. En consecuencia, ha disminuido la participación del gasto en remuneraciones y adquisición de bienes y servicios del gobierno central. Es importante destacar que las transferencias se elevaron de 7,6% del PIB en 1988 a 14,2% en 2001, mientras que su participación en el gasto primario¹⁷ aumentó de 43,6% a 64,7% durante

financiera del gobierno central.

16 Principalmente, se trata de transferencias establecidas en leyes, las cuales ordenan la asignación de un porcentaje de los ingresos percibidos por el gobierno central a los gobiernos estatales y municipales, por concepto de Situado según la Ley de Descentralización (sobre ingresos ordinarios), según la Ley del Fides (sobre el IVA) y la Ley de Asignaciones Especiales (fundamentalmente sobre regalías petroleras e impuestos a los combustibles).

17 La diferencia entre el gasto fiscal total y el gasto primario (gráfico 9) corresponde al pago de intereses de la deuda pública, el cual ha tendido a incrementarse en los noventa, particularmente los intereses de la deuda interna en 1994 por la crisis financiera y, desde el año 2001, por el

el mismo período. Independientemente de su justificación, es evidente que las preasignaciones legales de los ingresos fiscales dificultan extremadamente la formulación y la gestión presupuestaria, tienden a acentuar la prociclicidad del gasto fiscal y dificultan el ajuste fiscal estructural. Adicionalmente, en la medida en que no se basan en programas ni están atadas a desempeño, las preasignaciones legales tienden a comprometer la eficacia y eficiencia del gasto, y de la gestión pública.

Gráfico 9
Gasto fiscal en términos de PIB, gasto primario y transferencias

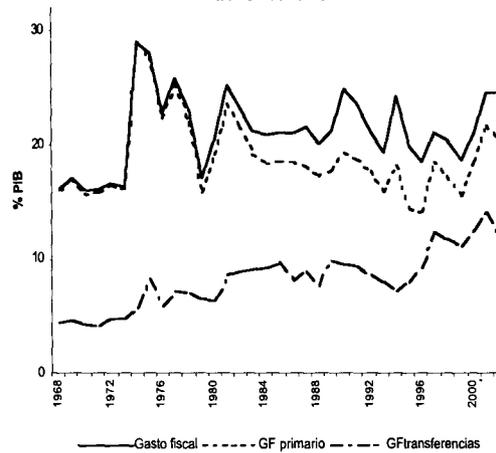
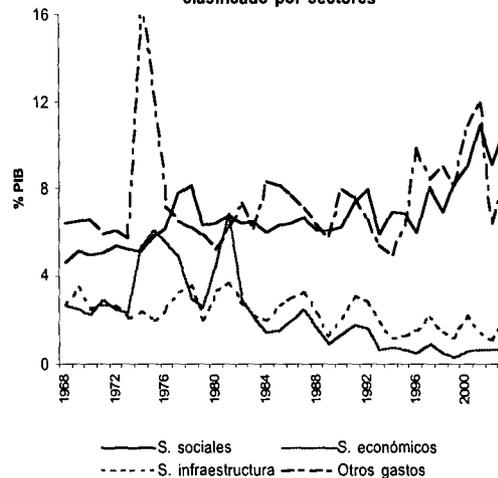


Gráfico 10
Gasto presupuestario primario en términos de PIB, clasificado por sectores



Respecto a la estructura sectorial del gasto fiscal, según la clasificación a nivel presupuestario, desde los ochenta destaca la tendencia decreciente sostenida del gasto dirigido a los ministerios relacionados con los sectores económicos (producción y comercio, agricultura, energía y minas) y, en menor grado, con la infraestructura (transporte y comunicaciones, desarrollo urbano y vivienda), lo cual no ha ocurrido en el gasto de los ministerios sociales (educación, salud, trabajo, seguridad social, desarrollo social) y otros gastos primarios no clasificados en términos de PIB, observándose una tendencia del gasto social a aumentar desde mediados de los noventa (gráfico 10). Esto último sugiere que en el fuerte deterioro de la atención y la calidad de la educación, la salud y la seguridad social, han tenido un rol importante factores de índole institucional y de gestión, ya que en general se ha priorizado la asignación de recursos fiscales a los sectores sociales. La creciente ineficacia del gasto social también pone de manifiesto la disminución de su contribución al bienestar social y la formación de capital humano y, por lo tanto, el crecimiento económico de largo plazo (OPAM, 1999).

Aun cuando la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAF) de 2000 establecieron un marco jurídico propicio al saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica (Bjerkholt y Niculescu, 2002), la bonanza petrolera de los años 2000 y 2001 y, en general, el recrudescimiento del rentismo, han favorecido de nuevo el diferimiento de las reformas, en este caso imposibilitando el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de la LOAF en los lapsos establecidos. Pueden señalarse, al respecto, las disposiciones relativas al acatamiento de los principios constitucionales de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal; la instrumentación transparente del Fondo de Estabilización Macroeconómica que establezca efectivamente el gasto fiscal, y el cumplimiento del Marco Plurianual del Presupuesto y de las reformas previstas, las reglas de gasto, de endeudamiento y de equilibrio ordinario trienal, que deberían favorecer la sostenibilidad fiscal.

Bien al contrario, aun cuando se ahorraron recursos en el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica hasta 2001, se produjo una fuerte expansión del gasto fiscal en esos años de bonanza petrolera, lo cual condujo en 2001 al más alto déficit financiero en términos de PIB de las últimas décadas, con excepción de 1994, por el impacto fiscal de la crisis bancaria. En un contexto de incertidumbre y de difícil acceso a los mercados financieros internacionales, el déficit de los años 2000-2002 fue financiado fundamentalmente a través del endeudamiento interno, con maduración de corto plazo y una importante prima de riesgo. Aunado a la concentración de vencimientos de la deuda externa en el período 2002-2004, se elevaron considerablemente el servicio de la deuda¹⁸ y los requerimientos de nuevo endeudamiento, situación esta que se vio agravada por los efectos en los ingresos fiscales de la contracción económica, la inestabilidad política y el paro de diciembre de 2002.

fuerte incremento del endeudamiento interno.

Por último, es necesario resaltar que la sostenibilidad fiscal no sólo se encuentra comprometida por la persistencia de déficit financieros y el aumento del *stock* de la deuda pública,¹⁹ sino también por el monto de la deuda implícita y contingente. Por una parte, están los compromisos pendientes por prestaciones sociales y otros pasivos laborales con los funcionarios públicos; por la otra, se encuentra la deuda contingente asumida por el régimen vigente de pensiones y por los regímenes especiales de pensiones y jubilaciones del sector público, basados en esquemas de reparto y que, en su gran mayoría, no disponen de los fondos. A éstos habrá que agregar los nuevos compromisos que se adquieran, particularmente los que se deriven de la reforma pendiente de la seguridad social. Este legado de veinticinco años de desaciertos de las políticas públicas y de diferimiento de las reformas necesarias, constituye una redistribución intergeneracional de ingresos en detrimento de las generaciones futuras, cuyos efectos tendrán que ser afrontados a través de una estrategia adecuada de manejo de activos y pasivos del sector público, y el requerimiento de un crecimiento económico alto y sostenido en las próximas décadas.

DETERIORO HABITACIONAL

El agravamiento del problema de la vivienda en las últimas décadas, evidenciado en el importante incremento de la población que vive en condiciones inadecuadas, no debe sólo atribuirse a deficiencias de las políticas de vivienda, en tanto es una manifestación de una problemática más amplia derivada del decrecimiento económico y del empobrecimiento de la población venezolana, a consecuencia de la disminución de la renta petrolera, el diferimiento de las reformas necesarias y los desaciertos de las políticas públicas en general.

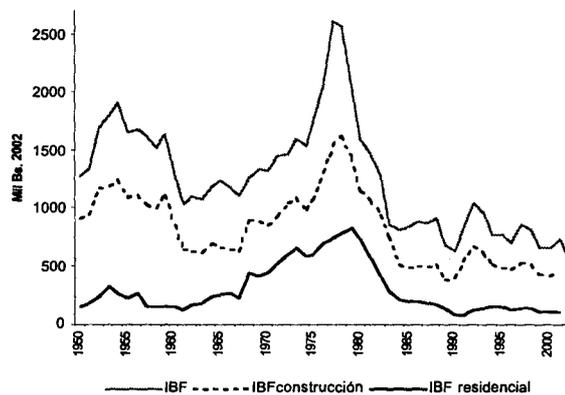
En el pasado, la construcción residencial fue realizada fundamentalmente por el sector privado (viviendas formales) y por los sectores populares (viviendas informales), pues inclusive la construcción residencial formal financiada y promovida por el sector público fue básicamente realizada por el sector privado. La reducción del ingreso real de las familias y de la demanda efectiva desde los ochenta, afectó sensiblemente la construcción formal de vivienda, particularmente la promovida y realizada por el sector privado. La declinación de la construcción residencial formal fue de hecho el componente fundamental de la caída de la inversión en construcción y la inversión bruta fija (IBF) *per capita* desde 1978 (gráfico 11).²⁰

18 El servicio de la deuda pública se elevó de 5% del PIB en 1998 y 1999 a 9% del PIB en 2002.

19 La relación deuda pública/PIB se elevó de 27% en 1998 a 35% en 2002, previéndose un incremento en 2003 a más de 40% del PIB.

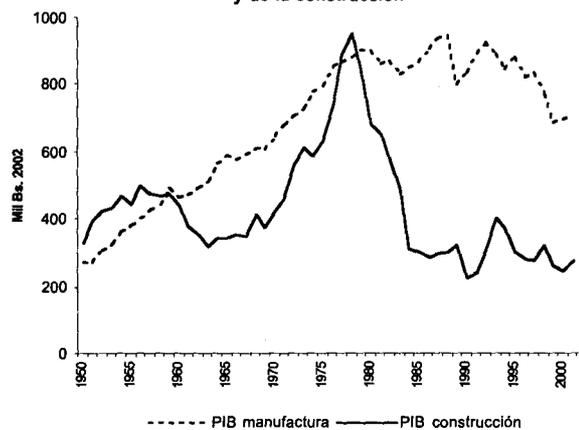
20 La inversión en construcción residencial fue 12% del PIB y 30% de la inversión bruta fija (IBF) en 1978 y se redujo a 2% del PIB y 15% de la inversión bruta fija en 2001. La fuente de la serie 1950-1984 de la IBF en construcción residencial es Baptista (1991).

Gráfico 11
Inversión bruta fija real *per capita*, en construcción y en construcción residencial



Fuente: BCV, Baptista y cálculos propios

Gráfico 12
PIB no petrolero real *per capita*, de la manufactura y de la construcción



Fuente: BCV y cálculos propios

En cuanto al PIB de la construcción (gráfico 12), éste mostró un crecimiento en términos *per capita* desde los sesenta hasta finales de los setenta, llegando a ser superior que el PIB de la manufactura en los años 1977 y 1978. Desde entonces, si bien ambos sectores mostraron una tendencia decreciente, ésta fue mucho más acentuada en el PIB de la construcción. Es importante resaltar que la inversión en construcción no sólo ha sido el principal componente de la IBF (superior a 60%), sino que, en virtud del origen importado de la mayoría de las maquinarias y equipos, es el componente que fundamentalmente ejerce el efecto multiplicador de la inversión sobre la economía interna. La contracción de la construcción ha disminuido en consecuencia el efecto multiplicador-acelerador entre la IBF y el PIB, afectando el potencial de ese mecanismo de crecimiento y de generación de empleo.

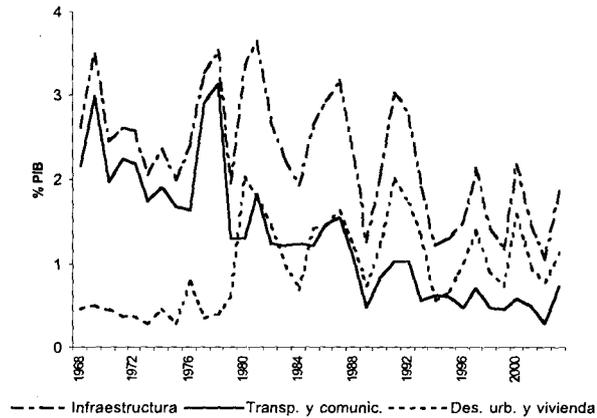
Respecto al mercado formal de la vivienda, puede afirmarse que éste se sobreajustó al cambio del contexto macroeconómico (Niculescu, 1997). En ese comportamiento no sólo incidió la caída del ingreso real de las familias, particularmente importante en los ochenta, sino también el fuerte aumento de la inflación y de su volatilidad desde finales de los ochenta (gráfico 3) y sus efectos sobre las tasas de interés hipotecarias. Por referirse a un bien duradero y de elevado precio, la demanda de vivienda depende crucialmente del financiamiento hipotecario. Al aumentar la tasa de interés se produce un aumento significativo del costo del crédito, mientras que el ingreso familiar ajusta con cierto rezago y en menor proporción. En general, la inflación afecta el mercado formal de la vivienda, sea porque incide en la asequibilidad de la vivienda, sea porque reduce la disponibilidad de crédito, cuando las tasas de interés no ajustan y disminuye la captación de ahorro. También puede producirse un efecto de sustitución adverso a la vivienda, cuando la inflación tiende a reducir el ingreso real de las familias o a elevar en mayor proporción el precio de los alimentos, y debe destinarse a éstos una mayor parte del presupuesto familiar (Niculescu, 1999).

La pérdida de la capacidad adquisitiva de vivienda de las familias de ingresos medios –vía ingresos, tasas de interés y sustitución– ocasionó una disminución considerable de la demanda de vivienda con financiamiento hipotecario en condiciones de mercado. Este segmento del mercado comenzó a ejercer presión sobre los programas sociales del sector público en los ochenta, justamente cuando venían aumentando los requerimientos de atención habitacional de los sectores populares, especialmente afectados por la disminución de las fuentes de empleo y del ingreso real.

La Ley de Política Habitacional (LPH), promulgada en 1989, pretendía dar respuesta a esta realidad mediante la previsión de mayores recursos para los programas de vivienda, a través de distintas fuentes de financiamiento. Por una parte, se creó el Ahorro Habitacional, con aportes obligatorios del 3% de los salarios, fundamentalmente destinado al financiamiento de la vivienda para familias de ingresos medios bajos con una tasa de interés preferencial. Por otra parte, se estableció en la LPH la asignación de 5% de los ingresos fiscales ordinarios a los programas habitacionales del sector público,

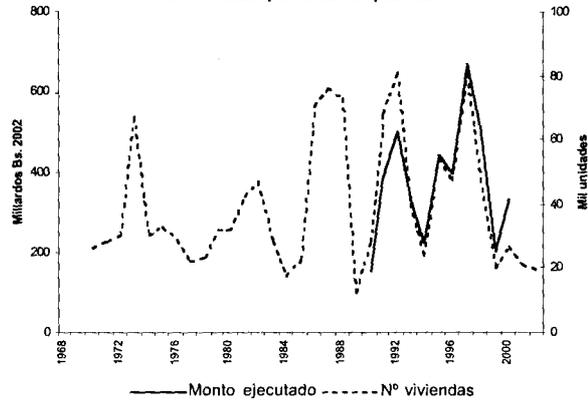
lo cual intentaba paliar la insuficiencia de recursos asignados al sector, particularmente en los períodos de ajuste fiscal.

Gráfico 13
Gasto presupuestario en infraestructura, transporte y comunicaciones, desarrollo urbano y vivienda



Fuente: Onapre

Gráfico 14
Monto real ejecutado según LPH y número de viviendas terminadas por el sector público



Fuente: Conavi

Efectivamente, desde 1978 el gasto presupuestado en desarrollo urbano y vivienda mostró una gran volatilidad en términos de PIB, aunque no una tendencia decreciente, como fue el caso del gasto en vialidad, transporte y comunicaciones (gráfico 13). Este último fue el componente fundamental de la disminución de la asignación presupuestaria al gasto en infraestructura (gráfico 10).

La instrumentación de la LPH permitió mejorar la atención habitacional de los hogares de menores ingresos, favoreciendo la organización de las comunidades y la asistencia técnica. Es importante destacar al respecto que la mayor parte de las nuevas viviendas provino de la iniciativa popular. Entre 1990 y 2001 se produjeron alrededor de 2 millones de viviendas, de las cuales 1,6 millones de viviendas “aceptables” (Lovera, 2003): 670 mil viviendas por el sector formal en el marco de la LPH (cuadro 1)²¹ y el resto principalmente por autogestión popular. Durante el mismo periodo se incrementó en 1,5 millones el número de hogares (Censo 2001, INE), lo cual sugiere que, a pesar de la instrumentación de la LPH, prácticamente se mantuvo el déficit o rezago habitacional acumulado hasta 1990. Este último se elevaba a más de un millón de viviendas “inaceptables” y correspondía fundamentalmente a hogares de más bajos ingresos que no se habían beneficiado en el pasado de la atención habitacional del sector público.

Cuadro 1. Resultados de la Ley de Política Habitacional

Año	Ejecución Sector Público		Viviendas formales terminadas		
	Millones Bs. 2002	Porcentaje *	Sector Públ.	Ahorro Hab.	Total
1990	153.204	22,4	28.666	6.262	34.928
1991	385.220	40,3	68.376	12.491	80.867
1992	500.295	63,3	81.080	13.051	94.131
1993	330.322	63,8	40.586	13.818	54.404
1994	224.118	37,3	24.148	12.116	36.264
1995	444.345	57,3	54.366	13.672	68.038
1996	399.753	46,8	47.996	12.354	60.350
1997	671.125	71,5	80.811	11.168	91.979
1998	502.873	60,1	48.092	13.703	61.795
1999	205.991	44,9	20.075	11.015	31.090
2000	333.251	38,6	27.132	4.839	31.971
2001	n.d.	n.d.	21.327	4.800	26.127
2002	n.d.	n.d.	19.600	4.477	24.077

* Relación entre monto ejecutado y monto presupuestado

Fuente: Conavi (1990-2000) y Lovera (2001-2002)

Onapre y cálculos propios

21 De las viviendas formales terminadas en el marco de la LPH, aproximadamente 540 mil correspondieron al sector público y 130 mil al Ahorro Habitacional (cuadro 1).

Aun cuando la política habitacional de los noventa intentó adaptarse al nuevo contexto económico y social, conservó la visión rentista que caracterizó las políticas públicas y, por tanto, tampoco constituyó una respuesta adecuada. En particular, la propuesta enfatizó en los aspectos financieros desde una perspectiva sectorial, se asumió que el Estado disponía de importantes recursos y la asignación legal de fondos públicos a los programas habitacionales garantizaba su continuidad, sin percibir los efectos perjudiciales sobre la formulación y gestión presupuestaria. Por otra parte, la estrategia establecida centró la atención en las soluciones habitacionales, descuidando la asignación de recursos al desarrollo urbano y la infraestructura básica (agua, drenaje, electricidad, vialidad, etc.); tampoco instrumentó la descentralización ni la debida coordinación entre los múltiples programas y organismos ejecutores²² y no confirió la atención adecuada a los aspectos institucionales y de gestión que comprometían la efectividad de las políticas.

La previsión legal de recursos y su asignación presupuestaria no garantizaron la continuidad y estabilidad de la asignación efectiva de fondos a los programas del sector público, así como tampoco de los montos ejecutados ni del número de viviendas formales terminadas (cuadro 1 y gráfico 14). Se continuó presentando una gran volatilidad de estas variables y fuertes reducciones en los años de ajuste fiscal. Por su parte, el ahorro habitacional sólo permitió financiar un promedio de 12.000 viviendas por año hasta 1999, lo cual fue netamente insuficiente para atender las familias de ingresos medios desplazadas del financiamiento hipotecario en condiciones de mercado.

Después de una década, durante la cual se reformó varias veces la LPH, en 1999 se inició un largo período de discusión y revisión de la política habitacional, mientras disminuía el número de viviendas terminadas. En 1999 se aprobó la nueva Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, la cual reformulaba prioridades y programas, orientándolos principalmente hacia la habilitación física y mejoramiento de viviendas en barrios y urbanizaciones populares, y las parcelas y viviendas de desarrollo progresivo. Desde entonces, se inició un proceso de discusión sobre la política habitacional en el marco del desarrollo legal de la nueva Constitución en materia de seguridad social. Primero, se defendió la ley de 1999 en el seno de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Seguridad Social (2000-2001), luego fue retomado el tema en la Asamblea Nacional (2001-2003). La diversidad de concepciones y posiciones entre parlamentarios, funcionarios del Ejecutivo y representantes de los distintos sectores involucrados, retrasó la reforma y todavía está vigente la ley de 1999.

22 El Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) es el ente rector de la política habitacional y los organismos ejecutores del nivel central, entonces adscritos al Ministerio de Desarrollo Urbano, hoy fusionado con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Ministerio de Infraestructura, son el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), Fundación para el Equipamiento de Barrios (Fundabarrios), Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y el Fomento Municipal (Fundacomun).

Es importante destacar la discusión inicial en el seno del Ejecutivo, acerca de otorgar prioridad a la atención de la población con mayores carencias en las zonas más pobladas, mediante la habilitación de barrios con participación de las comunidades, en contraposición a la construcción de viviendas completas “dignas” (70 m²) por los organismos ejecutores del gobierno central en las áreas de desconcentración. Desafortunadamente, esta última concepción fue la que aparentemente prevaleció desde 2001, con muy poca eficacia en el número de viviendas formales terminadas.²³

El énfasis en la oferta de viviendas completas por parte del Estado es una concepción desactualizada, correspondiente al antiguo paradigma habitacional que percibía los barrios populares como un fenómeno transitorio y pretendía que el problema de la vivienda podía ser resuelto mediante la asignación de recursos y las políticas adecuadas (Cilento, 1999; Lovera, 2002). Ese voluntarismo en materia habitacional encontró un ambiente propicio en Venezuela por el comportamiento rentista dominante. Al pretender que el Estado podía proporcionar una vivienda adecuada para todos, se dispersaron los esfuerzos en la atención de distintos estratos de la población, básicamente a través de la construcción de viviendas completas. Si bien esta política benefició a sectores populares y de ingresos medios que no hubieran podido acceder a la vivienda sin el subsidio del sector público, quedó la gran mayoría de las familias de bajos ingresos fuera de la atención habitacional.

El agravamiento de la problemática habitacional en los años ochenta había motivado desde la academia la promoción de un cambio del paradigma habitacional, sobre la base de un reconocimiento de la iniciativa espontánea de los pobladores de barrios. Especialmente, se proponía que la atención de las familias de menores ingresos debería concentrarse en la habilitación de barrios y la vivienda progresiva con participación de las comunidades (Bolívar, 1987; Villanueva, 1988; Cilento, 1988). En los años noventa la política habitacional fue instrumentando esas recomendaciones²⁴ y en 2000 se incorporaron los aspectos urbanísticos de la habilitación, pero desafortunadamente estos programas fueron suspendidos o reducidos desde 2001.

A nivel internacional también se había producido una revisión de las propuestas. El nuevo paradigma habitacional acordado en 1996,²⁵ había extendido su alcance del

23 Según información extraoficial de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, el número de viviendas formales terminadas fue 61.795 unidades en 1998, 31.090 en 1999, 23.152 en 2000, 22.800 en 2001 y 14.716 en 2002 (*El Nacional*, 02-08-2003, p. B/2).

24 Desde los años sesenta y setenta existían programas de habilitación de barrios (equipamiento, mejoramiento y consolidación de barrios) y propuestas de viviendas ampliables (viviendas en pendiente, unidades baños, parcelas con servicios básicos), pero su impacto fue limitado por no responder a una política de Estado.

25 Conferencia sobre Asentamientos Humanos (*Habitat II*) de las Naciones Unidas, Estambul, 1996.

espacio físico de la vivienda a las condiciones del entorno urbano. En la ampliación de su alcance contemplaba los vínculos de las políticas de vivienda con las ambientales, de desarrollo urbano e infraestructura básica, así como con las políticas macroeconómicas,²⁶ de generación de empleo, de desarrollo social y de lucha contra la pobreza (Cilento, 1999). Esta nueva concepción de la política habitacional planteaba también una reformulación del rol del Estado, orientada hacia la facilitación, la asistencia técnica, la descentralización y la participación del sector privado y la sociedad civil, a través de las ONG y las comunidades organizadas.

La reformulación del rol del Estado ha sido incorporada en el nuevo paradigma de la gestión pública, adoptado a finales de los años noventa por los organismos multilaterales (Cepal, BID, Banco Mundial), el cual se orienta hacia la descentralización político-administrativa y económica de la provisión de bienes y servicios públicos, enfatizando en la necesaria complementariedad de los sectores público, privado y social en la provisión de los mismos (Finot, 2001), en contraposición a las propuestas de dicotomías entre Estado y mercado. Si bien se plantean diferencias conceptuales en el debate actual sobre el rol y los mecanismos de participación ciudadana, en general se sostiene su relevancia en la formulación e instrumentación de las políticas públicas que la conciernen y en la respectiva rendición de cuenta, como mecanismo de control social, no sólo para mejorar la eficacia de la gestión pública, sino con el fin de profundizar la democracia (Cunill, 1997).

CONCLUSIONES

El deterioro económico y social de los últimos veinticinco años ha obedecido a un proceso complejo, producto de la interacción de factores económicos, sociopolíticos e institucionales. El origen de ese proceso regresivo ha sido atribuido aquí a la reducción permanente de las exportaciones petroleras en los años ochenta, en tanto ello implicó un resquebrajamiento de los fundamentos del modelo económico dominante durante décadas, y planteó la necesidad de una transformación sustantiva del mismo.

Dada la dependencia de ese modelo respecto a la disposición del ingreso petrolero de origen externo y su asignación y distribución a través del Estado y, específicamente, del gasto público, la explicación del proceso de deterioro económico y social ha colocado el énfasis en los determinantes macroeconómicos y, especialmente, los fiscales, así como en los aspectos institucionales relacionados. En particular, se han destacado los temas referidos a la volatilidad y prociclicidad del gasto fiscal respecto al

26 La necesidad de considerar las interrelaciones entre el sector vivienda y la macroeconomía para la formulación de las políticas habitacionales había sido ya destacada en los años ochenta por el Banco Mundial (Mayo, 1988).

mercado petrolero internacional (expansiones no sostenibles y sesgo al déficit financiero) y sus efectos adversos sobre la estabilidad macroeconómica, la inversión privada y la generación de empleo formal, así como sobre la propia sostenibilidad fiscal; la reducción del efecto multiplicador real del gasto público por el incremento de las filtraciones y de los efectos de desplazamiento de la inversión privada; el deterioro de la calidad del gasto fiscal y de la eficacia de la gestión pública, con la consecuente disminución de las externalidades positivas que tuvieron en el pasado sobre el crecimiento de largo plazo y el bienestar social. La consideración de los efectos de la volatilidad petrolera y del tipo de cambio real sobre la especialización en los sectores no transables y el desempeño macroeconómico (Hausmann y Rigobón, 2002) puede complementar el análisis aquí efectuado.

Respecto a la vivienda, se apuntó el fuerte impacto de la caída de los ingresos reales de las familias, de la elevada y volátil inflación y tasa de interés en la demanda de vivienda formal, las consecuencias de la indisciplina fiscal en la asignación de recursos a la vivienda social, así como los efectos de los cambios y desaciertos en la definición de prioridades, y del deterioro de la gestión habitacional, en el agravamiento del problema de la vivienda. Sin embargo, el énfasis explicativo se colocó en el rol que tuvieron los procesos de decrecimiento económico, empobrecimiento y debilitamiento financiero e institucional del Estado, en el deterioro económico y social general del país.

En la Venezuela actual, en la cual el PIB *per capita* es un tercio inferior al de 1978, el desempleo se encuentra cercano a 20% de la población activa, la informalidad en más de la mitad de la población ocupada, la población en situación de pobreza alcanza 70% y la población que vive en barrios en las principales ciudades 60%, la política habitacional tiene que plantearse desde una perspectiva social y focalizar la asignación de recursos y programas en la atención de los sectores más desfavorecidos. No obstante, para afrontar el problema de la vivienda y, en particular, para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, se requiere del concurso de un conjunto de reformas estructurales e institucionales y de políticas públicas que se dirijan a las causas del proceso de decrecimiento y empobrecimiento de los últimos veinticinco años.

Para retomar una senda de desarrollo económico y social, las políticas públicas deben reorientarse hacia la obtención de un crecimiento alto y sostenido en las próximas décadas. El crecimiento económico requiere como condición necesaria el distanciamiento del rentismo, a favor de una concepción productiva de la economía y la sociedad. Ese cambio de valores y actitudes no es alcanzable sólo a través de reformas legales, programas y políticas públicas,²⁷ ya que requiere de que el marco institucional en su conjunto sea consistente y establezca una estructura de incentivos que recompense la

27 En los últimos tres planes de desarrollo de la nación se ha planteado la necesidad de transitar de una economía rentista a una productiva, pero en la práctica ha sido letra muerta.

actividad productiva (North, 2001) y desestime la búsqueda de renta, y que, por lo tanto, favorezca la internalización por parte de la sociedad de la necesaria modificación del comportamiento rentista.

La disposición de un recurso natural no renovable como el petróleo no es fatalmente una “maldición”. Bien al contrario, como lo han evidenciado algunos países como México, Indonesia y Noruega, un marco institucional y políticas públicas adecuados permiten utilizar el ingreso petrolero como palanca para aumentar la capacidad productiva, la diversificación de la economía y de las exportaciones, favoreciendo una mayor autonomía de sus economías y de sus finanzas públicas respecto a la actividad petrolera y, por lo tanto, un mejor desempeño económico.

El distanciamiento del rentismo requiere intrínsecamente una reformulación del rol del Estado, con una reorientación de sus funciones hacia la complementariedad entre los sectores público, privado y social. Se requiere una reforma dirigida al fortalecimiento institucional y de la gestión del Estado, y al saneamiento de las finanzas públicas, con el fin de favorecer la sostenibilidad fiscal y la capacidad de responder a las demandas sociales y, por lo tanto, apoyar la gobernabilidad democrática.

En particular, es necesario internalizar las consecuencias de la reducción permanente de las exportaciones petroleras *per capita*, lo cual implica, para poder responder a los elevados requerimientos sociales y de infraestructura, incrementar sustancialmente la productividad del gasto público y aumentar la tributación no petrolera,²⁸ tanto en el ámbito nacional como estatal y municipal. El replanteo del federalismo fiscal y la descentralización es de particular relevancia, debiendo preverse en el nuevo arreglo, especialmente, los mecanismos para favorecer una mayor corresponsabilidad fiscal y mejora de la cobertura y calidad de los servicios públicos por parte de los gobiernos subnacionales. Por último, es importante destacar que una gestión pública más eficaz y eficiente sólo es posible a través de la instrumentación y fortalecimiento de mecanismos de transparencia y responsabilidad fiscal (Kopits, 1997): reglas, presupuesto por programas, control y evaluación de desempeño (resultados) y rendición de cuenta.²⁹

Dado que la volatilidad fiscal ha sido la principal fuente de desequilibrios, la disciplina fiscal debe desempeñar un rol determinante en la estabilización macroeconómica.³⁰ Esta última es requerida para favorecer la sostenibilidad del

28 El aumento de los ingresos fiscales no petroleros debe fundamentarse, principalmente, en la ampliación de la base tributaria resultante de la reducción de exenciones y exoneraciones y una economía en crecimiento.

29 La generalización de estos mecanismos en todos los ámbitos de gobierno contribuirá a reducir los espacios para el clientelismo, la captura y la corrupción, prácticas estas que fueron exacerbadas en Venezuela por el rentismo.

30 A lo cual debe contribuir la instrumentación efectiva del Fondo de Estabilización Macroeconómica, previsto en la Constitución y la LOAF.

crecimiento económico, el cual, evidentemente, requiere también del apoyo de políticas de oferta: comerciales, de investigación y desarrollo, laborales y sectoriales consistentes, que promuevan la inversión, la productividad, la competitividad y la generación de empleo productivo.

Para revertir el proceso regresivo de las últimas décadas, debe otorgarse prioridad a la reformulación de las políticas sociales. Aunque persigan objetivos redistributivos, las políticas sociales deben, en gran parte, ser conciliables con los objetivos de crecimiento y de generación de riqueza, pues en su defecto se terminará generando y distribuyendo más pobreza. También es crucial el destino específico y el desempeño del gasto social, pues es evidente que con sólo aumentar el monto de recursos asignados no mejorarán las condiciones de vida de los sectores populares, ni se obtendrá una mayor equidad o bienestar social, mientras que pueden generarse presiones fiscales inconvenientes que comprometen el crecimiento de largo plazo. La experiencia venezolana de la última década es ilustrativa al respecto (gráfico 10). En ese sentido, hay que resaltar el fuerte impacto regresivo en la distribución del ingreso y de la riqueza que tuvieron en el pasado la devaluación y la inflación, resultantes de expansiones de gasto fiscal no sostenibles. En este orden de ideas, también debe señalarse que los aumentos salariales nominales por decreto, sin correspondencia con el incremento del PIB y de la productividad real, sólo tuvieron un efecto redistributivo en el corto plazo, pues contribuyeron a acelerar la inflación y, con ello, a la erosión del salario real de los trabajadores en el mediano plazo (gráfico 6).

Si bien en el corto plazo se requiere dar respuesta inmediata a la crítica problemática de la pobreza, básicamente mediante programas asistenciales, es necesario una transformación de fondo de las políticas sociales, así como una estrategia estructural que reformule objetivos y prioridades desde una perspectiva de largo plazo. El gasto social que contribuya a ampliar oportunidades y a formar capital humano, principalmente a través de la educación en todos sus niveles, la capacitación y la asistencia técnica, favorecerá la equidad distributiva y, a la vez, la sostenibilidad del crecimiento económico.

Evidentemente, la instrumentación de las reformas y el logro de los objetivos de crecimiento y equidad requieren esencialmente de una voluntad política sostenida por un largo período a nivel del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, así como del apoyo de los partidos políticos y la sociedad civil. Esto sólo es posible a través del establecimiento de un acuerdo nacional sobre la base de un proyecto de país incluyente y compartido, que favorezca la gobernabilidad democrática, los cambios institucionales requeridos y la continuidad de las políticas públicas en la dirección correcta.

La política habitacional debe ser parte integrante de ese acuerdo como pilar básico de la política social y de lucha contra la pobreza. Hasta los años setenta, la mayor disponibilidad de ingresos petroleros y el crecimiento económico favorecieron una baja demanda social por la rendición de cuenta y permitieron ocultar las ineficiencias de la gestión habitacional. En la actualidad, ante la restricción de recursos fiscales y los

múltiples usos con impacto social, es importante que la sociedad civil asuma también su rol contralor y exija resultados de los programas de vivienda. Para favorecer la transparencia y responsabilidad de la gestión habitacional, es crucial que se desarrolle un sistema de suministro de información histórica y actualizada sobre las actividades habitacionales y relacionadas, referida al desempeño, tanto del sector público como del privado.³¹

El sector público debe reforzar sus funciones de rectoría, regulación y coordinación y, en concordancia con el nuevo paradigma habitacional, propiciar la facilitación y la asistencia técnica, la descentralización y la participación. Los recursos públicos deben focalizarse en la habilitación de barrios, las parcelas y viviendas de desarrollo progresivo, así como en la habilitación de tierras en general para el desarrollo urbano. La entrega de los derechos de propiedad de la tierra y la vivienda en los barrios consolidados es importante para su valorización y el acceso al crédito de sus habitantes. La promoción de un mercado secundario de hipotecas debe permitir el reciclaje del ahorro privado voluntario hacia el financiamiento habitacional.³² La construcción de viviendas completas debe ser realizada de nuevo por el sector privado, con subsidios progresivos a la demanda, prioritariamente para las familias de bajos ingresos.

La estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y el crecimiento económico deben crear las condiciones para que los ingresos de las familias de estratos medios y las tasas de interés impulsen de nuevo la demanda formal de vivienda y, en consecuencia, proporcionen una dinámica de los mercados hipotecario y de la vivienda, así como de la construcción residencial formal, independiente de estímulos artificiales del sector público. A su vez, el buen desempeño de estas actividades contribuirá a sostener el crecimiento y generar empleo productivo en el país.

El análisis efectuado en este documento sobre objetivos globales, lineamientos y restricciones pretende contribuir a enmarcar la formulación de las políticas habitacionales, para lo cual es necesario profundizar los temas referidos a la definición e instrumentación de los programas y acciones específicas que favorezcan la viabilidad de las políticas y el logro de los objetivos sectoriales.

31 El Informe Anual del Conavi que publicaba amplia información sobre ejecución de obras y programas, aspectos financieros y disposiciones normativas, fue suspendido desde el año 2000.

32 La canalización de los fondos de pensiones que resulten de la reforma de la seguridad social, hacia ese segmento del mercado de capitales, puede proporcionarle gran dinamismo al financiamiento de la vivienda.

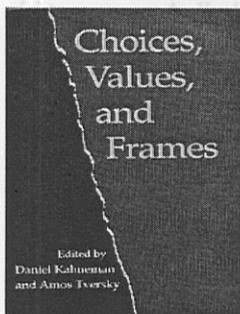
BIBLIOGRAFÍA

- Baptista, A. (1991). *Bases cuantitativas de la economía venezolana. 1830-1989* (Caracas: Comunicaciones Corporativas).
- Bjerkholt, O. e I. Niculescu (2003). "Fiscal Rules for Economies with Nonrenewable Resources: Norway and Venezuela", en George Kopits, comp. *Rules Based Fiscal Policy in Emerging Market Economies* (Washington: Fiscal Affairs Department, IMF), en prensa.
- Bolívar, T. (1987). "La production du cadre bâti dans les barrios à Caracas... Un chantier permanent!", Tesis de Doctorado (París: Universidad Paris XII).
- Bolívar, T. y J. Baldó, comps. (1996). *La cuestión de los barrios* (Caracas: Monte Ávila-Fundación Polar-UCV).
- Cilento, A. (1999). *Cambio de paradigma del hábitat* (Caracas: IDEC-FAU-CDCH, UCV).
- Cilento, A. (1988). "Autogestión de la producción de vivienda con financiamiento de corto plazo, un programa a largo plazo", *Tecnología y Construcción*, n° 4 (Caracas: IDEC-FAU, UCV).
- Cunill, N. (1997). *Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social* (Caracas: CLAD-Nueva Sociedad).
- Finot, I. (2001). *Descentralización en América Latina: teoría y práctica*, Serie Gestión Pública N° 12 (Santiago de Chile: Ilpes-Cepal).
- Hausmann, R. y R. Rigobón (2002). "An Alternative Interpretation of the 'Resource Curse': Theory and Policy Implications", Working Papers Series N° 9424 (Massachusetts: NBER).
- Kopits, G. (1997). *Calidad de gobierno. Transparencia y responsabilidad* (Buenos Aires: Fundación MACRI).
- Lovera, A. (2003). *Materiales y componentes para la construcción de viviendas: una visión desde las empresas y los productos* (Caracas: IDEC-FAU, UCV), en prensa.
- Lovera, A. (2002). "Una nueva óptica para entender y actuar en el hábitat popular", *Tecnología y Construcción*, vol. 18, n° 1 (Caracas: IDEC-FAU, UCV).
- Mayo, S. y R. Burckley (1988). "Vínculos caros de ignorar. Vivienda y macroeconomía". *Horizontes Urbanos*, vol. 12, n° 4 (Washington: Banco Mundial).
- Niculescu, I. (2001). "Efectos macroeconómicos del déficit fiscal interno: cambio estructural y pérdida de efectividad del multiplicador real", en Héctor Valecillos y Omar Bello, comps. *La economía contemporánea de Venezuela* (Caracas: Banco Central de Venezuela).
- Niculescu, I. (1999). *Mecanismos de transmisión del mercado hipotecario al mercado de la vivienda* (Caracas: Conavi-Banap-CDCH, UCV).

- Niculescu, I. (1997). "Apertura petrolera y financiamiento de la vivienda", *Análisis de Coyuntura*, vol. III, n° 2 (Caracas: IIES-Faces, UCV).
- North, D.C. (2001). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico _OPAM (1999), "Reforma fiscal. Política fiscal y crecimiento", mimeo (Caracas: Ministerio de Finanzas).
- Salcedo, R. (2000). "Problemática social de la vivienda en México", *Federalismo y Desarrollo*, n° 67 (México: Banobras).
- Villanueva, F. (1988), "La rehabilitación de barrios existentes como experiencia docente en la Escuela de Arquitectura de la FAU", *Tecnología y Construcción*, n° 4 (Caracas: IDEC-FAU, UCV).

CRÍTICAS BIBLIOGRÁFICAS

- Choices, Values and Frames
Ronald Balza Guanipa
- Responsabilidad social en Venezuela
durante el siglo XX
Ileana Anciano Echenagucia



Kahneman D. y A. Tversky [Ed.] (2000); *Choices, values, and frames*, USA, Cambridge University Press, 840 pp.

El premio Nobel de Economía de 2002 fue otorgado a Daniel Kahneman por trabajos realizados con Amos Tversky (quien murió en 1996) desde 1971 hasta 1986. Ambos estudiaron “la psicología de las creencias intuitivas y las elecciones, y [examinaron] su racionalidad acotada”, siendo sus principales tópicos de estudio “las heurísticas de juicio, la elección bajo riesgo y los efectos de marco o encuadramiento (*framing effects*)” [Kahneman (2002:449)]. Sus principales contribuciones y las de algunos psicólogos y economistas influidos por sus ideas fueron publicadas en dos colecciones de artículos, en cuya selección participaron ambos. El primero, publicado en 1982, reúne 35 artículos bajo el título *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*. El segundo, publicado en 2000, recoge 42 trabajos bajo el título *Choice, Values, and Frames*.

Los trabajos de Kahneman y Tversky (KT) fueron tempranamente conocidos por los economistas. Al recibir el premio Nobel, Herbert Simon (1978:361) presentó los resultados de un trabajo de KT como “algunas de las más dramáticas y convincentes refutaciones empíricas de la teoría [según la cual] las personas se comportaban en situaciones de elección como si maximizaran utilidad subjetiva esperada”¹. En 1985, ambos participaron en una serie de conferencias ofrecidas por la Graduate School of Business de la Universidad de Chicago a la que asistieron como ponentes y comentaristas Kenneth Arrow, Gary Becker, Robert Lucas y Herbert Simon, entre otros, y cuyo propósito era contrastar opiniones de economistas y psicólogos sobre la definición neoclásica de racionalidad [Hogarth y Reder (1986/87)]. Ya en 1990, David Kreps (1995:18) consideró necesario advertir a los estudiantes desde el inicio de su *Curso de*

1 Todas las traducciones utilizadas en esta reseña fueron realizadas por el autor. Todos los énfasis incorporados en las citas se encuentran en los originales.

Teoría Microeconómica sobre las limitaciones de la teoría axiomática de las preferencias, utilizando los argumentos de los psicólogos. Al presentar el último volumen conjunto de KT (2000), Arrow les reconoció haber “iniciado una nueva perspectiva sobre las tradicionales categorías económicas de elección, decisión y valor”. Arrow aceptó la posibilidad de “rechazar los supuestos tradicionales de racionalidad” y desarrollar nuevas generalizaciones con poder predictivo a partir de estudios experimentales y empíricos. Habiendo recibido el premio Nobel en 1972 por sus contribuciones analíticas a las teorías del equilibrio general y de la elección colectiva, sus comentarios tienen una importancia especial.

La contribución de KT, que examinaremos brevemente al final de esta reseña, tiene un profundo impacto sobre buena parte de la teoría económica construida hasta la fecha. Para apreciar tal impacto, vale la pena recordar parte de los complejos debates metodológicos que tuvieron lugar durante los años 50 entre críticos y simpatizantes de diversos enfoques sobre la economía. Una referencia superficial a algunas ideas de Karl Popper sirve de útil contexto.

La palabra “racional” tiene múltiples acepciones. En su autobiografía intelectual de 1976, Popper la utiliza en varias de ellas. Es interesante considerar dos que son potencialmente contradictorias entre sí. Popper (1994:154-155) define la actitud racional (generalización de su método crítico) como la disposición a ser criticado, y el deseo de criticarse a sí mismo. Tal actitud implica tomar conciencia de la imperfección inevitable de la sociedad, por la existencia de problemas morales irresolubles, por la imperfección de las personas y “porque, obviamente, cometemos errores por no saber lo bastante”. Más adelante, sin embargo, Popper (1994:158) confía notablemente en una definición de racionalidad que implica perfección, al presentar su método de análisis situacional como “un intento de *generalizar el método de la teoría económica (la teoría de la utilidad marginal) de modo que fuese aplicable a las restantes ciencias sociales teóricas*”. Dicho método procuraría construir un modelo contrastable de la situación social que incluyera “especialmente la situación institucional en la cual actúa un agente, de manera tal que explique la racionalidad de la acción de éste”.

Blaug (1985:66-70) atribuye a Popper dos prescripciones que deben cumplir las ciencias sociales: el monismo metodológico y el individualismo metodológico. Según la primera, todas las ciencias (naturales o sociales) deberían hacer uso del mismo método. Según la segunda, los modelos sociológicos deberían construirse “en términos descriptivos o nominalistas, es decir, *en términos de los individuos*, de sus actitudes, expectativas, relaciones, etc.”, sin que ello signifique, en la opinión de Popper, “que todos los conceptos de la sociología son reducibles, y deberían ser reducidos, a los de la psicología”.

El monismo metodológico tenía críticos desde el siglo XIX. Según López, J.G Droysen (1808-1884) procuró reforzar la autonomía de la historia como disciplina

sugiriendo tres fines para tres tipos de métodos: al método científico tocaba ayudar a explicar (*Erklären*), al método especulativo de la filosofía y de la teología ayudar a conocer (*Erkennen*) y al método histórico ayudar a comprender (*Verstehen*). Según Blaug (1995:67) “*Verstehen* denota comprensión desde adentro por medio de la intuición y la empatía, como opuesta al conocimiento desde afuera, a través de la observación y el cálculo”. Tal concepto fue rechazado por los positivistas afirmando que la introspección no podía ofrecer piezas válidas de evidencia para el contraste de hipótesis. Aplicado a la economía como versión del individualismo metodológico, dicho concepto tendría efectos devastadores: en primer lugar, exigir estrictamente el individualismo metodológico “excluiría todas las proposiciones macroeconómicas que no puedan ser reducidas a proposiciones microeconómicas, y puesto que pocas de ellas han sentado sus fundamentos microeconómicos, esto supondría a su vez el decir adiós a casi toda la macroeconomía recibida” [Blaug (1995:67)]. Por otra parte, y lo que es aun peor, los axiomas de racionalidad utilizados en microeconomía suelen ser rechazados al someterlos a un examen introspectivo. Ello podría conducir al abandono de la teoría neoclásica y, por lo tanto, a una completa redefinición de la disciplina.

Sin embargo, durante los años 50 no todos los economistas cerraban filas en torno al enfoque tradicional. Herbert Simon rechazaba la definición de agentes optimizadores, que requerían racionalidad perfecta y “omnisciente”, y sugería teorías que “hicieran demandas más modestas y realistas sobre el conocimiento y las capacidades de cálculo de los agentes humanos” [Simon (1978:347)]. La racionalidad de los agentes debía suponerse, en un sentido preciso, acotado. A pesar de los prometedoros resultados de sus primeros esfuerzos, la teoría neoclásica se fortaleció. Simon (1978:357-358) lo atribuyó a dos razones: en primer lugar, a la “vigorosa” defensa metodológica de la teoría clásica frente al psicologismo (en el original, *behavioralism*), llevada a cabo entre otros por Milton Friedman (1953). En segundo lugar, al avance matemático y probabilístico en la formación de los economistas, que “proveyó a dos generaciones de economistas teóricos de un vasto jardín de problemas formales y técnicos que han absorbido sus energías y pospuesto encuentros poco elegantes con el mundo real”.

Blaug (1985:114-145) dedica un capítulo a exponer la discusión metodológica en torno al *Ensayo* de Friedman (1953). A nuestros fines, basta con señalar que Friedman rechazó categóricamente que el “realismo” de los supuestos, entendido como exactitud descriptiva, tuviese relevancia para la construcción de teorías. Según su enfoque, una teoría debía ser capaz de predecir comportamientos de agentes existentes, así fuese a partir de agentes inexistentes. Los primeros se comportarían *como si* fueran como los segundos. Vale notar que ello implica rechazar de plano cualquier forma de la doctrina del *Verstehen*.

A pesar de los inconformes con los argumentos de Friedman, muy posiblemente las consistencia lógica que exige el lenguaje matemático y el desarrollo paralelo (e incipiente) de la econometría condujo a muchos a compartir su visión instrumental de

la teoría. La única razón para abandonarla sería que careciera de poder predictivo. Y justamente sobre este punto KT desarrollaron sus ideas, siguiendo un método de investigación radicalmente distinto al utilizado por los economistas de filiación neoclásica.

Según Kahneman, Slovic y Tversky (1982/2001: xi-xiii), sus trabajos se insertaron inicialmente en un nuevo paradigma dentro de la psicología: la psicología cognitiva, interesada en “procesos internos, limitaciones mentales y en el modo como los procesos son formados por las limitaciones”. Reconocen la influencia de Paul Meehl, quien inició la comparación de las predicciones clínica y estadística, de Ward Edwards, quien introdujo en la psicología el estudio de la probabilidad subjetiva dentro del paradigma bayesiano, y de Herbert Simon y Jerome Bruner, quienes iniciaron el estudio de las heurísticas y estrategias de razonamiento y de racionalidad limitada. Evidentemente, KT no tenían ningún compromiso con el método axiomático y deductivo que subyace en la economía neoclásica.

Para estudiar el alcance de la teoría de la maximización de la utilidad esperada, por ejemplo, Kahneman [KT(2000:x)] recuerda la siguiente rutina: “nos encontrábamos todas las tardes por varias horas, que pasábamos inventando interesantes pares de apuestas y observando nuestras propias preferencias intuitivas. Si estábamos de acuerdo con la misma elección, provisionalmente suponíamos que era una característica de la humanidad y nos dedicábamos a investigar sus implicaciones teóricas, dejando la verificación seria para después”. Tal verificación frecuentemente se limitaba a someter tales apuestas a sus colegas y estudiantes (y a sus lectores), y a tomar nota de cuántos seguían el comportamiento descrito por la teoría neoclásica y cuántos no. KT (1979/2000:19) llamaron a este método “de las elecciones hipotéticas”. Les pareció “el procedimiento más simple por el cual un gran número de problemas teóricos pueden ser investigados” a pesar de “obvias dudas” con respecto a su validez y a cuán generales sean sus resultados. Prefirieron no investigar “elecciones reales”, porque ello requeriría estudios de campo o experimentos de laboratorio. Los primeros sólo podrían ofrecer “crudas pruebas de predicciones cualitativas”, y los resultados de los segundos tendrán una interpretación “complicada”, porque requerirían muchas repeticiones de apuestas artificiales con premios pequeños.

La descripción del método de las elecciones hipotéticas recuerda un poco la doctrina del *Verstehen*. Según KT(1979/2000:19-20), “si las personas son razonablemente certeras al predecir sus elecciones, la presencia de violaciones sistemáticas de la teoría de la utilidad esperada en problemas hipotéticos provee presumible evidencia contra dicha teoría”. Para lograrla bastaban dos supuestos: primero, que las personas generalmente sepan cómo se comportarían en situaciones de elección en el presente, y segundo, que los sujetos no tengan razón especial para disfrazar sus verdaderas preferencias.

Para estudiar otros problemas, los autores siguieron otros caminos. Por ejemplo, para estudiar el exceso de confianza en el juicio humano (“asignaciones no calibradas

de probabilidad que no son justificables por el conocimiento del juez”), KT (1995/2000:474) dividen a sus “participantes” en cuatro grupos: a uno entregan la información disponible antes de iniciar un juicio en una corte federal. A otro entregan la misma información y los argumentos de la defensa. A un tercero, dicha información y los argumentos del abogado acusador. Al último se entregan todos los documentos. Luego se pide a cada grupo emitir un veredicto y se comparan entre sí. En otros trabajos, con la intención de “examinar violaciones de la regla de monotonía temporal” y las diferencias entre lo anticipado, lo experimentado y lo recordado, Kahneman (1993/2000:796) llevó a cabo experimentos que le permitieron conocer las preferencias de voluntarios (pagados), expuestos al contacto con agua a diferentes temperaturas, y de pacientes sometidos a procedimientos médicos de duración y dolor variables.

Los resultados de los trabajos de Kahneman y Tversky y sus extensiones son muy variados. Una primera idea de sus implicaciones es ofrecida por Kahneman (2002:451-452). Teniendo en cuenta que no todos los “contenidos mentales vienen a la mente” con la misma facilidad, el autor distingue entre impresiones y juicios. Las impresiones son generadas a través de la percepción y la intuición, de modo rápido, involuntario y asociativo, sin esfuerzo y por medio de un proceso de lento aprendizaje. Los juicios, por otra parte, son generados a partir del razonamiento. Tal proceso es lento, regulado y controlado, y requiere esfuerzo. La intuición y el razonamiento implican representaciones conceptuales necesariamente diferentes. Debido a la accesibilidad diferencial de los distintos “contenidos mentales”, aun individuos profesionalmente orientados hacia el razonamiento pueden sufrir su supresión automática y su sustitución por la intuición cuando se requiere un juicio. Por ello, una teoría que requiere del razonamiento permanente comete errores sistemáticos de predicción. No tiene poder descriptivo, y su importancia se limita a sus recomendaciones normativas.

Por supuesto, el potencial destructivo [y seguramente creativo, ver Thaler (1993), por ejemplo] de los trabajos de KT es notable. Simon, citado por Ariel Rubinstein (1998:187), aplaude los trabajos empíricos de ambos psicólogos y critica a quienes procuran construir modelos con racionalidad acotada en lugar de intentar “descubrir” principios que gobiernan fenómenos observables. Rubinstein (1998:4), luego de sus destacados aportes a la teoría de juegos, reconoce la importancia de los trabajos de KT y se pregunta si “¿hay algo fundamental que nos impide construir modelos útiles de racionalidad acotada, o nuestros modelos convencionales nos han ‘lavado el cerebro’?”. Para Rubinstein, abandonar el concepto de racionalidad podría conducir a una arbitrariedad estéril, porque rompería las cadenas que imponen una mínima disciplina sobre el modelador.

Entre los autores que han intentado incorporar la noción de racionalidad acotada en el modo matemático (aun tradicional) de abordar los problemas económicos, destaca Thomas Sargent (1993). Luego de aportes significativos a la teoría de las expectativas racionales, Sargent (1993:2) inicia un libro titulado *Bounded Rationality in*

Macroeconomics defendiendo la aproximación formal a los problemas económicos: “irónicamente, cuando los economistas hacemos a las personas de nuestros modelos más ‘acotadas’ en su racionalidad y más diversas en la comprensión de su ambiente, *nosotros* debemos ser más inteligentes, porque nuestros modelos pasan a ser más grandes y más demandantes matemática y económicamente”. Puesto que su enfoque es optimizador, y recurre a las teorías de redes neuronales y de inteligencia artificial, no sorprende que no cite a KT, ni que haga referencia a más de uno de los trabajos de Simon.

No todos los adeptos a las propuestas de Simon se sienten cómodos con las ideas de KT. Gerd Gigerenzer y Reinhard Selten (2001), por ejemplo, niegan por igual a Sargent y a KT haber contribuido a profundizar las ideas propuestas por Simon. Según Gigerenzer y Selten (2001:5-6), KT han “documentado discrepancias entre una ‘norma’ (por ejemplo, una ley de probabilidad o de lógica) y el juicio humano [, condenando] a la mente humana en vez de a la norma”. Para los críticos, la teoría original de la racionalidad acotada ya se separaba de las nociones de optimización, utilidad y probabilidad, y procuraba “proveer una alternativa a las normas actuales” más que aceptar las “normas actuales y estudiar cuándo los humanos se desvían de ellas”. Para “repensar las normas” es necesario “estudiar el comportamiento actual de mentes e instituciones”, esto es, tener en cuenta tanto las limitaciones cognitivas de los individuos como la estructura del ambiente en el cual toman sus decisiones. GS no creen que el enfoque de KT haya tenido suficientemente en cuenta el papel de las emociones, la cultura y el ambiente en sus estudios.

El lector que se aproxime a los trabajos de KT se encontrará a sí mismo en medio de una compleja discusión metodológica que ha durado más de un siglo y está lejos de concluir. Afortunadamente, sus casi siempre breves y poco matemáticos artículos han propuesto nuevos problemas y apuntado a variadas aplicaciones que hacen provechosa su lectura. Sea cual sea la posición del lector, las advertencias y sugerencias de KT son elegantes y persuasivas, y sorprendentemente familiares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blaug, M. (1985) *La metodología de la economía*, España, Alianza Universidad, pp 326
- Friedman, M. (1953), “The Methodology of Positive Economics”, en *Essays in Positive Economics*, USA, The University Chicago Press, págs 3-43
- Gigerenzer, G. y R. Selten [Ed.] (2001) *Bounded rationality: The adaptive toolbox*, USA, MIT Press, 377 pp
- Hogarth, R.M., y M.W. Reder [Ed.] (1986/1987); *Rational choice: The contrast between economics and psychology*, USA, The University of Chicago Press, 322 pp
- Kahneman D. (1993) “New Challenges to the Rationality Assumption” en: *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, (150:1); 18-36. También publicado

- en: Kahneman D. y A. Tversky (2000); p 758-774. Kahneman, D. (2002) "Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice" *Nobel Prize Lecture*, Princeton University, Department of Psychology, 41 pp. [Disponible en www.nobel.se/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf]
- Kahneman D. y A. Tversky (1979) "Prospect Theory. An Analysis of Decision under Risk" en: *Econometrica*, (47:2); 263-91. También disponible en: Kahneman D. y A. Tversky (2000); p 14-43.
- Kahneman D. y A. Tversky (1995) "Conflict Resolution. A Cognitive Perspective" en: *Barriers to Conflict Resolution*. También publicado en: Kahneman D. y A. Tversky (2000); p 473-487.
- Kahneman, D., P. Slovic y A. Tversky [Ed.] (1982/2001); *Judgment under uncertainty: heuristics and biases*, USA, Cambridge University Press, 555 pp
- Kreps, D. (1995), *Curso de Teoría Microeconómica*, España, Mc Graw-Hill, 752 págs [de la Primera Edición en inglés, 1990]
- López, T., "Comprensión" en Reyes, R. (Dir): *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales*, Universidad de Salamanca Disponible en <http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comprehension.htm>
- Popper, K. (1994) *Búsqueda sin término. Una autobiografía intelectual*, Madrid, Editorial Tecnos. S.A., 287 pp
- Rubinstein, A. (1998). *Modeling Bounded Rationality*, USA, MIT Press; 208.
- Sargent, T. J. (1993). *Bounded Rationality in Macroeconomics*, USA, Oxford University Press; 182.
- Simon, H. (1978) "Rational Decision-Making in Business Organizations" *Nobel Prize Lecture*, 29 pp. [Disponible en <http://nobelprize.org/economics/laureates/1978/simon-lecture.pdf>].
- Thaler, R. [Ed.] (1993) *Advances in behavioral finance*, USA, Russell Sage Foundation Nueva York, 597 pp.

Ronald Balza Guanipa²

2 Hace una década, M.J. Cartea exponía a estudiantes y profesores venezolanos las ideas de Simon, Kahneman, Tversky y Thaler, y de otros autores que cuyos trabajos abarrotaban su biblioteca. Las compartía con entusiasmo contagioso y retador. Antes que él, no supe que alguien lo hiciera. Después de él, tampoco lo he sabido. Aunque no se estile, deseo dedicar esta breve reseña a su memoria.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
CALLE 24 DE ABRIL 1000, CARACAS
TELÉFONO: 235 2121
BOULEVARD DE LA UNIÓN 1000, CARACAS
TELÉFONO: 235 2121

MENDEZ, CHARO
Responsabilidad Social en Venezuela durante el siglo XX
Strategos consultores, Caracas 2003



Si observamos con atención los diferentes comerciales que actualmente se presentan en la televisión nacional, podemos notar que existe un conjunto de anuncios cuya finalidad no es vendernos un producto, sino informar sobre las diversas obras de ayuda o asistencia social que ha realizado la empresa. Podríamos pensar que esas acciones son novedosas en nuestro país. Sin embargo Charo Méndez, en su obra *Responsabilidad Social en Venezuela durante el siglo XX*, demuestra que la labor de responsabilidad social empresarial está presente en Venezuela al menos desde el año 1900, y además muestra las diferentes concepciones que han existido en el país sobre responsabilidad social. De tal manera que concentra en la obra un conjunto de datos esenciales para todo aquél que esté interesado en el tema y necesite conocer quiénes emprendieron la tarea, cómo lo hicieron, qué hacen actualmente.

El libro está dividido en dos partes; la primera se titula *Panorama de las iniciativas y concepciones sobre responsabilidad social empresarial en Venezuela durante el siglo XX*, allí se expone la historia de la responsabilidad social en Venezuela y se muestran los diversos conceptos que se han manejado sobre el tema. La segunda parte denominada *Aproximación metodológica a la responsabilidad social empresarial en Venezuela*, donde presenta los beneficios de la responsabilidad social, los instrumentos que se han utilizado para medirla, las diferentes modalidades que tienen los empresarios para ejecutar esta tarea y, por último, un *índice de iniciativas sociales* empresariales.

En el primer capítulo Méndez explica cómo nace y se desarrolla la responsabilidad social empresarial en Venezuela dentro del contexto histórico del país. En el primer período (1910 – 1930), los grandes empresarios venezolanos abren en sus empresas un espacio para ofrecer asistencia social. Este tipo de acción fue impulsada por el modelo de las empresas petroleras extranjeras, las cuales además de traer innovaciones tecnológicas, introdujeron en el área corporativa nacional una “nueva forma de relación

entre empresa - sociedad” (p. 141). Esta transformación se refiere a la responsabilidad social cuyo objetivo principal en aquel tiempo consistía en cubrir las necesidades y demandas de los empleados.

Entre 1930 y 1960 la actuación de las empresas en el sector social se amplía al dejar de referirse sólo al ámbito interno, para encargarse de zonas externas a la empresa. Aunque anteriormente existían algunos propietarios de comercios que colaboraban con grupos de ayuda social, en este período el apoyo a las comunidades se va a potenciar; especialmente con la creación de la figura jurídica de “fundación”, con la cual se erigen instituciones como la Fundación Venezolana Contra la Parálisis Infantil, entre otras iniciativas financiadas por el sector empresarial para diversas obras sociales.

La autora propone que en la década entre 1960 y 1970, los empresarios se plantean cambios en la concepción de responsabilidad social, producto tanto de la inquietud por la orientación del Estado a intervenir directamente en la vida económica, como por los resultados de un estudio presentado por Arturo Uslar Pietri en 1963 en el que exponía una imagen negativa de las empresas en la población. Ambos motivos refuerzan la necesidad de construir una idea de responsabilidad social más sólida. Seguidamente se inician reuniones entre los empresarios para determinar las áreas sociales que iban a asistir y cómo las iban a atender.

En el Primer Seminario Internacional De Ejecutivos (1963) se establece la primera definición de responsabilidad social empresarial: se entiende que abarca tanto áreas internas como externas de la empresa. Internamente el compromiso social consistía en mejorar la atención a los consumidores, procurar productos a bajos precios, y velar por los beneficios de los empleados. Externamente el deber de la empresa era cooperar con las comunidades aledañas a ellas, defender la democracia como sistema político y, sobre todo, respaldar la educación de grupos en estado de pobreza.

Un cambio económico va a impedir que la responsabilidad social empresarial extienda sus objetivos a zonas que aún no habían sido cubiertas, específicamente la salud y la cultura. Entre 1970 y 1980 se produce la nacionalización de la industria petrolera y, por tanto, se reduce la inversión social extranjera, con lo cual se debilita el apoyo social por parte del sector privado; la responsabilidad social empresarial queda casi en su totalidad en manos de PDVSA. Paralelamente a esta situación, surgieron las “fundaciones corporativas” que trabajaron especialmente el tema del cuidado ambiental y el sector cultural, con lo cual promocionaban sus empresas e intentaban obtener beneficios del Estado.

Entre 1990 y el año 2000, la apertura petrolera trajo nuevas empresas extranjeras cuya responsabilidad social se dirigía a atender el ámbito local. Producto de la crisis bancaria y la prolongada crisis económica se reduce el empresariado nacional. A finales del siglo XX, la responsabilidad social es dirigida por empresarios particulares y

asociados, que decidieron tomar como áreas de inversión la educación, la cultura, la salud, el ambiente y la atención de la pobreza.

Una vez expuesto el proceso de surgimiento de la responsabilidad social en Venezuela, Charo Méndez se propone mostrar las diferentes concepciones sobre responsabilidad social empresarial que han existido. Propone seis definiciones, con las cuales muestra cómo la comprensión de la responsabilidad social ha madurado a lo largo del tiempo:

- *Producir como responsabilidad fundamental*: la responsabilidad de la empresa con la comunidad es fabricar productos de calidad, además debe crear empleos, y realizar contribuciones fiscales. Debe garantizar el bienestar de sus empleados y sus familiares, debe beneficiar a los propietarios de la empresa a los consumidores y el Estado. Por lo tanto para que esto ocurra se debe velar por una producción excelente y constante.
- *Trabajo social industrial*: es una visión de responsabilidad social que se restringe a la atención y beneficio de los empleados de la industria, especialmente de los obreros. Se intenta mejorar los salarios y beneficios, de tal manera que la empresa actúe como protectora de sus trabajadores.
- *Filantropía empresarial y corporativa*: esta concepción señala que la responsabilidad social empresarial consiste en la atención de las necesidades de una comunidad, por lo tanto la empresa atiende sectores externos a ella. Para tal fin se usan recursos financieros y no financieros.
- *Inversión social*: implica que la responsabilidad social sea menos asistencialista e invertir en programas que promuevan el desarrollo social en las comunidades y que no se limite a cubrir una necesidad. Esta versión es la más utilizada, aunque se le critica porque las empresas buscan con ella imagen, reputación o lealtad.
- *Gestión de impacto socio-ambiental*: el concepto tiene base sobre la teoría de desarrollo sustentable, tiende a ser la más utilizada por las petroleras y extractivas.
- *Ciudadanía corporativa*: la responsabilidad social de la empresa es su participación como actor fundamental en la vida del país, especialmente en asuntos públicos. Se le critica por originar dudas al participar en políticas públicas.

La concepción actual que la población venezolana tiene sobre la responsabilidad social se centra en los programas sociales que realizan las empresas hacia las comunidades. Sin embargo, para las empresas la responsabilidad social es un asunto más complejo; consiste en producir beneficios a un público determinado y también a la propia empresa. Según Méndez, los beneficios que genera la responsabilidad social se puede originar de diferentes elementos, entre ellos:

Público objetivo: con lo cual se podría beneficiar a los accionistas, a los trabajadores y sus familias, a los proveedores de productos usados por la empresa, los clientes, la comunidad, la industria y el Estado.

Alcances que reportan: beneficios comerciales que obtiene la empresa cuando cumple la ley y mantiene buenas relaciones con el público, *beneficios inmediatos* que adquiere la empresa cuando realiza actividades que favorecen a los consumidores y recibe ingresos directos por ventas, *beneficios de la expansión del interés propio* como educación y entrenamiento que le otorgan prestigio, y por último *beneficios de bien común* que se manifiestan cuando la empresa realiza acciones de desarrollo social.

Modalidades e instrumentos utilizados: si la empresa utiliza un *voluntariado corporativo*, puede reducir costos de investigación y desarrollo, motiva a los empleados y reduce costos internos. Si la empresa realiza *donaciones y mercadeo social*, se refuerza la imagen de la empresa, y se incrementan las ventas del producto, también se genera una disposición de la gente a pagar más por un producto. Si se utiliza la alternativa de *impacto socio-ambiental* la empresa crea relaciones con la comunidad, tienen el apoyo de autoridades locales y tienen menos interrupciones políticas.

Otros beneficios que nacen de la responsabilidad social son la *reputación* que logra acumular la empresa a través de las diversas acciones sociales y la deducción de impuestos. En cuanto a la reputación, se puede afirmar que le otorga a la empresa cierto prestigio en la comunidad en la que trabaja, en el país y entre otras empresas. Por otra parte las empresas en Venezuela pueden *reducir una parte de los impuestos* que deben pagar al Estado a través de la donación de una porción de ese tributo a organizaciones sin fines de lucro.

Las empresas deben realizar una evaluación de la labor social que realizan, para ello es utilizado un instrumento que tiene el nombre de *Balance Social*. La autora explica que la herramienta ayuda a calcular el grado o nivel de cobertura que la empresa realiza en las diversas áreas sociales o áreas de inversión social, ya sea educación, salud, ambiente, nutrición, entre otras.

En el último capítulo la autora resume las diferentes formas de llevar a cabo la responsabilidad social empresarial. Se presentan tres modalidades de intervención social, una de ellas es el *apoyo a terceros*, que se refiere a la ayuda que se puede prestar a un grupo a través de donaciones, patrocinios, becas, voluntariado corporativo, y mercadeo filantrópico. Otra modalidad es la mencionada *gestión compartida* que se refiere a la asociación entre diversas empresas para llevar a cabo el apoyo a un grupo. Se puede llevar a su término a través de alianzas, convenios de cooperación interinstitucional y asociaciones empresariales de membresía. Finalmente se encuentra la modalidad de *ejecución propia* la cual abarca programas y proyectos empresariales y fundaciones corporativas.

Para concluir, Méndez presenta ciertas recomendaciones para llevar a cabo los programas de responsabilidad social y presenta un apartado, con las diferentes iniciativas sociales empresariales, es decir un conjunto de asociaciones, ONGs y fundaciones que son asistidas por empresas.

Ileana Anciano Echenagucia

INDICADORES

Indicadores de salud

INDICADORES DE SALUD

MARÍA DI BRIENZA P.*

MORTALIDAD SEGÚN SEXO

- En el año 2002, la mortalidad masculina por todas las causas arrojó una tasa de 5,2 defunciones por cada mil, mientras que en la población femenina el nivel de la mortalidad se ubica en 3,6 por mil. Estas diferencias de género se han venido ampliando con el tiempo, en 1995 morían 137 hombres por cada 100 mujeres, actualmente el índice de sobremortalidad masculina es del orden de 145.
- Las enfermedades del corazón y el cáncer ocupan en este orden las dos principales causas de muerte que afectan tanto a la población masculina como a la femenina. En el año 2002 la tasa masculina de defunciones por enfermedades del corazón alcanzó a 100 muertes por cada 100 mil y la tasa femenina a 78 por 100 mil, registrando así valores inferiores a los observados en 1995, de 108 y 88 por cada 100 mil respectivamente. En cambio las muertes por cáncer más bien muestran una leve tendencia al aumento; actualmente la tasa masculina de mortalidad por esta causa es de 64 por 100 mil y la femenina es de 66 por cada 100 mil, en el año 1995 el nivel de esta tasa específica se ubicaba en 58 para los hombres y en 61 para las mujeres.
- En el resto de las principales causas de muerte que afectan a la población, hombres y mujeres comienzan a mostrar un patrón claramente diferenciado. Entre la población femenina son las enfermedades cerebrovasculares las que constituyen la tercera causa de defunción, oscilando su frecuencia alrededor de 33 decesos por cada 100 mil mujeres en el período observado; mientras que la diabetes representa la cuarta causa de defunción en este grupo poblacional y con una tendencia al aumento; en 1995 morían 21 mujeres por cada 100 mil debido a esta enfermedad, en el año 2002 la tasa de decesos por esta causa se incrementa a 27.
- Al contrario, entre la población masculina son las causas externas las que producen un mayor número de defunciones. Con respecto a éstas, se destaca el notable aumento observado en los últimos años en la incidencia de las muertes debidas a

* Sociólogo. Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

“homicidios y suicidios”, estas dos causas conjuntamente ascienden al tercer lugar, superando así en orden a las ocurridas por “accidentes de todo tipo”. En el año 1995 la tasa específica por “homicidios y suicidios” era de 34 por cada 100 mil, en el año 2000 se ubica en 58 para luego ascender a 62 en el año 2002, de manera que hoy día las muertes por estas causas representan el 12% del total de fallecimientos de este grupo de población.

Mortalidad infantil y de la niñez¹

- Durante el último tercio de la década de los noventa el nivel de mortalidad infantil comienza a evidenciar un más claro descenso, para ubicarse en 20,6 defunciones en promedio por cada mil nacidos vivos. Al inicio de la presente década (2000-2002) esta tendencia al aumento de la sobrevivencia infantil habría continuado, la tasa de mortalidad ha descendido a 17,8 por cada mil nacimientos y ello significa que el ritmo de disminución se ha mantenido en el orden de 14% si se compara con los valores registrados durante el trienio anterior (1997-1999).
- En cuanto a los componentes de la mortalidad infantil, los datos reportan que durante los años 2000 a 2002, la tasa de mortalidad neonatal se redujo en 7% con relación al trienio precedente (1997-1999), para ubicarse en 11,5 por cada mil nacimientos y representar así el 66% del total de muertes de menores de 1 año, en tanto que la tasa de mortalidad postneonatal disminuyó en 23% para alcanzar un valor de 6,4 por cada mil nacidos vivos. Ello sugiere que el descenso del nivel de mortalidad infantil observado en el país en los últimos años habría sido consecuencia de intervenciones mucho más eficaces dirigidas a evitar los decesos entre el primer mes y los 11 meses de vida.
- Al revisar la evolución de las causas de muertes más frecuentes en los niños menores de 1 año, se observa que son las enfermedades diarreicas y respiratorias las que acusan una mayor disminución de su incidencia durante el período 1995-2002. La tasa de decesos infantiles por enteritis y otras enfermedades diarreicas varió de 38 a 16 por cada 10 mil nacimientos y en cuanto a las muertes por neumonía la tasa disminuyó de 16 a 7 por cada 10 mil nacidos vivos. Pero aún estas enfermedades en conjunto son responsables del 13% del total de fallecimientos en este grupo de edad.

1 Es importante aclarar que las estadísticas de defunciones y nacimientos que se utilizan para el cálculo de las tasas de mortalidad que se presentan en este aparte no han sido evaluadas, por lo tanto no se ha precisado en qué medida los cambios observados pudieran estar afectados por los errores típicos de subregistro.

- El nivel de la tasa de mortalidad entre los niños de 1 a 4 años de edad también observa una disminución a partir de los últimos años de la década de los 90, para ubicarse en 1,0 por cada mil niños de esa edad en el período 2000-2002, lo que representa una reducción del 10% en comparación con el trienio precedente (1997-1999).
- En este grupo poblacional son las causas externas las que continúan produciendo el mayor número de muertes y con valores fluctuantes durante todo el período 1995-2002. Dentro del grupo de causas de muertes originadas por enfermedades infecciosas, son los decesos por enteritis y otras enfermedades diarreicas los que observan una más clara tendencia a disminuir, como lo evidencia la caída de la tasa específica para el año 2002, cuyo nivel se ha reducido en casi 30% con relación al año 1995.

ESTADO NUTRICIONAL DE LA NIÑEZ

- Entre la población menor de 5 años la prevalencia del déficit nutricional agudo se ha mantenido con leve fluctuaciones durante los últimos 10 años, en valores cercanos al 3%, no obstante se observa un repunte para el año 2002, a 3,7%. La evolución de la prevalencia del déficit nutricional crónico ha mostrado más bien una disminución a partir de 1999 para luego mantenerse prácticamente estable en los últimos tres años, de manera que estaría afectando actualmente al 13% de los niños en este grupo de edad. Con relación a la frecuencia de la malnutrición global, los reportes igualmente dan cuenta de su reducción a partir de 1999, pero en el año 2002 se registra de nuevo un incremento para ubicarse en 4,8 el porcentaje de niños con este tipo de déficit.

MORTALIDAD MATERNA

- De acuerdo a los datos que se disponen en el país de muertes de mujeres en edad reproductiva asociadas con el embarazo, parto o puerperio, resulta difícil establecer si se han dado progresos o no en cuanto a la disminución de sus niveles, puesto que parte de las variaciones observadas pueden responder a los problemas que se presentan para su registro. Durante los últimos 10 años las tasa de mortalidad materna habría aumentado para luego disminuir, pero en los últimos años vuelve a repuntar a niveles registrados a mediados de los noventa. En el trienio 2000-2002 la frecuencia de estos decesos fue en promedio 339, lo que se expresa en una tasa de 65 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos.
- La toxemia se mantiene como la principal causa directa de mortalidad materna en el país, en el año 2002 una de cada 3 mujeres falleció por esta causa; mientras que 1 de cada 10 decesos maternos fue provocado por complicaciones resultantes de

abortos y en similar proporción por hemorragias o por problemas ocurridos durante el parto. Muertes que en su mayor parte pudieron haberse evitado.

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES

DÉFICIT NUTRICIONAL

- **Desnutrición aguda:** proporción de menores de 5 años con peso para la talla inferior a dos o más desviaciones estándar de la mediana de referencia.
- **Desnutrición crónica:** proporción de niños menores de 5 años con talla para la edad inferior a dos o más desviaciones estándar de la mediana de referencia.
- **Desnutrición global:** proporción de niños menores de 5 años con peso para la edad inferior a dos o más desviaciones estándar de la mediana de referencia.

Tasa de mortalidad infantil: número anual de defunciones de menores de 1 año de edad por cada 1.000 nacidos vivos registrados en dicho año.

Tasa de mortalidad materna: número anual de muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, por cada 100.000 nacidos vivos registrados en dicho año.

La clasificación de causas de muertes maternas utilizada comprende los siguientes códigos:

- Aborto (CIE-9:630 -639. CIE-10:O00-O08)
- Hemorragia (CIE-9: 640, 641, 666. CIE-10: O20,O44-O46,O67,O72-O73).
- Toxemia (CIE-9: 642, 643. CIE-10:O10-O16,O21)
- Problemas en el parto (CIE-9: 650-665,667-669. CIE10: O30-O34,O36,O41-O42, O62-O66,O69,O71,O74-O75)
- Infecciones (CIE-9: 670. CIE-10:O85)
- Resto de causas directas (CIE-9: 644-646,671-676.CIE-10:O22-O24-O26, O48,O60,O86-O88,O90-O91,O95-O97)
- Causas indirectas (CIE-9: 647- 648. CIE-10:O98-O99)

Tasa de mortalidad neonatal: número anual de defunciones ocurridas antes de cumplir los 28 días por cada 1.000 nacidos vivos registrados en dicho año.

Tasa de mortalidad postneonatal: número anual de defunciones ocurridas entre 1 y 11 meses por cada 1.000 nacidos vivos registrados en dicho año.

Tasa de mortalidad de 1 a 4 años: número anual de defunciones ocurridas entre 1 y 4 años por cada 1.000 niños de ese grupo de edad.

Tasa de mortalidad de menores de 5 años: expresa la probabilidad de morir entre el nacimiento y los cinco años de edad por cada 1.000 nacidos vivos registrados.

Tasa de mortalidad por causa: número anual de muertes atribuibles a una causa específica en un grupo de población determinado por cada 10.000 o 100.000 personas de ese grupo.

Tasa específica de mortalidad por sexo: número anual de defunciones de uno de los sexos por cada 1.000 personas de ese sexo.

CUADRO 1
VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA POBLACION MASCULINA.1995-2002

Causas de muerte	Años							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Defunciones								
Enfermedades del corazón (CIE-9:393-398,402,404,410-429 CIE-10:105-109,111,113,121-151)	12.028	11.960	11.564	12.411	12.265	12.604	13.289	12.628
Cáncer (CIE-9:140-208,230-234. CIE-10:C00-C97)	6.466	6.715	6.986	7.124	7.470	7.691	7.919	8.094
Accidentes de todo tipo (CIE-9:E800-E949. CIE-10:V01-X59)	6.233	5.567	5.366	5.953	5.962	6.217	6.893	6.531
Suicidios y homicidios (CIE-9:E950-E969.CIE-10:X60-Y09)	3.781	3.888	3.510	3.535	4.760	7.034	7.327	7.899
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-9:430-438.CIE-10:I60-I69)	3.604	3.741	3.723	3.826	3.924	3.999	4.075	3.924
Tasas (por 100.000)								
Enfermedades del corazón (CIE-9:393-398,402,404,410-429 CIE-10:105-109,111,113,121-151)	108,3	105,6	100,1	105,4	102,2	103,1	106,7	99,6
Cáncer (CIE-9:140-208,230-234. CIE-10:C00-C97)	58,2	59,3	60,5	60,5	62,2	62,9	63,6	63,8
Accidentes de todo tipo (CIE-9:E800-E949. CIE-10:V01-X59)	56,1	49,1	46,4	50,5	49,7	50,8	55,3	51,5
Suicidios y homicidios (CIE-9:E950-E969.CIE-10:X60-Y09)	34,0	34,3	30,4	30,0	39,6	57,5	58,8	62,3
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-9:430-438 . CIE-10:I60-I69)	32,5	33,0	32,2	32,5	32,7	32,7	32,7	31,0
Defunciones principales causas	32.112	31.871	31.149	32.849	34.381	37.545	39.503	39.076
Defunciones totales	57.140	58.206	56.598	59.449	61.503	64.101	66.616	65.573
Tasa de mortalidad (por 1.000)	5,1	5,1	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,2

Nota: la serie de tasas fue recalculada utilizando las estimaciones y proyecciones de población con base al Censo 2001

Fuente: Defunciones: (1995-1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital*. Años respectivos.

(1997-2002) MSDS. *Anuario de Mortalidad*. Años respectivos. Población: INE. *Estimaciones y Proyecciones*

de Población. 2004. Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

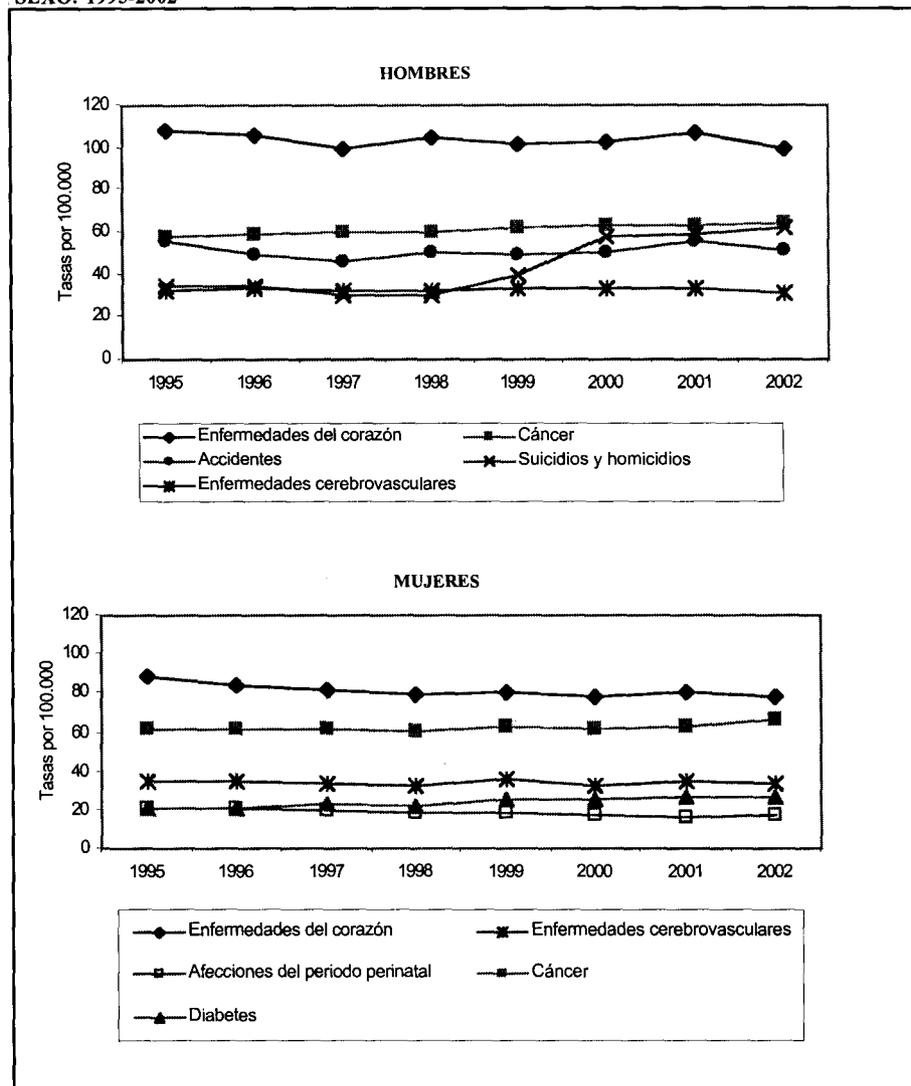
CUADRO 2
VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA POBLACION FEMENINA. 1995-2002

Causas de muerte	Años							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Defunciones								
Enfermedades del corazón (CIE-9:393-398,402,404,410-429). (CIE-10:105-109,111,113,121-151)	9.666	9.349	9.276	9.195	9.512	9.487	9.962	9.721
Cáncer (CIE-9:140-208,230-234).(CIE-10:C00-C97)	6.695	6.905	7.038	7.031	7.422	7.520	7.810	8.297
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-9:430-438).(CIE-10:160-169)	3.767	3.877	3.807	3.781	4.241	4.001	4.242	4.207
Diabetes (CIE-9:250).(CIE-10:E10-E14)	2.244	2.379	2.621	2.593	3.045	3.106	3.256	3.341
Ciertas afecciones del periodo perinatal (CIE-9:760-779).(CIE-10:P00-P96)	2.309	2.369	2.300	2.184	2.165	2.139	2.066	2.157
Tasas (por 100.000)								
Enfermedades del corazón (CIE-9:393-398,402,404,410-429). (CIE-10:105-109,111,113,121-151)	88,4	83,7	81,4	79,1	80,3	78,5	80,9	77,5
Cáncer (todas formas) (CIE-9:140-208,230-234).(CIE-10:C00-C97)	61,2	61,8	61,8	60,5	62,6	62,2	63,4	66,2
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-9:430-438).(CIE-10:160-169)	34,4	34,7	33,4	32,5	35,8	33,1	34,5	33,5
Diabetes (CIE-9:250).(CIE-10:E10-E14)	20,5	21,3	23,0	22,3	25,7	25,7	26,4	26,6
Ciertas afecciones del periodo perinatal (CIE-9:760-779).(CIE-10:P00-P96)	21,1	21,2	20,2	18,8	18,3	17,7	16,8	17,2
Defunciones principales causas	24.681	24.879	25.042	24.784	26.385	26.253	27.336	27.723
Defunciones totales	40.996	41.837	41.413	41.514	43.122	41.847	44.056	44.720
Tasa de mortalidad (por 1.000)	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6

Nota: la serie de tasas fue recalculada utilizando las estimaciones y proyecciones de población con base al Censo 2001

Fuente: Defunciones: (1995-1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital*. Años respectivos.
 (1997-2002) MSDS. *Anuario de Mortalidad*. Años respectivos. Población: INE. *Estimaciones y Proyecciones de Población*. 2004. Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

GRAFICO 1.
VENEZUELA. TASAS DE MORTALIDAD POR CINCO PRIMERAS CAUSAS SEGÚN
SEXO. 1995-2002



Fuentes: Cuadro 1 y 2

CUADRO 3
VENEZUELA. TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y DE LA NIÑEZ. 1991-2002

Años	Tasas de mortalidad				
	Infantil ^{1/}	Neonatal ^{1/}	Postneonatal ^{1/}	De 1 a 4 años ^{2/}	Menores de 5 años ^{1/}
1991	20,6	12,2	8,4	1,2	24,9
1992	22,0	13,5	8,5	1,1	26,3
1993	23,8	14,8	9,0	1,2	28,8
1994	24,8	14,1	10,7	1,3	30,1
1995	23,7	13,5	10,2	1,1	28,4
1996	23,9	13,8	10,1	1,3	29,7
1997	21,4	13,0	8,5	1,1	26,1
1998	21,4	12,4	9,0	1,2	26,5
1999	19,1	11,9	7,3	1,1	23,6
2000	17,7	11,5	6,2	1,0	21,9
2001	17,7	11,0	6,6	1,0	21,5
2002	18,2	11,9	6,2	0,9	22,5

^{1/} Expresada por 1.000 nacidos vivos registrados. ^{2/} Expresada por 1.000 niños de ese grupo de edad.

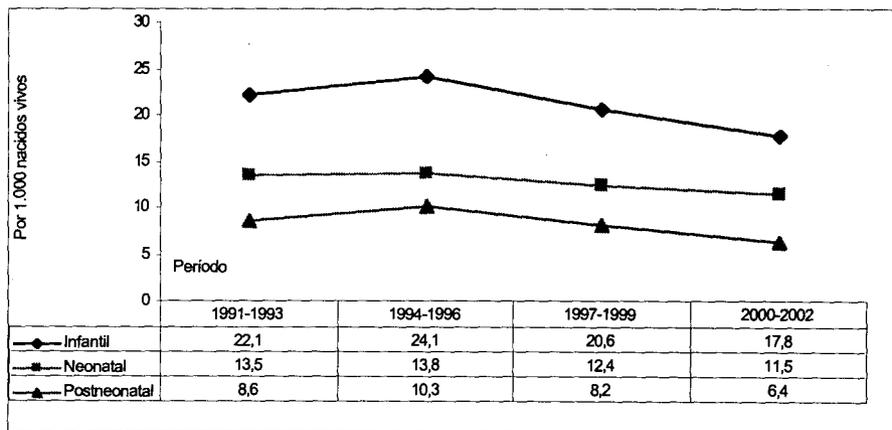
Fuentes: Defunciones: (1991-1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital*. Años respectivos.

(1997-2002) MSDS. *Anuario de Mortalidad*. Años respectivos. Nacimientos (1991-2001). INE. *Anuario Estadístico de Venezuela*. Años respectivos. (2002) INE. *Estadísticas de Nacimientos*. En: www.ine.gov.ve.

Población: INE *Estimaciones y Proyecciones de Población*. 2004.

Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

GRAFICO 2
VENEZUELA. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL. 1991-2002



Fuente: Cuadro 3

CUADRO 4
VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO, 1995-2002

Causas de muerte	Años							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Defunciones								
Ciertas afecciones del período perinatal (CIE-9:760-779 excep..771.3.CIE-10:P00-P96)	5.606	5.617	5.498	5.241	5.301	5.276	4.936	4.982
Enteritis y otras enfermedades diarreicas (CIE-9: 008-009. CIE-10:A08-A09)	1.974	1.778	1.380	1.382	1.055	895	863	768
Anomalías congénitas (CIE-9: 740-759. CIE-10:Q00-Q99)	1.379	1.342	1.386	1.307	1.400	1.413	1.460	1.470
Neumonías (CIE-9: 480-486. CIE-10:J12-J18)	843	602	599	625	522	430	510	347
Accidentes de todo tipo (CIE-9:E800-E949. CIE-10:V01-X59)	482	362	395	396	369	320	323	335
Deficiencias de la nutrición (CIE-9:260-269. CIE-10:E40-E64)	411	581	376	416	321	280	300	316
Tasas (por 10.000)								
Ciertas afecciones del período perinatal (CIE-9:760-779 excep..771.3.CIE-10:P00-P96)	107,7	112,8	106,4	104,4	100,4	96,9	93,2	101,1
Enteritis y otras enfermedades diarreicas (CIE-9: 008-009. CIE-10:A08-A09)	37,9	35,7	26,7	27,5	20,0	16,4	16,3	15,6
Anomalías congénitas (CIE-9: 740-759. CIE-10:Q00-Q99)	26,5	26,9	26,8	26,0	26,5	26,0	27,6	29,8
Neumonías (CIE-9: 480-486. CIE-10:J12-J18)	16,2	12,1	11,6	12,5	9,9	7,9	9,6	7,0
Accidentes de todo tipo (CIE-9:E800-E949. CIE-10:V01-X59)	9,3	7,3	7,6	7,9	7,0	5,9	6,1	6,8
Deficiencias de la nutrición (CIE-9:260-269. CIE-10:E40-E64)	7,9	11,7	7,3	8,3	6,1	5,1	5,7	6,4
Defunciones por principales causas	10.695	10.282	9.634	9.367	8.968	8.614	8.392	8.218
Defunciones totales	12.352	11.913	11.069	10.721	10.108	9.649	9.353	8.949

Fuentes: Defunciones: (1995-1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital*. Años respectivos.

(1997-2002) MSDS. *Anuario de Mortalidad*. Años respectivos. Nacimientos: (1995-2001) INE. *Anuario Estadístico de Venezuela*. Años respectivos. (2002) INE. *Estadísticas de Nacimientos*. En: www.ine.gov.ve

Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

CUADRO 5
VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS. 1995-2002

Causas de muerte	Años							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Defunciones								
Accidentes de todo tipo (CIE-9:E800-E949. CIE-10:V01-X59)	450	401	402	473	431	361	400	423
Enteritis y otras enfermedades diarreicas (CIE-9: 008-009. CIE-10:A08-A09)	383	538	374	424	342	283	284	273
Anomalías congénitas (CIE-9: 740-759. CIE-10:Q00-Q99)	224	208	199	211	217	247	267	244
Neumonías (CIE-9: 480-486. CIE10:J12-J18)	268	267	263	314	258	228	294	237
Deficiencias de la nutrición (CIE-9:260-269. CIE-10:E40-E64)	205	337	196	261	220	249	258	242
Cáncer (CIE-9 140-208,230-234.CIE-10:C00-C97)	112	135	109	105	97	119	136	100
Tasas (por 100.000 niños)								
Accidentes de todo tipo (CIE-9:E800-E949. CIE-10:V01-X59)	20,5	18,2	18,2	21,4	19,5	16,3	18,0	19,0
Enteritis y otras enfermedades diarreicas (CIE-9: 008-009. CIE-10:A08-A09)	17,4	24,4	17,0	19,2	15,5	12,8	12,8	12,2
Anomalías congénitas (CIE-9: 740-759. CIE-10:Q00-Q99)	10,2	9,4	9,0	9,6	9,8	11,2	12,0	10,9
Neumonías (CIE-9: 480-486. CIE10:J12-J18)	12,2	12,1	11,9	14,2	11,7	10,3	13,2	10,6
Deficiencias de la nutrición (CIE-9:260-269. CIE-10:E40-E64)	9,3	15,3	8,9	11,8	10,0	11,3	11,6	10,9
Cáncer (CIE-9 140-208,230-234.CIE-10:C00-C97)	5,1	6,1	4,9	4,8	4,4	5,4	6,1	4,5
Defunciones por principales causas	1.642	1.886	1.543	1.788	1.565	1.487	1.639	1.519
Defunciones totales	2.447	2.896	2.391	2.566	2.353	2.258	2.338	2.114

Nota: la serie de tasas fue recalculada utilizando las estimaciones y proyecciones de población con base al Censo 2001

Fuente: Defunciones: (1995-1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital*. Años respectivos.

(1997-2002) MSDS. *Anuario de Mortalidad*. Años respectivos. Población: INE. *Estimaciones y Proyecciones*

de Población. 2004. Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

GRAFICO 3
VENEZUELA. TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR LAS CINCO PRIMERAS CAUSAS. 1995-2002

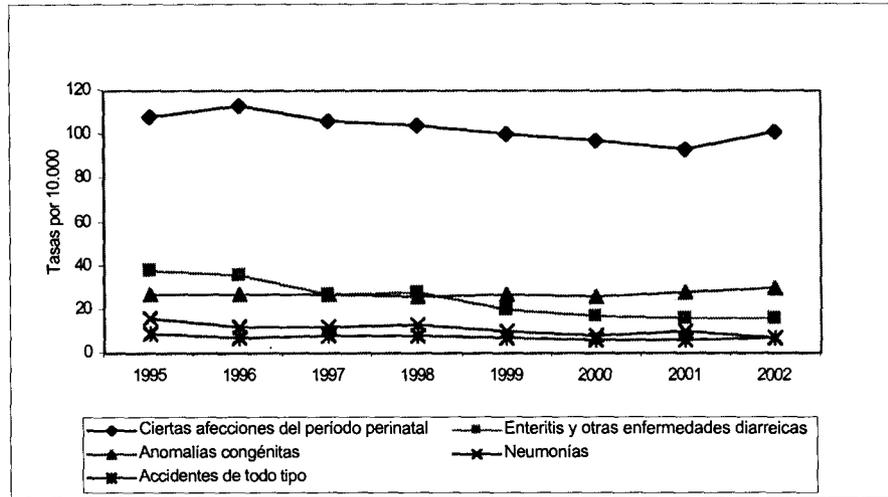
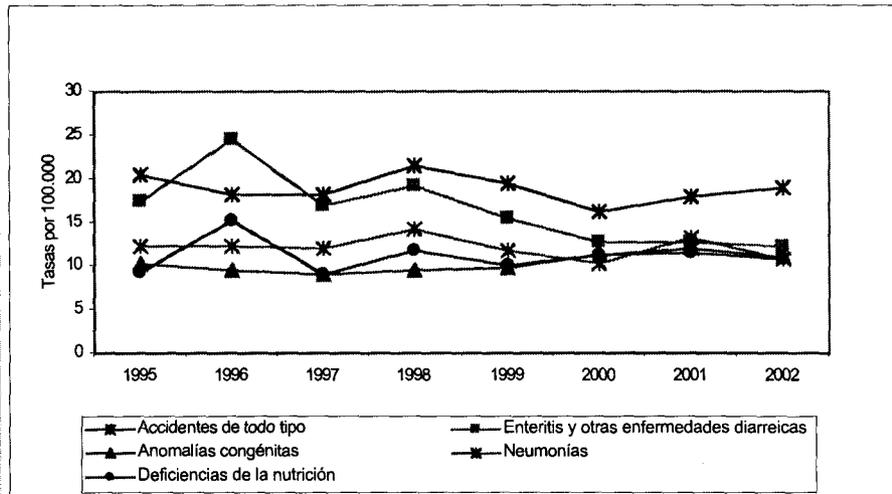


GRAFICO 4
VENEZUELA. TASAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1-4 AÑOS POR LAS CINCO PRIMERAS CAUSAS 1995-2002



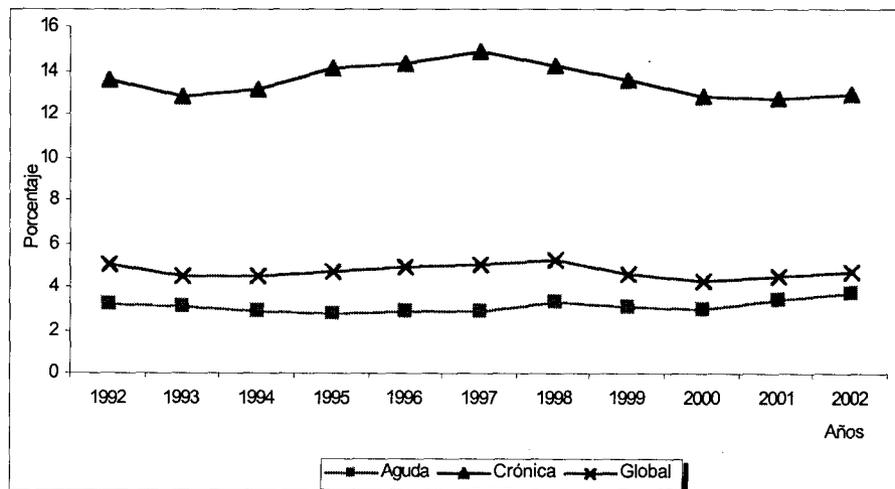
Fuente: cuadro 5

CUADRO 6
VENEZUELA. DEFICITS NUTRICIONALES EN MENORES
DE 5 AÑOS. 1992-2002.

Años	Porcentaje de malnutrición		
	Aguda	Crónica	Global
1992	3,3	13,6	5,1
1993	3,1	12,8	4,6
1994	2,9	13,2	4,5
1995	2,9	14,1	4,7
1996	2,9	14,4	5,0
1997	2,9	14,9	5,1
1998	3,4	14,3	5,3
1999	3,1	13,6	4,7
2000	3,0	12,8	4,4
2001	3,4	12,7	4,5
2002	3,7	12,9	4,8

Fuente: INN-SISVAN. Reporte. *Clasificación Antropométrica*
 Nutricional. Años respectivos

GRAFICO 5
VENEZUELA. PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION EN MENORES
DE 5 AÑOS. 1992-2002.



Cuadro 6

CUADRO 7
VENEZUELA. MORTALIDAD MATERNA. 1991-2002

Años	Defunciones	Tasa ^{1/}
1991	315	52,3
1992	299	53,4
1993	331	63,1
1994	383	69,9
1995	345	66,3
1996	301	60,4
1997	308	59,6
1998	256	51,0
1999	313	59,3
2000	327	60,1
2001	356	67,2
2002	335	68,0

1/ Expresada por 100.000 nacidos vivos registrados

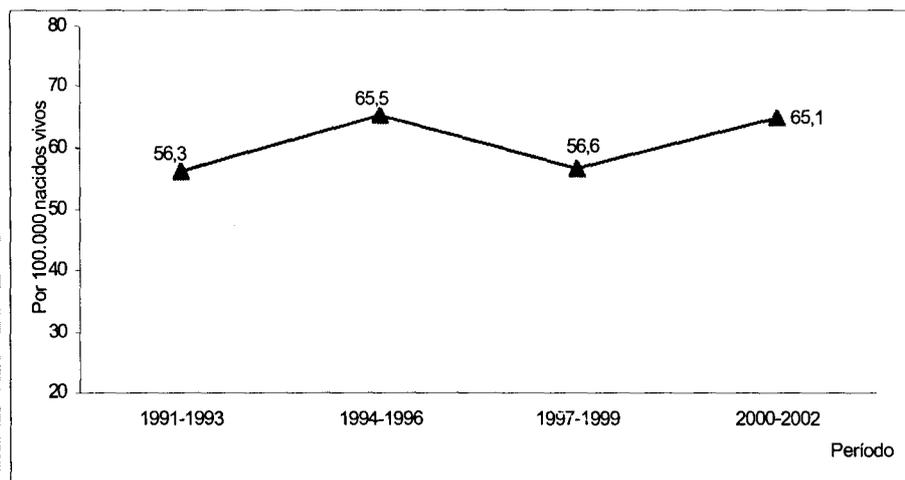
Fuentes: Defunciones: (1991-1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital* . Años respectivos. (1997-2002) MSDS. *Anuario de Mortalidad*.

Años respectivos. Nacimientos: (1991-2001) OCEL. *Anuario Estadístico de Venezuela* . Años respectivos. (2002) INE. *Estadísticas de Nacimientos* .

En: www.ine.gov.ve

Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

GRAFICO 6
VENEZUELA. TASA DE MORTALIDAD MATERNA. 1991-2002



Cuadro 7

CUADRO 8
VENEZUELA. CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA. 1995-2002

Causas de muerte	Años							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Defunciones								
Causas Directas	311	282	280	231	292	285	301	286
Aborto	55	46	47	53	43	41	56	38
Hemorragia	49	40	46	31	33	42	35	36
Toxemia	96	83	88	72	112	85	101	114
Problemas del parto	61	68	50	36	57	66	58	35
Infecciones	27	18	20	21	29	29	25	27
Resto de causas directas	23	27	29	18	18	22	26	36
Causas indirectas	36	19	28	25	21	42	55	49
Total	347	301	308	256	313	327	356	335
Distribución porcentual								
Causas Directas	89,6	93,7	90,9	90,2	93,3	87,2	84,6	85,4
Aborto	15,9	15,3	15,3	20,7	13,7	12,5	15,7	11,3
Hemorragia	14,1	13,3	14,9	12,1	10,5	12,8	9,8	10,7
Toxemia	27,7	27,6	28,6	28,1	35,8	26,0	28,4	34,0
Problemas del parto	17,6	22,6	16,2	14,1	18,2	20,2	16,3	10,4
Infecciones	7,8	6,0	6,5	8,2	9,3	8,9	7,0	8,1
Resto de causas directas	6,6	9,0	9,4	7,0	5,8	6,7	7,3	10,7
Causas indirectas	10,4	6,3	9,1	9,8	6,7	12,8	15,4	14,6
Total	100,0							

Fuentes: (1995 y 1996) MSAS. *Anuario de Epidemiología y Estadística Vital*. Años respectivos.

(1997-2002). MSDS. *Anuario de Mortalidad*. Años respectivos

Cálculos del Departamento de Estudios Demográficos del IIES-UCAB.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Temas de Coyuntura, junto a la Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, son las publicaciones académicas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Su objetivo se centra en divulgar estudios de actualidad relacionados con la problemática social, política y económica. A esta publicación le compete especialmente las áreas de: Economía, Demografía, Sociología, Politología y Relaciones Laborales

Normas editoriales a considerar por los autores en la elaboración de artículos, críticas bibliográficas y reseña de eventos para la revista *Temas de Coyuntura*.

a) Plazos para la entrega de trabajos

La Revista es Semestral (Junio y Diciembre), los artículos, críticas bibliográficas y reseña de eventos serán recibidos durante todo el año, y su publicación está supeditada a un proceso de arbitraje y a la decisión del Consejo Editorial.

b) Características y naturaleza de dichos trabajos

Artículos: la revista acepta en particular artículos que contengan investigación empírica que presenten innovaciones teóricas relacionadas a contenidos de actualidad.

Críticas Bibliográficas: es un comentario descriptivo o analítico de publicaciones recientes.

Reseña de Eventos: es un comentario descriptivo o analítico sobre eventos de académicos vinculados a las áreas que le compete.

c) Formato para la entrega y extensión de los trabajos

Los artículos deberán ser elaborados en un procesador de palabras (Word para Office 97 o compatible) y entregados en formato electrónico: diskette 3.5 ó adjuntos (attach) a un correo electrónico dirigido a lespana@ucab.edu.ve. De contener gráficos, tablas, mapas o fórmulas matemáticas (preferiblemente editor de ecuaciones 3.0 incluido en el Word) el autor debe asegurarse de enviar las especificaciones de la aplicación donde fueron desarrolladas, así como los archivos originales para facilitar su manejo.

La extensión máxima de los trabajos debe adecuarse a alguna de las siguientes categorías:

- Los artículos: hasta treinta (30) cuartillas (carta y doble espacio). El Comité Editorial podría admitir cierta flexibilidad de acuerdo al caso y el área temática.
- Las Críticas Bibliográficas: hasta cinco (05) cuartillas (carta y doble espacio)
- Los Eventos: hasta cinco (05) cuartillas (carta y doble espacio)

El autor debe incluir la siguiente información:

- Datos completos del autor y la institución a la cual pertenece incluyendo una hoja en la que figure una breve reseña curricular (no más de diez líneas) y un resumen del artículo entre cien (100) y ciento cincuenta (150) palabras.
- Cinco (05) palabras que el autor considere claves en el contenido del trabajo, con la finalidad de facilitar la inclusión de la publicación en los índices nacionales e internacionales (indización).

e) Referencias y citas y bibliográficas

Para las CITAS BIBLIOGRÁFICAS, se recomienda proceder como se indica a continuación:

Texto Principal: Apellidos, año de publicación y página

(Freitez, 2000, 30-35)

(Freitez et al, 2000, 25) varios autores

BIBLIOGRAFÍA

Libros: Apellidos y nombres, año, título, lugar, editorial

ORTIZ, Eduardo (1994); *Política Económica y Distribución del Ingreso*; Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Artículos y documentos en Revistas, prensa o folletos con o sin autor:

DIBRIENZA, María (1999); "Quiénes son y cómo lactan en Venezuela"; en *Temas de Coyuntura*, N°39/Junio, IIES-UCAB; pp. 35-45.

El Universal (1999): "La situación socio-económica actual"; 28 de Diciembre.

Este libro se terminó de imprimir en
Caracas en diciembre *del año 2004*,
en los talleres de
EDITORIAL TEXTO, C.A.